

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES



EL CANAL DE DIOS
Y LAS OBRAS PROYECTADAS PARA SU MEJORAMIENTO

Su marco jurídico

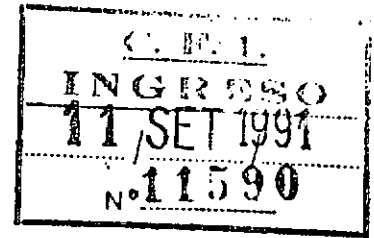
- Identificación
- Evaluación
- Propuestas para su fortalecimiento

por MARIO F VALLS

01435
VII
II

BUENOS AIRES , SEPTIEMBRE DE 1991

Mario F. Valls
Abogado



Buenos Aires, septiembre 6 de 1991.

Señor
Secretario General del
Consejo Federal de Inversiones
P R E S E N T E


Ref. Informe final. Canal de Dios. Exp. 1664

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para hacerle llegar el informe final del ANALISIS DE ASPECTOS JURIDICOS RELATIVOS A LOS PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CANAL DE DIOS-PROVINCIAS DEL CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO que he titulado "EL CANAL DE DIOS Y LAS OBRAS PROYECTADAS PARA SU MEJORAMIENTO. SU MARCO JURIDICO" que ese Consejo me encomendara realizar mediante contrato de locación de obra firmado el 14/7/1991.

Solicito se lo tenga por aceptado y se disponga el pago de la última cuota del precio pactado.

Quedo a disposición del señor Secretario General y del personal competente del CFI para formular las aclaraciones que puedan considerar necesarias para llevar a cabo las recomendaciones que en él formulo.

Saluda atentamente.


MARIO F. VALLS

Adjunto el informe en cuatro ejemplares

1

EL CANAL DE DIOS

Y LAS OBRAS PROYECTADAS PARA SU MEJORAMIENTO
SU MARCO JURIDICO

P R E S E N T A C I O N

A solicitud de las Provincias del Chaco y de Santiago del Estero, el Consejo Federal de Inversiones dispuso que se efectuase una identificación y evaluación del marco jurídico regulatorio tanto del Canal de Dios como de las obras complementarias-que el mismo Consejo está haciendo proyectar para su rehabilitación y acondicionamiento-y formular propuestas para su mejoramiento con miras a que el Canal cumpla debidamente su objetivo de abastecer de agua potable a las poblaciones chaqueñas situadas en su zona de influencia.

Al efecto encomendó su ejecución al Consultor Dr. Mario F Valls quien visitó a las autoridades de la Provincia del Chaco en el mes de julio próximo pasado y luego a las de Santiago del Estero en el mes de agosto con el objeto de verificar in situ la exactitud de la información obrante en su poder y recoger la opinión de las autoridades locales.

A fines de julio de 1991 el Consultor presentó su primer informe parcial que identifica y evalúa el marco jurídico aludido. Fué sometido a consideración de las técnicas del CFI y de las autoridades provinciales.

Tomando debida cuenta de esas observaciones el Consultor presenta ahora su informe final que, además de completar el preliminar, le agrega sus recomendaciones.

Consta de :

- a) Una síntesis del problema que motiva el estudio y de las soluciones que éste propone.
- b) El informe propiamente dicho, integrado por una identificación y evaluación del marco jurídico existente (Parte primera) y por propuestas de cursos de acción para su fortalecimiento (Parte segunda).
- c) Anexos que glosan la documentación que sirvió de base para elaborar el informe (I a IX) y la que se recomienda elaborar para canalizar las soluciones propuestas (X y XI).
- d) Las notas, que se glosan separadamente para no entorpecer la inteligencia de una propuesta que, por su naturaleza, no pudo limitarse al Canal de Dios sino que debió extenderse a toda la cuenca y eso la hace compleja y difusa.

Buenos Aires, septiembre de 1991.

La Provincia de Santiago del Estero construyó en los años 1977 y 1978 el Canal de Dios para llevar partes del caudal embalsado a varias poblaciones del norte de la Provincia. Como razones técnicas aconsejaron efectuar la derivación en el tramo del río que corre por Salta en las proximidades de San Miguel, unos 5 Km antes de llegar al límite con Santiago del Estero, esta última Provincia obtuvo de la anterior autorización para construir la obra de toma y el tramo del canal que corre por su territorio sin otro compromiso que (Acuerdo de Salta del 16/3/1978, Anexo II):

a) Tomar a su cargo el costo de las obras y los trabajos;

4

b) Compensar al gobierno de Salta el costo de las expropiaciones que efectue a su pedido para ejecutar las obras y los trabajos. Posteriormente el Gobierno de Santiago del Estero concedió al del Chaco sin término prefijado un cupo de agua a tomar del punto terminal del Canal de Diós para atender usos humanos y domésticos de poblaciones próximas que carecían en absoluto de agua (Anexos III a V). Además lo autorizó a efectuar obras de conducción de agua dentro de Santiago del Estero y para reparar la captación existente en la Provincia de Salta (Anexo V).

A pesar de los acuerdos y las obras realizadas, solo en un principio llegó el agua a la población chaqueña de Río.

Muerto. Ello puede atribuirse a:

a) La disminución de la capacidad de conducción del canal motivada por la calidad de los terrenos que atraviesa, el entorpecimiento de la conducción por materiales que el agua arrastra, por la falta de mantenimiento y porque el canal es descubierto.

b) El incremento de las derivaciones en el tramo santiagueño del canal para atender un crecimiento poblacional que ha sido inducido en parte por la operación del canal.

La falta de agua en el canal perjudica a la Provincia del Chaco por cuanto:

a) Priva a poblaciones situadas en el desierto chaqueño de la fuente de provisión de agua que tienen derecho a usar.

b) Posterga la recuperación de inversiones ya realizadas por el Gobierno de la Provincia.

c) Impide el acceso de la Provincia a la financiación del COFAPYS por la inseguridad en la disponibilidad de agua que el organismo ambiental federal cree advertir. (Anexo VIII).

XVI
Las conclusiones de la Parte Primera , que se glosan en apartado XVI son,,sintéticamente:

La armonía y cooperación existente entre las provincias de la cuenca facilitan los acuerdos necesarios para destrabar cualquier obstáculo jurídico para que el agua llegue a las poblaciones chaqueñas que la esperan.

El marco jurídico regulatorio del acueducto en sí es apto para asegurar la provisión de agua,pero se han presentado algunas dudas respecto a su inteligencia que están postergando el financiamiento de algunas obras,por lo que conveniría adecuarlo para despejar esas dudas.

También requiere un fortalecimiento el regulatorio de toda la cuenca,aun cuando sea mas eficaz aún que el que norma el resto de las cuencas interprovinciales del país.

La Parte Segunda advierte que las razones que obstan a la llegada del agua al Chaco son mas prácticas que jurídicas y reiteradas en la experiencia hídrica,por lo que propone algunas medidas jurídicas y otras prácticas que se glosan en su apartado VI y pueden resumirse en :

a)Reactivación de los organismos de coordinación existentes en la cuenca y creación de uno o mas consorcios de municipios usuarios.

b)Comunicación formal de todas las obras y proyectos a las demás provincias de la cuenca y concertación con ellas de normas jurídicas regulatorias.

c)Acuerdo entre la Provincia del Chaco y la de Santiago del Estero para reacondicionar el Canal de Dios y adecuar los acuerdos y actividades al código de aguas de esta última Provincia.

EL CANAL DE DIOS Y LAS OBRAS PROYECTADAS PARA SU MEJORAMIENTO

SU MARCO JURIDICO

PARTE PRIMERA : IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL MARCO JURIDICO EXISTENTE

I. EL RIO PASAJE-JURAMENTO-SALADO.

El río del cual se abastece el Canal de Dios es típicamente interprovincial. Su cuenca imbrífera se encuentra en las Provincias de Catamarca, Tucumán y, principalmente en la de Salta; corre luego por la de Santiago del Estero y se insume parcialmente en los bañados de Figueroa y Añatuya para luego atravesar la Provincia de Santa Fé y desaguar en el Paraná. Pertenece, en consecuencia a la cuenca del Plata, que es internacional.

II. DOMINIO Y JURISDICCION.

En consecuencia su agua y su cauce pertenecen a las provincias por las que corre. Así lo dispone el art. 2340 del código civil y el 104 de la Constitución Nacional que reserva a las provincias todo el poder no delegado y el que expresamente se hubieran reservado al tiempo de su incorporación. En ejercicio de esas atribuciones pueden celebrar tratados entre ellas con fines económicos y para trabajos de utilidad común (Art. 107 C.N.).

La doctrina coincide en que el dominio del agua corresponde siempre a las provincias por las que corre, salvo la opinión de tratadistas antiguos como Baldomero Llerena 1/, Manuel F. Castello 2/

para el caso de los ríos navegables y la de Julio Oyhanarte 3/
para el caso en que sean necesarios para la prestación de un
servicio público nacional, como es el suministro de energía.

El Poder Ejecutivo Nacional reconoció ese dominio cuando reglamentó la extracción de áridos del lecho de los ríos 4/, lo mismo hicieron los dictámenes de la Procuración General de la Nación 5/ y la Corte Suprema de la Nación en autos Gobierno Nacional y Cía del Puerto de Rosario c/Provincia de Santa Fé. 6/.

Lo que detenta en diversas materias el Gobierno de la Nación es la jurisdicción sobre los ríos. La Constitución se la atribuye explícitamente en materia de navegación (Art. 67 inc. 9), en materia comercial interprovincial e internacional (Id. inc. 12) y en materia de límites (Id. inc. 14); la ley 13030 en materia de ríos interprovinciales y la ley 15336 federal de energía eléctrica en algunos casos de generación hidroeléctrica.

Las provincias no pueden transferir agua del dominio público al privado ni a la inversa porque eso compete el código civil ni degradarlas (Ley 2797) ni usarlas o tratarlas de modo que perjudiquen a otras provincias (Art. 109 C.N.).

III EL TRATADO DE CABRA CORRAL (SALTA-S. del ESTERO, 12/2/1965).

Ambas provincias acordaron las siguientes bases para la financiación, construcción, operación y mantenimiento de la presa de embalse de Cabral Corral que el Gobierno Nacional construyó en la Provincia de Salta:

a) El agua del embalse se destinará exclusivamente a (Art. 2):

1. Uso doméstico y sanitario.

2. Riego.

3. Generación eléctrica.

b) Se dará preferencia al uso doméstico y sanitario sobre el riego; ambos tendrán preferencia sobre la electricidad hasta que se hubieran construido las presas compensadoras correspondientes en cuya oportunidad la preferencia se dará a la electricidad (Art. 2).

c) Se tomó como base para distribuir el agua una disponibilidad de 900 Hm³ aproximadamente anuales. Sobre esa base se atribuyó el 57% de las erogaciones anuales a Salta y el 43 % a Santiago del Estero medidas en los órganos de descarga de la presa (Art. 6).

d) Cada Gobierno provincial otorgará las concesiones y permisos adecuados dentro de sus jurisdicciones respectivas (Art. 4) conforme a los siguientes parámetros:

1. Solo se otorgarán concesiones eventuales para riego cuando la provisión de las concesiones empadronadas como permanentes esté asegurada (Art. 11 inc. b).

2. No se realizará acto alguno que disminuya los caudales asignados a cada provincia (Id. inc. c).

3. Las obras de derivación y conducción que construya Agua y Energía Eléctrica se dimensionarán para usar exclusivamente los caudales erogados por la presa, pero si alguna de las provincias desea aumentar las secciones para conducir caudales no regulados deberá tomar a su cargo los mayores costos que ello implique (Art. 18)

4. Cada provincia podrá dar al agua el uso que ella establezca o determine (Art. 19 inc. b).

5. Ninguna provincia podrá excederse en las proporciones que le asigne cada programa anual si ese exceso priva a la otra de agua

que el programa le asigna(Id.inc.c);

6.La falta de utilización de todo o parte del agua asignada a cualquiera de las provincias no podrá interpretarse como renuncia ni abandono ni hará perder el derecho al cupo(Id.inc.e).

El Tratado declara expresamente que la central hidroeléctrica de Cabra Corral es de jurisdicción nacional(Art.20)lo que no hace otra cosa que ratificar lo dispuesto por las leyes 15336,art. 6 (interconexión)y 17004(servicio eléctrico público prestado por un ente especializado del Estado Nacional).

Agua y Energía Eléctrica se comprometió a construir y operar por su cuenta y cargo:

- a)La presa de embalse Cabra Corral,las presas compensadoras y las centrales hidroeléctricas(Arts.5 y 18)
- b)Las obras de captación y derivación necesarias para que Salta extraiga los caudales que le corresponden según el Tratado(Art.5).
- c)Una obra de conducción impermeabilizada entre las proximidades de El Tunal y el embalse de Figueroa para los caudales que correspondan tanto a Salta como a Santiago del Estero(Art.5).

El Tratado crea una Comisión Interprovincial integrada por un representante de cada provincia y otro de Agua y Energía Eléctrica con el cometido,entre otros,de practicar estudios y aforos,determinar las erogaciones anuales del embalse y controlar el escurrimiento,captación y utilización del agua del río(Arts.12/15).

IV.EL COMITE DE CUENCA

Además de la Comisión Interprovincial referida precedentemente, las provincias de Catamarca,Jujuy y Santiago del Estero en un primer momento y luego adhirieron Salta y Tucumán,acordaron con la ex-Secretaría de Estado de Recursos Hídricos de la Nación crear comités de cuencas hídricas integrados por delegados de las pro-

vincias de cada cuenca y presididos por la ex-Secretaría 7/.

Las atribuciones y funciones de estos comités son: propiciar normas tendientes a coordinar la acción que en materia de agua cumplen los organismos nacionales, provinciales e interprovinciales con relación a la cuenca; asesorar y proporcionar información a solicitud de la Secretaría de Estado de la Nación competente en materia de agua, supervisar la recopilación y elaboración de datos meteorológicos, hidrológicos, hidrográficos e hidrométricos; promover estudios e investigaciones para evaluar el uso de los recursos hídricos; formular recomendaciones y elaborar el plan de trabajo a desarrollar. Administrar sus fondos y dictan su reglamento interno (Tratado de San Salvador de Jujuy del 18/2/1971, Art. 3). Los representa su Presidente que es el representante de la Secretaría de Estado de la Nación competente. Además, pueden crear un comité asesor y ^{un} subcomité para cada subcuenca o tramos del río principal (Id. Arts. 5 y 6).

Sus recursos financieros provienen de aportes de la Nación, las provincias que los integran y los que voluntariamente hagan otros organismos públicos (Id. Art. 8).

Tienen personería jurídica ya que constituyen una prolongación de los Estados que los instituyen.

En cumplimiento del Tratado aludido, la ex-Secretaría de Estado de Recursos Hídricos, en consulta con las provincias de la cuenca (Id. Art. 12) creó el Comité de Cuenca Hídrica del Río Pasaje-Jura-

mento-Salado integrado por las provincias de Salta, Santiago del Estero y Santa Fé (Res. 82/71, Anexo VD). Entre sus eficaces realizaciones se destaca el "Estudio Preliminar para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Pasaje-Juramento-Salado" cuya elaboración el Comité encomendara al CFI.

V. ACUERDO ENTRE LAS PROVINCIAS DEL SALTA Y DE SANTIAGO DEL ESTERO PARA CONSTRUIR EL CANAL DE DIOS

Para aprovechar parte del caudal embalsado en Cabra Corral en el abastecimiento de varias poblaciones del norte de la Provincia, el Gobierno de Santiago del Estero construyó el Canal de Diós, cuya toma se encuentra en la Provincia de Salta unos 5 Km antes de llegar el río al límite interprovincial. La conformidad para la captación y construcción del tramo del Canal de Diós que corre por suelo salteño fué otorgada por el Acuerdo de Salta del 16/3/1978 (Anexo II) sin otra obligación para Santiago del Estero que :

- a) Hacerse cargo del costo de las obras y los trabajos;
- b) Compensar al Gobierno de Salta el costo de las expropiaciones que éste efectue para ejecutar las obras y los trabajos.

VI. ACUERDO ENTRE LAS PROVINCIAS DEL CHACO Y DE SANTIAGO DEL ESTERO PARA PROLONGAR EL CANAL.

El canal llegaba hasta Pampa de los Guanacos, dentro de la Provincia de Santiago del Estero. Del otro lado del límite interprovincial, varias poblaciones del Chaco carecían en absoluto de agua, ya que la subterránea no era apta para el consumo humano y la alternativa de construir un canal desde el río Bermejo se presentaba como antieconómica.

En esa circunstancia los gobernadores de ambas provincias advirtieron que los aforos realizados sobre el punto de descarga de Pampa de los Guanacos registraba un excedente que convenientemente

captado y conducida podría abastecer a esas poblaciones. Acordaron entonces (Acuerdo de Río Muerto del 19/11/1981, ratificado por los decretos 8077/81 de Santiago del Estero y 2679/82 del Chaco glosado en Anexo III):

- a) Que la Provincia de Santiago del Estero concede a la del Chaco el uso de tales excedentes a tomar del punto terminal del Canal de Diós.
- b) Fijar el cupo atribuido al Chaco en $m^3 0.2$ por segundo que un convenio posterior declaró caudal asegurado (Anexo V).
- c) Que la concesión se limita a la satisfacción de demandas de agua para consumo humano y uso doméstico de poblaciones próximas a la zona que no cuenten con fuentes alternativas de calidad necesaria.
- d) Que la Provincia del Chaco tome a su cargo la ejecución, operación y mantenimiento de las obras. Un acuerdo de junio de 1986 (Anexo IV) agregó la conservación y mantenimiento del canal de Diós desde la toma de canal del Infierno hasta el límite interprovincial.

VI. OBRAS REALIZADAS POR EL CHACO EN LA PROVINCIA DE SALTA.

El río Pasaje-Juramento-Salado es errático y en sus movimientos dejó muy alta a la cota de emplazamiento de la toma del Canal de Diós. Fué necesario construir otra toma. Para ello un nuevo acuerdo interprovincial, esta vez celebrado entre la Administración de Recursos Hídricos de Santiago del Estero y la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos del Chaco, encomendó a esta última profundizar el canal aductor y revestirlo precisamente en la toma que, como se ha explicado precedentemente, se encuentra en la Provincia de Salta, pocos kilómetros antes de llegar al

límite con la de Santiago del Estero. En consecuencia el organismo estatal de la Provincia del Chaco efectuó obras e inversiones en el interior de la Provincia de Salta subrogándose en el ejercicio de derechos de la Provincia de Santiago del Estero sobre el agua a conducir por las obras.

VII. UN CONSORCIO DE USUARIOS PARA EL CANAL DE DIOS.

El código de aguas de Santiago del Estero encomienda la limpieza y conservación de las obras hidráulicas a quienes tengan derecho a su uso o reciban sus beneficios (Art. 216 C.A.) 8/

Para cumplir parte de esas funciones, las comunas usuarias santiagueñas del Canal de Dios y de sus derivaciones el Canal del Desierto y Virgen del Carmen acordaron constituir lo que podría ser el germen de un consorcio.

Crearon una Comisión de Apoyo a la Obra de Toma del Canal de Dios integrada por la Administración Provincial de Recursos Hídricos, el Intendente de Monte Quemado y representantes de usuarios individuales. Su integración quedó abierta a las demás comunas. Duraba dos años.

Su finalidad es fiscalizar los trabajos de conservación y mantenimiento de la toma, aportar materiales, repuestos, combustibles, lubricantes, mano de obra y el uso de maquinarias y herramientas para mantener en permanente estado de conservación la obra de toma y comunicar a la autoridad las necesidades que surjan. (Convenio de Santiago del Estero del 7 de abril de 1987 glosado en Anexo VII).

VIII. DERECHO DEL CHACO A RECIBIR AGUA DEL CANAL DE DIOS

El derecho de la Provincia del Chaco a recibir el agua que pretende del Canal de Dios se evaluará dilucidando en sucesivos apartados los interrogantes de mayor trascendencia que el mar-

co jurídico precedentemente identificado plantea.

IX.DERECHOS DE LAS OTRAS PROVINCIAS DE LA CUENCA

No se advierte ningún perjuicio que pudiera causar a las provincias de aguas arriba la derivación de agua para el Chaco. Sin embargo corresponde notificarles la derivación porque su derecho a juzgar si tienen o no interés legítimo en cuestionar la derivación no puede ser ejercido por quien realiza la obra o actividad susceptible de contrariarlo. Es la tesis que nuestro país ha hecho triunfar en los foros internacionales 9/. Además, como norma jurídica internacional es de aplicación obligatoria en las cuestiones interprovinciales 10/.

Con mayor motivo habrá que notificar a la Provincia de Salta, en la que se encuentra la toma y el canal aductor y por ende su territorio se encuentra tanto aguas arriba como aguas abajo de la toma. La situación del Chaco como cesionaria de derechos de Santiago del Estero se comenta en el apartado XI.

También podría tener interés y debe ser notificada la Provincia de Santa Fé por estar aguas abajo. El río Salado se pierde en la de Santiago del Estero y practicamente no llega a la de Santa Fé que la necesita para abastecer a Tostado.

El Comité de la Cuenca Hídrica del río Pasaje-Juramento-Salado recomendó reservar para esta última Provincia un cupo de 12 Hm³ promedio por año disminuyendo en partes iguales los caudales atribuibles a Salta y Santiago del Estero (Recomendación del 9 de enero de 1981).

La muy poca agua que sustrae este canal se compensa con la mucha que el Canal Jume-Esquina aporta de la cuenca del río Dulce, sin embargo, por lo expuesto anteriormente Santa Fé debe ser notificada fehacientemente de la derivación y de sus antecedentes

tido sinhesitaciones que el Brasil trasvase agua del río Tieté a la vertiente Atlántica después de abastecer a la ciudad de San Pablo .

También el derecho comparado interno de los Estados nos ofrece muchos ejemplos de trasvasamientos justificados siempre por la desigual distribución del agua y de las cuencas en la tierra o bien por el interés político en privilegiar determinadas regiones modificando la distribución del agua hecha por la naturaleza. Durante muchos años el Bureau of Reclamation de los Estados Unidos de América realizó trasvasamientos en la cuenca del río Colorado para beneficiar a California. Sus proyectos intercambian el agua de los ríos Bonneville, Platte, Arkansas Grande, Los Angeles, Owens, Santa, San Diego, Sacramento y San Joaquín^{12/} Siguen, el mismo criterio los reiterados proyectos hídricos que el Estado de California está llevando a cabo desde hace muchos años ^{13/} la construcción de la red hídrica nacional de Israel, el proyecto de desarrollo del Bajo Ródano-Languedoc en Francia, el Plan Hídrico de Texas (EUA), el proyecto de las Montañas Nevadas de Australia, los proyectos de trasvase del río Columbia a Alaska, los soviéticos momentaneamente postergados por razones económicas y ecológicas de llevar agua de los ríos siberianos al Asia Central , la propuesta de una red nacional que vincularía los principales ríos de la India y los proyectos españoles del Tajo-Segura-Ebro, del Ebro-Júcar-Segura y del Pirineo Oriental. ^{14/}

jurídicos y a obtener toda la información que sea necesaria sobre su funcionamiento y el impacto ambiental que de ella se espera. También enerva cualquier interés que cualquiera de la demás provincias de la cuenca pudiera invocar lo ínfimo de la derivación.

XI. EL USO DEL AGUA FUERA DE LA CUENCA.

Ninguna norma ni principio jurídico prohíbe que el agua se trasvase ni se use fuera de la cuenca. Tampoco la práctica internacional prohíbe este tipo de trasvasamientos, sino que los condiciona.

Todo lo contrario. La participación de estados ajenos a una cuenca en su aprovechamiento es antigua. Gran Bretaña y Austria celebraron el acuerdo internacional del 24 de marzo de 1815 con Prusia; los Estados ribereños alemanes y Francia para reglamentar la libre navegación del Rin que luego se incluyó en el Acta Final del Congreso de Viena (1815).

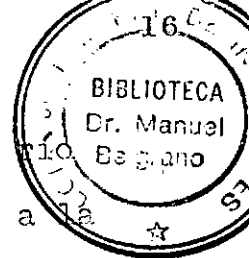
Posteriormente el Tratado de Versalles ratificó la Convención de Mannheim de 1868 que establecía principios similares. También integraron la Comisión Europea del Danubio II/desde 1856 Francia, Gran Bretaña, Cerdeña y Rusia, ajenos a la Cuenca.

También admitió el uso de ríos por países ajenos a la cuenca la Convención de Barcelona del 20 de abril de 1921 sobre el Régimen de Vías Navegables de Interés Internacional (L.N.T.S 50).

En nuestro país los Tratados de San José de Flores celebrados con Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos establecieron la libertad de navegación de los ríos Paraná y Uruguay (10/9/1853, ratificados por la ley 14 del Congreso de Paraná), principio que recoge el Art. 26 de la Constitución Nacional.

Actualmente y en la misma Cuenca del Plata nuestro país ha admi -

tido sinhesitaciones que el Brasil trasvase agua del río Tieté a la vertiente Atlántica después de abastecer a la ciudad de San Pablo .



También el derecho comparado interno de los Estados nos ofrece muchos ejemplos de trasvasamientos justificados siempre por la desigual distribución del agua y de las cuencas en la tierra o bien por el interés político en privilegiar determinadas regiones modificando la distribución del agua hecha por la naturaleza. Durante muchos años el Bureau of Reclamation de los Estados Unidos de América realizó trasvasamientos en la cuenca del río Colorado para beneficiar a California. Sus proyectos intercambian el agua de los ríos Bonnevillle, Platte, Arkansas Grande, Los Angeles, Owens, Santa, San Diego, Sacramento y San Joaquín^{12/}. Siguen el mismo criterio los reiterados proyectos hídricos que el Estado de California está llevando a cabo desde hace muchos años^{13/}, la construcción de la red hídrica nacional de Israel, el proyecto de desarrollo del Bajo Ródano-Languedoc en Francia, el Plan Hídrico de Texas (EHA), el proyecto de las Montañas Nevadas de Australia, los proyectos de trasvase del río Columbia a Alaska, los soviéticos momentaneamente postergados por razones económicas y ecológicas de llevar agua de los ríos siberianos al Asia Central, la propuesta de una red nacional que vincularía los principales ríos de la India y los proyectos españoles del Tajo-Segura-Ebro, del Ebro-Júcar-Segura y del Pirineo Oriental. ^{14/}

La inquietud sobre este tema la planteó el fervor con el que un panel de expertos de distintos bloques internacionales e ideologías, pero todos de alto nivel, recomendó en un informe publicado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1958 bajo el título de "Desarrollo Integrado de Cuencas Hídricas" y que circuló en todo el mundo y condicionó el pensamiento en la materia durante muchos años, que las cuencas hídricas se manejen unitaria e integralmente y no por partes como se venía haciendo hasta ese momento. Ese énfasis pudo inducir en algunos de sus lectores la creencia de que el uso del agua solo era legítima dentro de la cuenca a que pertenece. Pero no fue así. Ese informe no trató el tema del trasvase de cuencas.

Tampoco lo hicieron las Reglas que la Asociación de Derecho Internacional propuso en su 52a Conferencia celebrada en Helsinki en 1966, ya que se limitaron a reconocer a los Estados de cada cuenca una participación justa y razonable en el uso benéfico del agua, pero no se la negaron a los estados ajenos a la cuenca.

La Asociación recién trató el tema en la 57a Conferencia que tuvo lugar en Madrid en 1976. El artículo 3 de su informe alienta a los estados que integran cada cuenca a invitar a participar en las actividades de administración de la cuenca a estados ajenos a la misma que tuvieran derecho o simple interés en el uso de su agua.

En el derecho interno argentino la ley federal de energía eléctrica 15336 permite que toda la República se abastezca con energía eléctrica generada en cuencas que pertenecen a provincias distintas, las que perciben por ello una compensación (Art. 43). Asimismo esa ley autoriza el trasvase de cuencas con fines hidroeléctri-

cos cuando afecten a mas de una provincia siempre que los ordene una ley de la Nación(Art.43).El precepto no es aplicable al presente trasvasamiento por cuanto no tiene por objeto una captación hidroeléctrica.

La propia cuenca del río Pasaje-Juramento-Salado se beneficia con el trasvasamiento de Jume-Esquina que recibe del río Dulce,río a cuya cuenca pertenece Santiago del Estero(Decreto-Acuerdo Nº 6 del 3/5/1968 de S.del E.)

XI.CAUSA JURIDICA DEL DERECHO DEL CHACO SOBRE EL AGUA DEL CANAL

El derecho del Chaco a recibir el agua emana del Acuerdo de Río Muerto del 19 de noviembre de 1981(Anexo III)celebrado entre los Gobernadores de esta Provincia y la de Santiago del Estero que detentaban las facultades correspondientes tanto a los poderes ejecutivos como a los legislativos de ambas provincias(Acta de la Junta Militar del 27/4/1976,Art.1).

Constituye un acto legislativo de la misma eficacia que el código de aguas de la Provincia.

Si alguna duda quedase por la circunstancia de que la concesión sea otorgada por el funcionario que concentrara los poderes ejecutivo y legislativo de la provincia se allana con el acuerdo complementario celebrado entre la autoridad de aguas cuyas facultades concedentes emanan del código de aguas(Art.4) que es la Administración Provincial de Recursos Hídricos y la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos del Chaco(Anexo V)que,entre otras cosas,atribuye el caracter de "asegurado" al caudal concedido.

Ambos acuerdos encuadran en los Tratados con las provincias vecinas para regular el aprovechamiento de los ríos interpro-



vinciales que la Constitución de Santiago del Estero autoriza a celebrar(Art.61).Además,esa Constitución encomienda a los poderes públicos promover acciones de saneamiento ambiental y provisión de agua potable en las zonas rurales y autoriza a coordinarlas con servicios análogos regionales o nacionales(Art.71). No puede haber duda sobre la capacidad de Santiago del Estero para conceder agua de Cabra Corral a la Provincia del Chaco ya que se trata de agua que le corresponde.Además el preámbulo del Tratado interprovincial del 12 de febrero de 1965 celebrado entre Salta y Santiago del Estero para el funcionamiento de la presa aludida considera deseable que el agua y la cuenca sean desarrolladas,utilizadas y conservadas para su beneficio y provecho en particular y para toda la Nación en general.

Tampoco la circunstancia de que los beneficiarios sean comunas de otra Provincia enerva su derecho ya que todos los habitantes de la Nación gozan de iguales derechos(Arts.14 y 16 C.N)y todas las personas particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos, como es el agua en cuestión,con sujeción al código civil y a los reglamentos administrativos(Arts.2340 y 2341 cód.civil).

XIII. NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO DEL CHACO SOBRE EL AGUA

La concesión así acordada se registrará no solo por normas biprovinciales sino también por el código de aguas de Santiago del Estero que determinará sus modalidades.

Será, en consecuencia, una concesión real(Arts.37,54 y 92 CA). Se entiende por tal la que se otorga a quien desarrolle una actividad determinada(Art.73), o sea a las poblaciones chaqueñas aludidas anteriormente.Por su destino prevalecerá sobre toda concesión para cualquier otro uso(Arts.55 y 57 C.A).

XIV. NATURALEZA JURIDICA DE LAS OBRAS.

El Canal de Dios ,su prolongación al Chaco y las obras que lo complementan encuadran en la categoría de obras hidráulicas públicas ya que fueron construídos para utilidad o comodidad común(Art.210 CA) , por lo que corresponde aplicarles el régimen especial de las obras públicas de la Provincia de Santiago del Estero en cuanto los convenios interprovinciales no establezcan otra cosa(Art. 212 CA).

Nada han acordado ambas provincias respecto a las inversiones efectuadas por la de Santiago del Estero en la construcción del Canal de Dios ni por la del Chaco en el reacondicionamiento de las obras de la toma ni por las que se hagan en el futuro.El código de aguas de Santiago del Estero,por su parte,faculta a la autoridad local para imponer el pago de deréchos al concesionario que use una obra ya construida(Art.217 CA).

En consecuencia su conservación y limpieza estará a cargo de quienes tengan derecho a su uso o reciban sus beneficios sin excepción alguna derivada de su ubicación .Si no cumplen esta obligacion la autoridad puede realizar las obras trabajos omitidos por cuenta del obligado(Art.216 CA).

Para cumplir esta obligación los beneficiarios del canal pueden constituir un consorcio(Arts.32 inc.3 y Art.75 CA)o someterse a las cargas financieras que para el mantenimiento del sistema imponga la autoridad de aguas(Art.31 CA)

21

XV. CONCEPTO DE "EXCEDENTE". CALIDAD Y MAGNITUD DE LA CONCESION .
El concepto de "excedente" de agua del Canal de Diós que es el que mediante el Acuerdo de Río Puerto la Provincia de Santiago del Estero concede a la del Chaco no constituye una categoría jurídica calificativa de la concesión. Tampoco el acuerdo aclara a qué se refiere, pero da un indicio para interpretarlo. Al invocar la existencia de un excedente quiso dejar establecido que todavía quedaba agua para el Chaco aún después de satisfechos los compromisos del Canal de Diós.

Uno de sus considerandos expresa "que los aforos realizados sobre el Canal de Diós en su punto de descarga a la represa de Pampa de los Guanacos dan cuenta de un excedente....", lo que implica simplemente que la fuente no está agotada en los términos del Art. 42 del actual código de aguas de Santiago del Estero 15/ y que por ende la autoridad todavía puede seguir aceptando solicitudes de concesión hasta que la totalidad del agua se encuentre comprometida con concesiones o permisos .

Verificada la disponibilidad de caudal, el Acuerdo garantiza al Chaco la libre disponibilidad de un cupo de m^3/s 0,2 de agua, lo que da a la concesión la categoría jurídica de permanente o sea que no cede ante ningún otro uso ni concesión (Art 55 y 88 CA). Si no hubiesen existido tales excedentes solo habría podido otorgarse una concesión eventual que cede ante las del mismo rango otorgadas con carácter permanente (Art. 66 2º párr. CA) y se otorga para ser atendida con el excedente de agua que resulte después de dotadas las concesiones permanentes (Art. 66 2º párr. CA) y si -

guiendo el orden de su otorgamiento(Art.67 CA).

Para que ninguna duda pudiera quedar sobre el caracter permanente de la concesión, la nota adicional incorporada al acuerdo complementario de abril de 1987(Anexo V)celebrado entre organismos hídricos de ambas provincias aclara que el caudal concedido al Chaco será "asegurado".

Por ello , los derechos que otorga el acuerdo de Río Muerto , los adicionales ya celebrados y los que se celebren en el futuro deberán inscribirse, si todavía no se lo ha hecho , en el registro de aguas públicas para darles la publicidad que los haga oponibles a terceros (Arts.17 inc.2 y 18 CA) puesto que si la omisión perjudicase al usuario chaqueño surgiría responsabilidad para la administración santiagueña.

XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Las provincias del Noroeste argentino(NOA) siempre han dado un ejemplo de armonía, buena fé y solidaridad en el manejo de sus escasos recursos hídricos, que son casi todos interprovinciales. Aunque el Chaco no integra la Región conocida como el NOA, ha estado siempre vinculado estrechamente a ella en cuanto al agua se refiere. Fué una de las impulsoras de la Organización Interprovincial del Agua del Noroeste Argentino(OIANA) establecida en 1956; las provincias de la región impulsaron la creación de las comités de cuencas en 1971 para coordinar e impulsar el desarrollo hídrico en la región que luego el Chaco promovió para el río Bermejo 16/en el que no solo participaron las provincias del Noroeste que integraban la cuenca, sino también fué invitada Santiago del Estero por su eventual interés

en aquel río. Cuando cayeron en desuso los comités de cuenca , el Ministerio del Interior del Gobierno de la Nación impulsó la creación de la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE) que también incluye a la Provincia de Santiago del Estero 17/.

Aquellos comités mantuvieron en contacto estrecho y permanente a los funcionarios responsables del agua en el Noroeste argentino.

Los acuerdos para la construcción del embalse de Cabra Corral y sus obras complementarias constituyen un ejemplo que las demás provincias argentinas deberían imitar.

Cuando fué necesario reforzar los caudales del Pasaje-Juramento - Salado , la Provincia de Santiago del Estero lo hizo con caudales del otro río interprovincial que corre por su territorio,, el Dulce,, sin que se suscitara controversia alguna.

En el presente caso en que poblaciones aisladas del Chaco necesitaron agua potable que debió conducirse desde una cuenca ajena al Chaco y tomarla en la Provincia de Salta , la Provincia de Santiago del Estero acudió en su ayuda dándole parte del agua que le corresponde derivar del embalse de Cabral Corral.

Sin embargo la armonía y buena voluntad señaladas precedentemente que sirvieron para ir resolviendo los problemas que el desarrollo hídrico iba planteando no bastó para instituir un marco jurídico regulatorio sistemático y coherente para el uso y la preservación del agua en esta cuenca. Pudieron y debieron hacerlo como la Argentina y el Uruguay lo hicieron con sus ríos compartidos , pero no lo hicieron , manteniendo un vacío jurídico que no ha causado inconvenientes, precisamente por esa buena voluntad.

Tanto las provincias de aguas arriba , Tucumán y Catamarca , como Santa Fé , de aguas abajo , han consentido tácitamente las muchas obras realizadas y aun las proyectadas en la cuenca, entre ellas la de Cabra Corral y el Canal de Dios , pero no expresaron expresamente su consentimiento o no hay prueba de ello. Ningún obstáculo jurídico se opone a que el agua conducida por el Canal de Dios y su prolongación salga de la cuenca para que la usen habitantes de otra provincia ajena a la cuenca.

El derecho del Chaco a recibir el agua que le concedió Santiago del Estero es claro y legítimo. Salta , provincia por cuyo suelo corre esa agua ha consentido tácitamente el acto jurídico de la cesión y no ha objetado la realización de obras en su territorio por organismos administrativos de la Provincia del Chaco, si bien no lo ha hecho expresamente.

El código de aguas de Santiago del Estero proporciona un marco normativo que asegura a las comunas chaqueñas su derecho al agua, pero la autoridad de aplicación no ha arbitrado los medios para que la reciban.

El argumento de que Santiago del Estero puede dejar la concesión sin efecto en cualquier momento que esgrimió el ex-Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento para negar el financiamiento federal quedó allanado con la nota adicional al acuerdo complementario de abril de 1987 . El contexto jurídico muestra claramente que el Chaco goza de una concesión permanente y privilegiada también por su destino al abastecimiento poblacional.

Si el agua no llega al Chaco no es por insuficiencia jurídica

Sino por razones prácticas. Una es la ineficacia de las obras de conducción y la ineficiencia de su mantenimiento. Un estudio del CFI dará la solución técnica. La otra son las derivaciones efectuadas en el tramo santiaguense del Canal. La autoridad de aplicación santiaguense no las limita para que todos los usuarios, incluidos los chaqueños, reciban el agua en proporción a sus concesiones respectivas.

Aunque adecuado, el marco jurídico es perfectible, por lo que la parte segunda de este informe proyectará las transformaciones jurídicas necesarias para allanar los inconvenientes que se han presentado y los que se prevén para que llegue al Chaco el agua que le concedió Santiago del Estero.

PARTE SEGUNDA

ACCION PROPUESTA

I. INSUFICIENCIA DEL MARCO JURIDICO

La identificación y evaluación preedentes muestran que el derecho que tiene el Chaco a recibir el agua que Santiago del Estero se comprometió a entregarle se sustenta sobre bases relativamente sólidas. Serían completamente sólidas si todo el sistema jurídico de la cuenca fuese también más sólido. Ello no significa que sea inferior al del resto del país. Todo lo contrario; las Provincias del Noroeste Argentino, a las que siempre estuvo estrechamente vinculada el Chaco, siempre han concertado su acción entre sí, con el Gobierno Nacional y aún con organismos internacionales como la OEA (Estudio de la Cuenca del río Bermejo) y el BID (Proyecto del río Dulce).

La construcción de la presa de Cabra Corral, que embalsa las aguas del río Juramento-Pasaje-Salado no fué una imposición del Gobierno Nacional amparada en la ley federal de energía eléctrica 15336 sino que fué acordada entre dos provincias de la cuenca con la participación del organismo hidroeléctrico nacional Agua y Energía Eléctrica (Anexo I). En cambio, en otras cuencas del país, como ser la del río Atuel, se han suscitado enojosos pleitos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación 18/; la construcción de las presas hidroeléctricas de Salto Grande y Yacaré se impuso en virtud de la prevalencia de los tratados internacionales sobre las normas provinciales (Art. 31 C.N) y la de obras hidroeléctricas internas, como las de Chocón-Cerros Colorados en virtud de la ley federal de energía eléctrica 15336.

Aún cuando el sistema jurídico evaluado es superior al del resto del país, es todavía insuficiente. Ello puede atribuirse a que ni en esta región ni en el resto la concertación ha llenado adecuadamente el espacio jurídico que crean los artículos 104 (poderes reservados a las provincias) y 107 (tratados parciales para fines de intereses económicos y trabajos de utilidad común) de la Constitución Nacional.

El vacío se ha hecho mas ostensible desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló negándose a distribuir entre La Pampa y Mendoza el agua que quedaba en el río Atuel después de servidos los usos consuntivos que la provincia de aguas arriba estaba haciendo. Su argumento era que el único derecho aplicable al caso era el constitucional argentino, el comparado y el internacional, pero ninguno de ellos normaba la situación objeto del reclamo.

En cambio, exhortó a la actora y a la demandada a convenir una participación razonable y equitativa en los usos futuros negociando con buena fé y espíritu de buena vecindad 19/.

Para la inteligencia de la Corte hay un vacío normativo que ni sus fallos pueden llenar, razón de más para que las provincias se apresuren a hacerlo.

Si bien en esta cuenca los conflictos de intereses se resolvieron mediante acuerdos especiales a medida que se fueron planteando, conviene anticiparse a los que podrían suscitarse en el futuro porque:

a) El escurrimiento del agua permite a quien domina ciertos tramos de su curso condicionar su disfrute por los demás integrantes de la cuenca. El Brasil lo hace actualmente con las presas hidroeléctricas que construyó en el Alto Paraná, Mendoza con el

ya mencionado Nihuil y para evitar los riesgos derivados de su situación de provincia de aguas abajo es que Santiago del Estero concertó con Tucumán y Salta el uso de los caudales de los ríos Dulce y Salado. Buenos Aires, dominando la entrada de los cursos troncales de la Cuenca del Plata condicionó su uso naviero durante siglos; Portugal se lo disputó fundando la Colonia del Sacramento; Buenos Aires la destruyó y fundó Montevideo para afianzar ese dominio. La diplomacia lusitana y luego la brasileña, apoyada siempre por la diplomacia británica y la de otras potencias, combatió ese privilegio y finalmente las propias provincias argentinas organizándose primero como estado (1853) y luego federalizando la ciudad, se lo revocaron para siempre. Esa contradicción de intereses no debe sorprender porque responde a causas naturales. Por algo la palabra "rival" deriva del latín "rivus" que significa río. Cuando se trata de repartir el agua y sus beneficios, el recurso que mas escasea es la armonía.

b) En este caso especial del río Pasaje-Juramento-Salado el espíritu de buena fé y buena vecindad que prevalece entre las provincias que baña ha prevalecido sobre cualquier disidencia y originado esos acuerdos parciales. Pero no son suficientes. No conviene confiar solo en el espíritu de solidaridad ni ensayar su capacidad para resistir el embate de los intereses que el crecimiento de la demanda de agua siempre agita, ya que los intereses en juego son vitales. Mas bien habría que aprovechar esa armonía para hacerla fructificar en los acuerdos del tipo de los que ahora el

presente informe propone y así evitar futuras incertidumbres.

c) La crónica falta de inversiones para el desarrollo enmascara los conflictos de interés que pueden estar latentes. Al no haber creación de bienes ni de beneficios para distribuir es lógico que tampoco se adviertan pujas para su reparto, pero la anhelada revolución productiva, que puede empezar en cualquier momento, va a generar mas bienes y beneficios y por ende despertar nuevas apetencias, que en este caso no se van a limitar al agua y a los beneficios que de ella derivan, sino también van a abarcar las inversiones y otros medios necesarios para su protección y desarrollo. Si ese ocurre, la falta de acuerdos básicos puede postergar inversiones como ya lo ha demostrado la negativa del ex-Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento a financiar los servicios proyectados para el Chaco (Anexo VIII).

El marco jurídico debe fortalecerse ahora, cuando reina la armonía. Ese fortalecimiento debe practicarse a nivel de cuenca, en las relaciones bilaterales interprovinciales y en las que la Provincia del Chaco, como usuaria, mantiene con la Provincia de Santiago del Estero, concedente.

II FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES JURIDICAS EN LA CUENCA

Siempre es aconsejable proyectar un estatuto normativo del agua para la totalidad de la cuenca. Poco puede hacer en este caso la Provincia del Chaco por ser ajena a la misma, pero sí Santiago del Estero que, además de estar ubicada en el corazón de la cuenca, tiene una larga tradición en la formulación de propuestas para el ordenamiento jurídico de cuencas interprovinciales.

La contaminación del río Dulce por efluentes industriales de la Provincia de Tucumán a principios de la década de 1930 estimuló su interés por estos temas , lo que explica los estudios y proyectos legislativos que la doctrina santiagueña impulsó y las intervenciones de los representantes provincianos Lorenzo Fazio Rojas en la IV Conferencia Nacional de Abogados celebrada en Tucumán en 1936 que fijó un hito en la evolución de la doctrina jurídica en materia de agua en nuestro país 20/.

La doctrina seguida por Santiago del Estero coincide con la política internacional argentina en la materia . Nuestro país ha procurado siemore someter el manejo de las cuencas que comparte a un régimen jurídico orgánico y ha dado frutos tan encomiables como los estatutos regulatorios de los ríos de la Plata y Uruguay (Tratados argentino-uruguayos del 19/11/973 y 26/2/975) 21/.

Lo mas adecuado sería hacerlo a través del Comité de la Cuenca Hídrica del río Pasaje-Juramento-Salado , que habría que reactivar.

En el año 1981 ese comité estudió minuciosamente un anteproyecto de tratado para la habilitación de obras y distribución de caudales entre todas las provincias de la cuenca. Ante la dificultad en redondear el proyecto, se prefirió proyectar la creación de un organismo que , bajo determinadas pautas, propusiera la distribución hasta que decayó el entusiasmo y nada mas se hizo.

Para evitar la repetición de actitudes que condujeron a ese estancamiento habría que repasar las actas del Comité de Cuenca que reflejan las deliberaciones, como asimismo las

opiniones vertidas por los representantes de las Provincias de Salta y Santiago del Estero en las actas de las deliberaciones que condujeron al Tratado de Cabra Corral (Anexo I) , especialmente en las sesiones del 30/6/964 (San Miguel de Tucumán) , 14/7/964 (Rosario de Lerma, Salta) y 13/8/964 (Buenos Aires) que obran en los archivos de Agua y Energía Eléctrica.

Cualquiera sea el criterio que se siga, convendría que el estatuto o reglamento que se recomienda proyectar para la cuenca:

a) Determinase los cupos a asignar a cada Provincia . Tanto las deliberaciones del Comité de la Cuenca que en 1981 estudió el tema, como las de la cuenca del río Colorado , que ese Comité tomó en cuenta y terminó imitando , se estancaron por falta de acuerdo en la fijación de los cupos. Si no se llega a un acuerdo inmediato sobre los cupos definitivos pueden siempre fijarse cupos mínimos, dejando un cupo muerto para negociar mas adelante o eventualmente someterlo a arbitraje , incluso fijando al arbitro pautas para la distribución.

b) Determinase el nivel de deterioro admisible en el agua que pase de una provincia a otra.

c) Definiese el derecho de cada provincia a hacer usos no consuntivos que no afecten la calidad del agua ni su escurrimiento.

d) Decidiese adoptar o no un sistema de prioridades o preferencias para el uso que haga cada provincia.

e) Decidiese si se mantienen los cupos asignados aún en caso de magras extraordinarias o se privilegia a determinados usos.

f) Definiese la conducta a seguir por cada provincia con los excedentes de agua cuando se produzcan crecidas extraordinarias.

g) Sancionase un programa, plan o esquema de regulación, obras y labores hídricas a realizar en la cuenca y asignase responsabilidades para su ejecución.

h) Acordase la obligación de cada provincia de la cuenca de comunicar a las otras las obras y labores que se ejecuten en cada una de ellas y el mecanismo para efectuar la comunicación y acoger los pedidos de informe y reclamaciones.

i) Instituyese un organismo administrativo de la cuenca.

La primera decisión a tomar al respecto es si se reactiva el Comité de Cuenca ya creado por sendas leyes nacional y provinciales, se le agregan funciones o se crea un nuevo organismo. Para ello hay que definir que es lo que se le va a encomendar hacer al organismo, es decir: Definir sus misiones y funciones que pueden ser:

a) De simple coordinación, consulta o asesoramiento.

b) De planeamiento.

c) De autoridad con facultades de emitir normas (jus edicendi).

d) De autoridad con facultades para otorgar concesiones.

e) De autoridad con facultades para imponer tasas o contribuciones.

f) Jurisdiccionales con facultad para instruir conflictos de interés o bien resolverlos.

g) De estudios y proyectos.

h) De construcción u operación de obras o de prestación de servicios a la comunidad.

i) Limitadas a lo interprovincial o extendidas al desarrollo interno de cada provincia.

j) Limitadas al agua o extendidas a otros recursos y actividad -

des.

En caso de preferirse la creación de un nuevo organismo habría que definir:

- a) La inclusión o no del Gobierno Nacional.
- b) La inclusión o no de provincias ajenas a la cuenca pero interesadas en su preservación y aprovechamiento como es la del Chaco.
- c) Su domicilio y la facultad de abrir sucursales o agencias.
- e) ^{La} Integración y designación de sus órganos directivos y ejecutivos, como asimismo la duración de sus mandatos y las causas de su remoción.
- f) Las atribuciones de esos órganos.
- g) El régimen de reuniones, quorums, agenda y mayorías necesarias para tomar decisiones.
- h) El régimen financiero y presupuestario. En caso de tener la misión de construir u operar obras o prestar servicios o financiar unos u otros conviene definir su autarquía financiera y la facultad de contraer empréstitos para facilitar su captación y canalización de fondos de fuente interprovincial e internacional.
- i) Sus relaciones con organismos nacionales o provinciales con responsabilidad en la cuenca.
- j) Un régimen que puede ser arbitral para dirimir controversias entre las partes. Puede elegirse como árbitros a miembros de los poderes públicos nacionales o provinciales o bien encomendarles la designación de árbitros.
- k) Su duración, que dependerá de su cometido. Por la naturaleza de sus funciones es aconsejable que sean permanentes, es decir de duración ilimitada, pero también puede encomendarse al organismo una función determinada en el tiempo, acordar los derechos y

obligaciones de cada provincia y luego coordinar las acciones siguientes mediante un sistema de consultas. Aún así conviene siempre mantener una mínima unidad ejecutiva que constituiría por lo menos un punto focal.

En materia de organismos para la administración de cuencas hídricas hay una larga y frondosa experiencia nacional y extranjera.

Lo más práctico sería volver a reunir el Comité de la Cuenca Hídrica del río Pasaje-Juramento-Salado cuya creación dispuso la resolución transcrita en Anexo VI que , mientras funcionó , lo hizo muy bien.

Otra alternativa sería seguir los modelos impulsados por el Ministerio del Interior para los ríos Colorado , Bermejo y Negro . El Gobierno del Proceso de Reorganización Nacional impuso la celebración de un Tratado entre las provincias de la Cuenca del Río Colorado y el Gobierno Federal (Tratado del 2 de febrero de 1977) después de mas de veinte años de infructuosas negociaciones entre ellas y de haber requerido hasta los servicios del Instituto de Tecnología de Massachussets (M.I.T) para elaborar un programa de habilitación de areas de riego y distribución de caudales que contemplaba el aporte de agua de otra cuenca y costosas obras hidráulicas. Con ello cambiaba el modelo de la Conferencia de Santa Rosa que el 30 de agosto de 1956 había creado la Comisión Técnica Interprovincial Permanente del Río Colorado (COTIRC) que excluía de su seno al Gobierno Nacional. Sin embargo tampoco dió mayores frutos por la denuncia del Tratado que formularon las autoridades constitucionales restauradas en la Provincia de Río Negro .

La Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE) 22/ creada sobre el mismo esquema y que siguió agregando estudios a los muchos existentes sobre la cuenca, tampoco se reúne. Pero en cambio se acaba de constituir la Autoridad Interjurisdiccional de los Ríos Limay, Neuquén y Negro 23/ que ejerce una verdadera autoridad en materia de contaminación hídrica sobre los gobiernos nacional y provinciales ya que puede aplicar sanciones pecuniaras al Estado que incurra en rebeldía respecto a la adopción de medidas legales para hacer cesar la contaminación que se origine en su jurisdicción (Art.5 inc.g del Estatuto aprobado por el Tratado). Es muy grande el poder de esta superjurisdicción si se tiene en cuenta que las decisiones de la Autoridad se adoptan por mayoría de votos (Art.28 id). Ello sin perjuicio de su función básica de recoger y procesar información y realizar estudios y proyectos.

III.COMUNICACION DE LAS OBRAS Y PROYECTOS A LAS DEMAS PROVINCIAS DE LA CUENCA.

Sin perjuicio de que se acuerde o no el Estatuto recomendado para regular el agua de la cuenca, corresponde que las obras y proyectos como el Canal de Diós se pongan en conocimiento de las demás provincias de la cuenca, incluso la de Salta, aún cuando a juicio de las que las ejecutan o autorizan ningún perjuicio pudiera causarles. Esa comunicación debe practicarse siempre porque de otro modo las provincias que mediante las obras podrían condicionar el escurrimiento y la calidad del agua que comparte se convertirían en jueces y parte.

Esta es la recomendación que propusieron en el plano internacional la Declaración de Montevideo de la VIIª Conferencia Regional Americana de 1933 (Arts.7 y 8), la Declaración de la Con-

36
BIBLIOTECA
Estadística
Bosquejo
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Estocolmo, 1972, Principio 21) y las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que la completan y aclaran 2995/72, 2996/72 y 3129/74.

Si las naciones la recomendaron para sus relaciones, con mayor motivo deberían ponerla en práctica las provincias hermanadas en una Nación indisolublemente unida. Así lo entendió el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaído en la acción posesoria sobre aguas del río Atuel que La Pampa intentara contra Mendoza cuando declara que los principios del derecho internacional son de aplicación obligatoria a las relaciones interprovinciales. 24/

La comunicación aludida es recomendable para poder considerar las objeciones de aquellas provincias y lograr su consentimiento expreso o tácito. Practicarla es mucho menos que realizar la denuncia de impacto ambiental que la ley 23879 impone para las obras hidroeléctricas como es la de Cabra Corral. 25/ En cuanto a la forma de la comunicación, lo importante es que sea fehaciente. Seguramente los organismos técnicos de estas provincias ajenas a las obras y proyectos ya los conocen, pero es necesario que ese conocimiento y, si es posible, también sus observaciones se registren debidamente del modo previsto por el Art. 17 inc. 2 del código de aguas de Santiago del Estero. Como la comunicación y pedido de conformidad constituye una gestión con características diplomáticas que se inserta en la globalidad de las relaciones interprovinciales conviene que la Provincia de Santiago del Estero estudie el momento y modo de practicarla. También en este caso convendría que se lo hiciese a través del Comité de la Cuenca, que fué creado para cumplir

este tipo de funciones. Ello no implica en modo alguno supeditar la gestión a la reunión del Comité. Reitero: el único requisito es que la comunicación sea fehaciente.

Algunas de las actividades , acuerdos , proyectos y obras que deben ponerse formalmente en conocimiento de las demás provincias - si aún no se lo ha hecho - para recabar sus observaciones y aceptación son:

a) El Tratado para construir la presa de Cabra Corral y obras complementarias entre Salta y Santiago del Estero del 12 de febrero de 1965 (Anexo I) y todo lo relativo a la operación y funcionamiento de la presa. Esta última debe ser proporcionada por el organismo nacional que la opera , lo que no excusa la obligación primaria de hacerlo que tiene la Provincia en la que se encuentra la presa.

b) Los acuerdos del 19 de febrero de 1981 de Río Muerto y de junio de 1986 entre el Chaco y Santiago del Estero para el uso del agua del Canal de Dios (Anexos III y IV) construídas en su consecuencia por cuanto constituyen un trasvase de cuenca.

c) El trasvasamiento del río Dulce al Salado realizado mediante el Canal Jume Esquina.

La comunicación que recomienda el presente apartado no es un prerrequisito de la construcción y operación de las obras aludidas , pero conviene practicarla para evitar tensiones interprovinciales y dar seguridad jurídica a las obras.

IV. FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES JURIDICAS ENTABLADAS ENTRE EL CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO

En cuanto al Canal de Dios en sí , no se advierten falen -

cias jurídicas que impidan a las poblaciones chaqueñas hacer uso del agua concedida, pero el agua no llega a ellas. El Chaco construyó obras en territorio de Salta para solucionar las deficiencias que impedían la llegada del agua, pero tampoco llegó, por lo que el CFI está estudiando nuevos proyectos de obras con el mismo objeto, pero aunque esas obras la hagan llegar durante un tiempo, volverá a cortarse si no se toman medidas administrativas complementarias permanentes para evitar que se la derive para otros usos durante su largo recorrido.

El problema es que el Canal se ha construido contrariando el principio egoísta de sociología hídrica enunciado anteriormente de que los individuos y las comunidades tienden a usar el agua aún privando de ella a terceros cuando la posición que detentan respecto al escurrimiento del agua se lo permite.

Tan fuerte es la posición de quien está aguas arriba de un curso de agua natural o artificial que, aún cuando la ley suele siempre obligarlos a compartirla equitativa y razonablemente con los de aguas abajo, algunas administraciones hídricas se resignan a atribuir todo el caudal a quien se encuentra aguas arriba. Así evitan un crecimiento y desarrollo de las áreas de aguas abajo que son las que reclamarían cuando se queden sin agua; es decir que mantienen su debilidad en beneficio de las áreas de aguas arriba que se desarrollan y con ello adquieren más medios para defender sus privilegios. De ese modo evitan organizar un sistema administrativo que provea una justa y equitativa distribución del agua. Convierten al previsible despojo de hecho en un aprovechamiento legítimo pero injusto.

En este caso especial la autoridad hídrica santiagueña tendrá

que negar agua e impedir que la tomen de hecho sus comprovincianos cuando ella falte para que llegue a otra provincia sometida a otra administración que hasta puede pertenecer a un signo político distinto del suyo.

La llegada del agua al Chaco siempre va a estar supeditada a la honestidad, celo y eficacia que ponga la autoridad santiaagueña en el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Provincia.

En este caso el Chaco eligió la peor ubicación que es el tramo inferior del canal. Descartó la opción de llevar el agua de otra cuenca por lo muy costosa que era.

El problema es práctico, por lo que habría que buscar también soluciones prácticas. Los habitantes de nuestras ciudades tienen una larga experiencia en afrontar el problema de la crónica falta de agua. Quienes primero se quedan sin ella cuando escasea son quienes están a mayor distancia o nivel hídrico de la fuente de abastecimiento aún cuando tengan el mismo derecho que los demás.

La autoridad no suele atinar a aplicar un racionamiento justo y razonable ni tampoco a aplicar ^{el} inequitativo pero práctico de incrementar el precio unitario de los volúmenes de agua entregada. Entonces algunos desperdician agua a la que otros tienen el mismo derecho y necesitan para preservar su salud. En la práctica el sistema administrativo tolera una conducta que el sistema jurídico que debería aplicar está reprobando. Afrontan ese problema construyendo reservorios individuales domiciliarios que les permiten desentenderse del problema de la falta de agua mientras el nivel del reservorio no baje demasiado. Claro está que sería mas económico, higiénico y ra-

cional disminuir el consumo per cápita y que el agua se entregase directamente a cada hogar ; pero la condición egoísta del ser humano hace indispensable el tanque domiciliario.

Técnicos del Chaco tienen una idea que ayudaría a resolver el problema de asegurar la permanencia de la provisión de agua si fuese factible del punto de vista hidráulico y económico. Consiste en construir un reservorio en la misma Provincia del Chaco que permita el abastecimiento durante un tiempo prudencial. Se evitaría así la preocupación cotidiana por la llegada del agua para hacerla mas esporádica. El Chaco tendría que preocuparse por reclamar a la autoridad del agua santiagueña cuando advierta que el reservorio está bajando mas de lo debido , pero con tiempo suficiente para que el reclamo prospere y el agua llegue.

Todo lo demás es administración hídrica interna , cuya eficacia hará que todos los interesados reciban el agua que les corresponda y que si se produce alguna escasez sea soportada equitativamente entre todos los usuarios . También debe decidir la autoridad chaqueña si el transporte y distribución del agua se va a seguir haciendo a cielo abierto o por acueducto cubierto , lo que demanda menor vigilancia y requiere mayor inversión , pero también asegura que el agua que se distribuya mantenga su calidad.

Con esto se logra que el agua llegue hasta el final del Canal , pero para que lo haga en forma permanente lo mas práctico es organizar la autoridad de aplicación del sistema .

El Acuerdo Complementario de junio de 1986 celebrado entre el Chaco y Santiago del Estero dispuso crear un Comité Técnico

Interprovincial para coordinar las tareas de construcción , mantenimiento y uso del Canal de Dios integrada por un representante titular y otro alterno de cada provincia. Para activar las obras de reacondicionamiento del canal ponerlo en funcionamiento lo antes posible . Sus peticiones conducentes a la provisión de agua al tramo final del canal deberán ser resueltas en su oportunidad por la autoridad de aguas de Santiago del Estero .

Paralelamente convendría unir en un consorcio responsable de la conservación y limpieza de las obras a los municipios chaqueños junto con los santiagueños. Es oportuno recordar aquí que la Comisión de Apoyo a la Obra de Toma del Canal de Dios (Anexo.VII) que estos últimos han constituido contiene el germen de un consorcio.

La experiencia demuestra que el contacto directo entre quienes tienen intereses comunes al mismo tiempo que intereses encontrados fortalece a los primeros a la vez que facilita la conciliación de los segundos. Si bien ello no es todavía la solución allana el camino hacia la conciliación que sí es una solución. Además , al bajar el nivel administrativo al plano intermunicipal el consorcio aliviaría la actividad administrativa y operativa de los organismos provinciales capitalinos. Asimismo permite aglutinar en un nivel superior las actividades hídricas de los municipios cuando razones de economía de escala así lo aconsejan.

La personería jurídica de los consorcios está reconocida por el código de aguas . En consecuencia el consorcio sería una perso-

na jurídica de derecho santiagueño (Arts.32 inc.3 y 75 CA).

No hay mayor experiencia en Santiago del Estero respecto a la formación y funcionamiento de consorcios. Solo estaría funcionando uno integrado por productores agropecuarios que ha demostrado dinamismo y eficiencia .

Su integración debería ser forzosa porque la prestación es indivisible . Sus integrantes serían las municipalidades .Su carta constitutiva, que la autoridad hídrica santiagueña tiene que homologar debería establecer por lo menos las formas de :

- a)Designación de sus órganos ejecutivos, sus atribuciones , duración de sus mandatos y las causales de su remoción;
- b)Aprobación de los planes de obras y servicios ;
- c)Determinación de los aportes a cargo de cada miembro .

En cuanto al valor de cada voto , lo mejor sería prescindir de los límites interprovinciales y dar uno a cada municipio , con lo que los municipios santiagueños tendrían mayoría . Una alternativa mas conservadora consistiría en organizar un consorcio chaqueño, pero sometido a la legislación santiagueña y otro santiagueño que concertarían su acción o bien un consorcio con una sección chaqueña y otra santiagueña.

La elasticidad del código de aguas de Santiago del Estero en materia de consorcios permite seguir estas u otras alternativas , pero solo la experiencia demostrará cual de las alternativas es la viable para que el consorcio cumpla su cometido.

El régimen de votación también puede tomar en cuenta la cantidad de habitantes de cada municipio y darle mas votos a los mas poblados. Para salvaguardar los derechos de las minoría corres -

ponde también determinar la cantidad de votos requeridos para la toma de decisiones .

Como el artículo 217 C.A obliga al usuario de obras anteriormente concedidas a pagar un derecho por su uso ,convendría acordar asimismo la imputación de las inversiones ya realizadas por Santiago del Estero para construir el Canal de Dios , las realizadas por el Chaco para su reacondicionamiento y las que se realicen en lo sucesivo.

Todas estas constituciones y modificaciones de derecho deberán inscribirse en el registro que el código referido manda llevar para hacerlas oponibles a terceros (Art.18) .26/

V. LA NEGATIVA DEL COFAPYS

Ante la negativa del ex-Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento, cuyo sucesor es el COFAPYS, a financiar las obras de distribución de agua potable que el Chaco proyecta construir es aconsejable que esta provincia insista en el pedido de financiamiento para que el organismo federal revea su criterio con tiempo suficiente para que la falta de fondos no postergue las obras por mas tiempo. En anexo XI adjunto anteproyecto de nota contestando a las objeciones de tipo jurídico que formuló el organismo federal al pedido de financiamiento.

Conviene que la Provincia de Santiago del Estero avale esa presentación para despejar cualquier duda sobre los inconvenientes de orden jurídico que pudieran obstar al abastecimiento de agua a las poblaciones chaqueñas y que acompañe en todo momento las gestiones que encare el Chaco con miras a obtener el financiamiento del COFAPYS.

Los cursos de acción aquí propuestos no son los únicos viables. La experiencia del COFAPYS y de la autoridad del agua santiagueña pueden ofrecer otras alternativas conducentes al mismo objetivo. Si alguna duda quedase convendría celebrar un nuevo acuerdo entre ambas provincias que estableciese claramente la calidad y alcance de la concesión. En anexo X se exponen las bases que podrían inspirar ese acuerdo.

En cuanto a la reactivación del pedido de financiamiento, habría que esperar a que los proyectos de nuevas obras estén mas avanzados, si bien es conveniente tener al COFAPYS al tanto de su progreso para que pueda ir efectuando sus previsiones operativas.



VI. ACCIONES PROPUESTAS

Esta Parte Segunda del informe ha propuesto varios cursos de acción para fortalecer no solo el marco regulatorio del Canal sino también el de toda la cuenca.

Todos ellos son coadyuvantes , por lo que pueden seguirse simultáneamente en la medida en que la capacidad operativa de las provincias lo permita . El hecho de que estos cursos de acción se apoyen recíprocamente no justifica que la demora en poder emprender alguno de ellos postergue la iniciación de cualquiera de los otros.

Resumiendo , esos cursos de acción son:

- a) Reactivación del Comité de la Cuenca Hídrica del Río Pasaje-Juramento- Salado (Anexo VI) o creación de un organismo similar.
- b) Creación y puesta en funcionamiento del Comité Técnico Interprovincial creado por el Acuerdo del 19 de noviembre de 1981 (Anexo V).
- c) Creación de un consorcio integrado por los municipios destinatarios del agua tanto santiagueños como chaqueños para la operación, limpieza y mantenimiento del Canal de Dios.
- d) Comunicación fehaciente a todas las provincias que integran la cuenca de las obras y proyectos que lleven adelante y del estudio de impacto ambiental que impone la ley 23879.
- e) Concertación de un estatuto regulatorio de la cuenca o por lo menos de reglas que normen la preservación y el aprovechamiento del agua con participación de todas las provincias que la integran y del Gobierno Nacional.
- f) Concertación de un acuerdo global entre el Chaco y Santiago del Estero o por lo menos para la rehabilitación de las obras

del Canal de Dios. (Anexo X).

g) Registro de los derechos de la Provincia del Chaco a recibir agua e instrumentación legal de la servidumbre de acueducto que ampare la prolongación del Canal desde la toma del Canal del Desierto hasta el límite interprovincial.

N O T A S

- 1/ Concordancias y comentarios del código civil argentino, 2a Ed.º VII , p.35.
- 2/ Legislación de Aguas , 1921 , p.107.
- 3/ La Ley del 26/10/957,, tº 88.
- 4/ Decreto del 11/11/1894.
- 5/ Informes de los Consejeros Legales del P.E , tº VIII , p. 313/324.
- 6/ J.A-IV-569.
- 7/ Convenio de San Salvador de Jujuy del 18/12/971 ratificado por ley nacional 20.292 y decreto nacional 4362/71 , ley 2429 de Catamarca , ley 1130 del Chaco , ley 2830 de Jujuy , ley 4444 de Salta , ley 3700 de Santiago del Estero y ley 3769 de Tucumán.
- 8/ En lo sucesivo se citará al código de aguas de Santiago del Estero sancionado el 21 de abril de 1980(Ley 4869)con las iniciales C.A.Su texto completo se glosa en Anexo IX.
- 9/ Declaración de Montevideo de la VIIa Conferencia Internacional Americana (1933) , Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente , Estocolmo , 1972), Resoluciones AG/ONU 2995/72 y 2996/72 , Resolución AG/ONU 3129/74 , Acuerdo de Ciudad del Este del 19 de octubre de 1979 con el Brasil y el Paraguay,etc.
- 10/ Provincia de La Pampa c/Provincia de Mendoza s/Acción posesoria y regulación de usos,, Exp.L.195 - XVIII , Sentencia de 3/11/987 , C.S.J.N. y Agua y Energía Eléctrica SE c/Provincia de Mendoza s/Cobro de regalías en J.A Nº 5717 , 27/3/991,

- 11/ Convención de París del 23/7/921 , 26 L.N.T.S 173.
 - 12/ Teclaff , Ludwik."Legal and Institutional Responses to Growing Water Demand".Ed.FAO.Legislative Study Nº 14,Roma , 1977.
 - 13/ op.cit.
 - 14/ Mendiluce , José María."Hidrographic Transfers in Spain " Global Law Water Systems.Ed.Colorado State University , 1975 , R.11/22.
 - 15/ Art.42 : "Agotamiento de la fuente. Cuando la disponibilidad de agua de una determinada fuente se encuentre totalmente comprometida con concesiones o permisos acordados , la autoridad de aplicación podrá declararla agotada ; en cuyo caso no se recibirán mas solicitudes de concesiones ni de permisos ."
 - 16/ Convenio de Resistencia del 14 de abril de 1972.
 - 17/ Acuerdo de Buenos Aires del 2 de octubre de 1981 , ratificado por ley nacional 22697 , ley de Santiago del Estero 5053 y ley del Chaco 2656.
 - 18/ C.S.J.N ,3/11/987 , Provincia de La Pampa c/Provincia de Mendoza s/Acción posesoria y regulación de usos , Exp. L.195 - XVIII . y C.S.J.N , 23/8/990 , Agua y Energía Eléctrica SE c/ Provincia de Mendoza s/Cobro de regalías en J.A Nº 5717 del 27/3/991,p.34.
 - 19/ La Provincia de La Pampa desde su creación y ya antes lo habían hecho sus organizaciones y habitantes está pidiendo reiteradamente a la de Mendoza que deje pasar a territorio pampeano por lo menos una pequeña parte del caudal de agua del río Atuel que embalsa en El Nihuil.
- Ante lo infructuoso de sus reclamos demandó a la de Mendoza

pidiendo:

a) Se la condene a :

1.-No turbar la posesión que la actora ejerce y le corresponde sobre el agua interprovincial que queda en el río Atuel después de atender los usos consuntivos y actuales que la demandada estuviese haciendo.

2.-Cumplir la Resolución 50/49 por la que Agua y Energía Eléctrica, como autoridad nacional de ríos interprovinciales (Ley 13030) mandaba que se efectuen sueltas periódicas en la presa para que llegue una pequeña cantidad de agua a La Pampa.

3.-Se reglamente el uso compartido de esa agua remanente.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda con el argumento de que solo pueden aplicarse al caso el derecho constitucional nacional o el comparado, inclusive el que llama "common law federal" norteamericano y el internacional y no encontró en esos ordenamientos jurídicos normas que amparasen el derecho pampeano.

Se limitó, por ello la Corte a exhortar a las partes a convenir una participación razonable y equitativa en los usos futuros negociando con buena fé y espíritu de buena vecindad.

La negativa de la Corte a juzgar deja sin solución al problema que motivó la demanda ya que nada hace presumir que la demandada escuchará la exhortación de la Corte puesto que la demanda se interpuso después de treinta años de reiteradas e infructuosas exhortaciones de la actora y de decisiones de la autoridad nacional en el mismo sentido.

Las pautas que la Corte propone a las provincias para reglar el uso de una cuenca compartida son muy endebles para proveer

a un adecuado manejo de algo que es común a unidades autónomas de una Nación. No resolvió el problema tan temido de que una provincia se niegue a negociar o entorpezca la negociación ni expuso principios de justicia para resolverlo sino que acudió a fórmulas que el derecho internacional propone para la comunidad internacional cuyas relaciones no siempre son solidarias y suele acudir a la violencia para dirimir sus controversias.

La Corte negó un fallo que cualquier tribunal arbitral hubiera acordado a dos estados soberanos.

El único saldo positivo del fallo, que no falló sino que exhortó, es su denuncia de un vacío normativo que las provincias deberían llenar cuanto antes.

20/ Padilla, Francisco E., "Derecho Agrario". Ed. U.N de Tucumán. San Miguel de Tucumán, 1952, p.219 y sigs.

21/ Valls, Mario F. "Recursos Naturales. Lineamientos de su Régimen Jurídico". Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, tomo II, p.226 y sigs.

22/ Acuerdo de Buenos Aires del 2 de octubre de 1981 ratificado por ley nacional 222697, ley de Santiago del Estero 5053 y ley del Chaco 2656.

23/ Tratado de Neuquén del 16 de diciembre de 1985 aprobado por ley 23896 (29/9/990)

24/ Es el fallo citado en la nota 18 y comentado en la 19.

25/ La obligación de evaluar y denunciar el impacto ambiental que puede producir una actividad o alguna cosa u obra realizada por el ser humano está virtualmente incorporada al derecho ambiental internacional y acogida por el derecho interno

(Ley 7343 de la Provincia de Córdoba del 18/9/985) , Arts.49/52 y ley nacional 23879).

El inconveniente que se plantea al cumplimiento de esta obligación es la tendencia egoísta del ser humano a ocultar el perjuicio o el daño que podría causar a terceros . Quien está en mejores condiciones que nadie para diagnosticar ese impacto es , precisamente quien lo crea . El conocimiento de ese impacto por terceros podría originar resistencias contra el proyecto , obra o actividad susceptibles de elevar los costos operativos o ponerlo en peligro, Por eso hay que vencer la natural reticencia del posible creador del riesgo ambiental.

La obligación de advertir a terceros sobre tales impactos está implícita en los principios básicos del derecho tradicional . Las leyes de policía sanitaria animal y vegetal y los códigos rurales imponen la obligación de denunciar determinadas enfermedades o plagas aún cuando ello contrariase los intereses del denunciante.

Esta obligación moral y jurídica de advertir a terceros ha dado origen a la obligación ambiental básica de estudiar y difundir los efectos directos e indirectos , individuales y colectivos , mediatos e inmediatos , presentes y futuros de toda actividad susceptible de perjudicar al ambiente.

El derecho interno norteamericano lo acogió para que la evaluación de proyectos tomase en debida cuenta la variable ambiental y la ley Nacional del Ambiente(91-190 del 1/1/9707, Sec.102 C) obliga a todos los organismos estatales nacionales que propongan modificaciones legislativas o planes que afectasen significati -

vamente la calidad ambiental a presentar al Consejo de Calidad Ambiental una declaración que contenga:

- a) Una nómina de los efectos perjudiciales inevitables ;
- b) Otras alternativas para la solución propuesta ;
- c) La relación entre el uso a corto plazo del ambiente y la preservación y fortalecimiento a largo plazo de la productividad.
- d) Una identificación de todo efecto sobre el ambiente que sea irreversible.

El estudio debe merituar la opinión de los organismos nacionales responsables de materias afines, además de los ambientales y también de los organismos estadales y locales responsables en materia ambiental.

Luego se lo somete a consideración del Consejo de Calidad Ambiental , se lo publica y adjunta al proyecto.

26/ Sobre el modo de llevar el registro de derechos de agua en la Provincia de Santiago del Estero tuve oportunidad de formular recomendaciones en un estudio que me encomendara la Cepal y el INCYTH reeditara bajo el título de "Parámetros e instrumentos jurídicos y administrativos en un Programa Nacional de Información Hídrica". Buenos Aires , 1976 , 53 pags. Puede consultarse en la Biblioteca del CFI . A esas recomendaciones me remito.

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA ARGENTINA CON FUERZA DE

L. E. Y.:

Art. 1.º.- Ratificación del tratado interprovincial concerniente al uso de las /
aguas de presa de embalse "Cabra Corral", suscripto por los señores
Gobernadores de las Provincias de Salta y Santiago del Estero, y cuyo /
texto expone:

"Los gobiernos de las provincias de Salta y Santiago del Estero, partes contratantes del presente tratado, que firman al pie sus excelencias los señores Gobernadores doctor don Ricardo J. Durán y doctor don Benjamín Zavallía; refrendadas sus firmas por su excelencia señor Ministro de Economía y Finanzas y Obras Públicas de la Provincia de Salta, Ing. Florencio Elías, y por su excelencia el Señor Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Santiago del Estero, Ing. Jorge Alberto Soris, teniendo en cuenta que sus respectivos pueblos tienen un común interés en la utilización de las aguas del Río Juramento, Pasaje o Salado, y que es deseable que los recursos hídricos del citado río sean desarrollados, utilizados y conservados para su beneficio y provecho en particular, y para los de toda la Nación en general, animados del propósito de proveer lo conducente a un fin eficiente de esas aguas, para el mejor desarrollo económico, social e industrial de Santiago del Estero y Salta, aprovechándolas para bebidas, riego y producción de electricidad; establecer una equitativa distribución de los caudales, remover las causas presentes y futuras que queden dar lugar a controversias y promover una acción conjunta para efectivizar los propósitos aquí enunciados; considerando lo resuelto por las mismas partes contratantes en el acuerdo del 16 de marzo de 1964, celebrado durante la Segunda Sesión de Gobernadores del Noroeste Argentino, dirigido a la elaboración de un tratado interprovincial de financiación y uso de las aguas de la presa de Embalse "Cabra Corral", han acordado, ad-referendum de las Honorables Legislaturas de ambas Provincias, lo siguiente:

Artículo Primero: Las partes contratantes declaran que los fines /
 del presente contrato son:

- a) Sentar las bases de cooperación conjunta para la financiación, construcción, operación y mantenimiento de la presa del Embalse "Cabra Corral", a construirse por el Estado Nacional en territorio de la Provincia de Salta y con destino a embalsar las aguas del Río Juramento, Pasaje o Salado;

- b) Convenir lo necesario para el mejor desenvolvimiento, conservación /

//////.....yento a su equitativa distribución entre ambas partes contratantes
con respecto a la utilización de las citadas aguas;

- d) Asegurar el desarrollo de la agricultura y la industria en sus respectivos territorios, con motivo del más eficiente uso de las aguas del embalse, y proteger las vidas y propiedades de sus habitantes contra las crecidas;
- e) Prover el logro de los objetivos trazados, con la mínima alteración de los compromisos actuales contraídos por las provincias signatarias en sus respectivos territorios;

Artículo Segundo: Las partes contratantes se obligan a respetar las siguientes prioridades en cuanto a las diversas utilidades de las aguas del embalse, impidiendo cualquier otro uso que las estorbe o restrinja:

- 1º.- Utilización para fines domésticos y sanitarios;
- 2º.- Utilización para riego;
- 3º.- Utilización para producción de electricidad.

A los fines de posibilitar en la forma más amplia del cumplimiento de las prioridades enunciadas, las partes contratantes reconocen la necesidad y consienten la construcción por el Estado Nacional, de la o las presas compensadoras que técnicamente sean de posible ejecución a tales fines. El orden de prioridades establecido en el presente artículo, será satisfecho con la o las presas compensadoras una vez construidas, reservándose entonces la presa de "Cabra Corral" exclusivamente para la producción de electricidad, como primera prioridad.

Artículo Tercero: Las partes contratantes adoptarán las medidas necesarias para la promoción, desarrollo y conservación de la riqueza latifolia.

Artículo Cuarto: Las provincias signatarias convienen que a partir de la fecha de vigencia del presente tratado, el uso o derivación temporal o permanente de las aguas del embalse, agua abajo de la presa "Cabra Corral" serán otorgadas por ambos gobiernos dentro de sus respectivas jurisdicciones, con arreglo estricto a lo acordado.

Artículo Quinto: El presente tratado está basado en la ejecución de un complejo de obras por el Estado Nacional, constituido en sus aspectos más fundamentales por una presa de embalse ubicada en el Río Juramento, aproximadamente a seis kilómetros agua abajo de la unión de los ríos Arias y Cunohipán; una central hidroeléctrica al pie de la presa, las obras de captación y derivación necesarias para que la provincia de Salta extraiga los caudales que según este tratado le corresponden, y una /

//////.

.....obra de construcción impermanente para los caudales que corresponden a la provincia de Santiago del Estero, con origen en las /
proximidades de la localidad de El Tunal y fin en el embalse de /
Figueroa, cuyo primer tramo conducirá también el riego de los
caudales que corresponden a la provincia de Salta.

Artículo Sexto: Las partes contratantes acuerdan regular la utilización de las aguas del embalse "Cabra Corral" a las siguientes /
normas generales:

- a) Las erogaciones anuales del embalse se distribuirán en la proporción del 43% (cuarenta y tres por ciento) para la provincia de Santiago del Estero, y 57% (cincuenta y siete por ciento) /
para la provincia de Salta, sobre la base de que la disponibilidad anual actual alcanza a alrededor de 900 M³;
- b) El balance hídrico de la distribución convenido, inciso anterior, se extenderá a lo largo del año agronómico, comprendido entre el 1° de Julio y 30 de Junio subsecuente;
- c) Las erogaciones anuales del embalse, serán medidas en los órganos de descarga de la presa;
- d) Las pérdidas por todo concepto que se produzcan en la conducción a partir del lugar de descarga, serán proporcionales a los gastos líquidos transportados para cada provincia;
- e) A los efectos de medir las entregas a cada provincia, se instalarán estaciones de aforo en todos los puntos de extracción y en los cursos de aguas no regulados por la presa que se estimen necesarios para la realización del cálculo de los derrames de los mismos, y que como mínimo son: El Tunal, Rio Las Piedras y Arroyo el Tripal;
- f) Las entregas en los puntos de extracción serán programadas y /
adaptadas al plan de cultivos que cada provincia signataria /
preparará anualmente.

Artículo Séptimo: Las partes contratantes a la Comisión creada por el artículo duodécimo dentro de la primera quincena del mes de Junio, sus necesidades hídricas mensuales para el año económico a iniciar, con su correspondiente plan de cultivos, consignando los caudales mínimos instantáneos no pudiendo superar la sumatoria de las demandas mensuales, el total de 900 M³, establecido para el año agronómico. La comisión a requerimiento de las provincias signatarias, oídas con la debida antelación, podrá modificar el programa de necesidades mensuales, siempre que el balance anual no supere el

//////....afino establecido.

Artículo Octavo: La comisión deberá comunicar a ambas partes contratantes con dos meses de antelación a la iniciación del año agrario, las estimaciones de las disponibilidades en el embalse para cada año, a fin de que, de resultar inferiores a los 900 Hm³ previstas como máximo ambas provincias signatarias actúen en condiciones de efectuar sus reajustes de superficie, u orientar sus cultivos hacia aquellos que supongan menor demanda hídrica.

Artículo Noveno: Los caudales asignados a ambas provincias signatarias serán medidos en los órganos de descarga de la presa, y efectuado el ajuste de las pérdidas en proporción a los caudales conducidos, se aforará en los tramos de derivación correspondiente a cada provincia, a los fines de determinar la cuantía de las entregas.

Artículo Décimo: La no utilización al término del año agrario, del todo o una parte del cupo anual asignado a cada provincia, no dará derecho a ninguna de ellas a transferir los volúmenes no utilizados a los años agrarios siguientes.

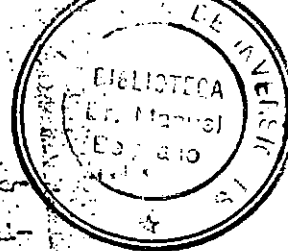
Artículo Undécimo: Las provincias signatarias se comprometen:

- a) A realizar los estudios y trabajos tendientes al logro de una mayor eficiencia del riego y de la conducción;
- b) A conceder regadíos eventuales sólo cuando estén debidamente garantizadas las demandas hídricas de las áreas empadronadas en categoría permanente;
- c) A no realizar acto alguno que implique disminución para cualquiera de ellas, de los volúmenes asignados.

Artículo Duodécimo: Las provincias signatarias convienen en constituir un organismo técnico-administrativo interprovincial, que se denominará "Comisión Interprovincial del Río Juramento", integrada por un representante de cada una de ellas y un tercero de Agua y Energía Eléctrica, investido de los mismos poderes y derechos de que gozan los primeros. Los gastos en que incurra la comisión con motivo de la aplicación del presente tratado, serán divididos por mitades entre las dos provincias y las remuneraciones personales de los representantes estarán a cargo de cada una de los representantes.

Artículo Décimo Tercero: Son funciones de la Comisión:

- a) Velar por la correcta aplicación de las normas del presente tratado



//////....b) Aprobar su reglamento funcional interno;

- c) Utilizar, instalar, construir y operar las estaciones de aforos que estime conveniente;
- d) Intervenir en las estimaciones que se realicen para pronosticar el caudal del río y cualquiera de sus tributaciones ubicados aguas arriba de la presa;
- e) Realizar estudios sobre los derrames del río;
- f) Recoger, analizar, correlacionar y conservar datos o informaciones, respecto de los caudales, almacenamiento, derivaciones y uso de las aguas del río y sus afluentes;
- g) Determinar las creaciones anuales del embalse y la cantidad de agua efectivamente usada cada año por las dos provincias signatarias;
- h) Determinar la magnitud de las entregas parciales de agua a cada provincia durante cada año agronómico;
- i) Determinar las pérdidas que se produzcan en el trayecto y la repartición de ellas entre las provincias signatarias, en proporción a los caudales constituidos en cada tramo;
- j) Tomar parte en las decisiones que se relacionen con la necesidad de disminuir el uso de las aguas embalsadas cuando así lo exijan razones técnicas o climáticas; en la determinación de la magnitud de las disminuciones;
- k) Desempeñar todas las funciones que este tratado requiera y hacer todo lo necesario, adecuado o conveniente para que sus cláusulas sean aplicadas de acuerdo con el espíritu que priva en su celebración.

Artículo Décimo Cuarto: Son obligaciones de la comisión:

- a) Elevar a la consideración de los Gobiernos de las dos provincias signatarias, antes del 1º de Julio de cada año, un presupuesto estimativo de sus gastos para el año agronómico siguiente, determinando el importe que cada provincia debe aportar y una memoria anual que abarque sus actividades durante el año agronómico precedente;
- b) Poner a disposición del gobierno de las provincias signatarias que lo requieran, y de Agua y Energía Eléctrica, cualquier información que el libro acceda a sus registros y

//////.....-c) Controlar el escurrimiento, captación y utilización de las aguas del Río Juramento, Panaja 6 Salado y eventualmente denunciar ex-
tracciones que puedan alterar el funcionamiento del complejo.

Artículo Décimo Quinto: Las Decisiones que adopte la comisión re-
quirirá la concurrencia de todos sus miembros, y aquellas serán
válidas cuando sean apoyadas por dos de ellos.

Artículo Décimo Sexto: La comisión será asistida a su requerimien-
to, cuando razones técnicas lo justifiquen, por personal especia-
lizado que suministrarán las provincias signatarias, o de Agua /
y Energía Eléctrica.

Artículo Décimo Séptimo: El acta de constitución de la comisión
será firmada dentro de los seis meses subsiguientes a la fecha
de vigencia del presente convenio.

Artículo Décimo Octavo: Las partes contratantes acuerdan que el
Estado Nacional, por intermedio de Agua y Energía Eléctrica, con-
struirá el complejo de las obras discriminadas en el artículo /
quinto, y operará y mantendrá por su cuenta y cargo, la presa del
embalse de "Cabra Corral" la o las presas compensadoras y la o /
las centrales hidroeléctricas del sistema. La comisión mantendrá
y mantendrá las obras de captación y conducción comunes y ambas
provincias, corriendo por cuenta y cargo de las mismas los emer-
gentes, en proporción a los caudales conducidos por cada una de /
ellas. Cada provincia signataria operará y mantendrá, por su cuen-
ta y cargo, las obras de su propia y exclusiva jurisdicción o be-
neficio. Todas las obras de derivación y conducción serán dimen-
sionadas para utilizar exclusivamente los caudales otorgados por
la presa de "Cabra Corral".

Si las provincias desearan aumentar las secciones previstas, para
conducir otros caudales no regulados, correrán por su cuenta y /
cargo las diferencias de costo que signifiquen estos incrementos
como así también los correspondientes a las estaciones de que /
sea necesario instalar para control.

Artículo Décimo Noveno: Las partes contratantes ajustará el uso
del agua que por este tratado se les asigna a los siguientes pri-
ncipios:

//////.....

.....a) - al mejor aprovechamiento del agua constituya el punto de partida, el alcance y el límite del derecho de usar que corresponde a cada parte;

b) la asignación que corresponde a cada provincia signataria / podrá ser destinada a todas y cada uno de los usos que ella se establezca o determine;

c) Ninguna provincia podrá excusarse en las proporciones que / no le asigne según el programa anual cuando tal uso excusado suponga privar a la otra del uso del agua que le corresponda según el mismo programa;

d) Cualquier provincia signataria podrá pedir a la comisión de / rivas temporarias de parte del porcentaje asignado a / la otra provincia no utilizado por esta, sin que ello ante / precedente ni otorgue derecho permanente a este beneficio; / debiendo la beneficiaria admitir las compensaciones necesarias / durante el año agrario en que uso se haya producido a fin / de equilibrar los excedentes consumidos;

e) La no utilización por cualquier provincia signataria de to- / do o parte del cupo de agua cuyo uso se le asigne por el pre- / sente tratado no se entenderá como renuncia del derecho a / tal uso en favor de la otra, ni constituirá pérdida o abando- / no de tal derecho.

Artículo Vigésimo: La central hidroeléctrica a construir por / Agua y Energía Eléctrica al pie de la presa "Cabra Corral" / formará parte de la red nacional de Interconexión del Noro- / este Argentino que opera y mantiene la citada empresa del Es- / tado Nacional, a los fines de la prestación por su parte del / servicio público de electricidad en jurisdicción de las pro- / vincias de Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamar- / ca y Tucumán. Los estudios y trabajos destinados a la termi- / nación total de la citada red nacional de Interconexión, co- / rran realizados de manera que ella quede totalmente cumplida / al término de la ejecución del complejo de obras mencionadas / en el artículo quinto.

Artículo Vigésimo Primero: La provincia de Salta hará efec- / tiva la expropiación de los inmuebles afectados por la cons- / trucción de la presa "Cabra Corral", de conformidad con la / Ley Provincial N° 3.880, procediendo, dentro de los tres meses / siguientes a la fecha de la efectiva adquisición del do-

//////...ción, a transferir gratuitamente dichos inmuebles a Agua y Energía Eléctrica a los fines de la ejecución de las obras. Asimismo, y de acuerdo con los elementos de juicio que aporta Agua y Energía Eléctrica, la provincia de Salta se obliga a expropiar, para los mismos fines, los inmuebles necesarios para la ejecución de las siguientes obras: la o las presas / compensadoras, las obras de captación y derivación para los caudales correspondientes a Salta, y los terrenos afectados a la construcción del canal y obras de arte de conducción de El Tunal, hasta el límite con la provincia de Santiago del Estero. Asimismo, la provincia de Santiago del Estero se obliga a expropiar los terrenos a ocupar por las obras, desde el límite interprovincial hasta el Embalse de Figueroa. Los inmuebles con-
dicionados serán también entregados a Agua y Energía Eléctrica, en la forma establecida en el presente artículo, a medida que vayan necesitando.

Artículo Vigésimo Segundo: A los fines de financiar el costo de las expropiaciones a que se refiere el artículo anterior, las partes contratantes acuerdan que con excepción de las relaciones con los terrenos necesarios para la construcción de la o de las presas compensadoras, serán por cuenta y cargo de cada provincia las expropiaciones que correspondan a sus propios territorios.

Artículo Vigésimo Tercero: Las provincias signatarias gestionarán ante Agua y Energía Eléctrica la inclusión en los pliegos de condiciones de la licitación para la contratación de la construcción de la presa, central hidráulica y obras complementarias, que los seguros obreros se contraten ante el Instituto Provincial de Seguros de Salta.

Artículo Vigésimo Cuarto: El presente convenio entrará en vigencia cuando haya sido ratificado por las Honorables Legislaturas de las Provincias signatarias, a cuyo fin el Gobernador de una cursará aviso de la ratificación de la H. Legislatura respectiva, al Gobernador de la otra, contándose la vigencia desde la fecha de la publicación de la Ley aprobatoria promulgada en el último lugar.

Artículo Vigésimo Quinto: En prueba de conformidad, los Gobernadores de las Provincias de Salta y Santiago del Estero, firma el presente en cuatro ejemplares, cada uno de los cuales será y constituirá un original, / dos de ellos se entregan a ambas provincias signatarias y un tercero a Agua y Energía Eléctrica. El cuarto ejemplar, una vez entrado en vigencia el convenio, será remitido en forma conjunta por ambos gobiernos, al Honorable Congreso de la Nación, a los fines establecidos en el artículo 107 de la Constitución Nacional.

//////

//////...-Celebrado en la ciudad de Buenos Aires, a los doce días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y cinco.

Firmados: Dr. Ricardo J. Durán, Gobernador de Salta; Ing. Florencio Elías, Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas de Salta; Dr. Benjamín Zavalía, Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero; Ing. Jorge Alberto Coria, Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Santiago del Estero. Forman parte del presente tratado todas las notas labradas durante las deliberaciones de la Comisión designada para la elaboración de su proyecto. Asimismo la Comisión creada por el artículo décimo segundo, se denominará "Comisión Interprovincial del Río Pasaje, Juramento o Salado".
Firmados: Dr. Ricardo J. Durán, Gobernador de Salta; Ing. Florencio Elías, Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas de Salta; Dr. Benjamín Zavalía, Gobernador de Santiago del Estero; Ing. Jorge Alberto Coria, Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Santiago del Estero.
Art. 2º - Comuníquese al P. Ejecutivo.

SALA DE SESIONES, Santiago del Estero, 1º de Marzo de 1966.-

Armando Archetti - Aldo W. Alzogaray.

Presidente

Secretario

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, 14 de Marzo de 1966.-

POR TANTO:

Tóngase por Ley de la Provincia, cómplase, comuníquese, publíquese y dése al BOLETÍN OFICIAL.

Armando Archetti - Nabor B. Barrionuevo.-

ES COPIA:

S.E.A.-

en intermedia del río Juramento, Pasaje o Salado, a las siguientes normas generales:

a) Las erogaciones anuales, de la cuenca intermedia, incluyendo las erogaciones del río Medina, mientras éstas no fueran derivadas por la Provincia de Salta, se distribuirán en la proporción del 50 % para cada provincia signataria, medidas en los órganos de descarga de la presa de embalse de El Tunal.

b) El balance hídrico de la distribución convenida en el inciso anterior se extenderá a lo largo del año agrario comprendido entre el 1º de julio y el 30 de junio subsecuente.

c) A los efectos de la distribución de agua para cada provincia, se realizarán mediciones en todos los puntos que se estimen convenientes para el fiel cuantificación de la captación en el convenio original y en el presente.

d) Las entregas en los puntos de extracción serán programadas y adaptadas al plan de cultivos que cada provincia signataria preparará anualmente observándose en todo caso, la proporción establecida en el inc. a).

Quarto: Asignar a la Comisión Interprovincial del río Juramento, Pasaje o Salado, creada por el art. 12 del tratado original y con respecto a la presente convención y del tratado adicional que oportunamente se suscriba, las funciones, obligaciones, quórum y sus decisiones y existencia técnicas, que establecen los arts. 13, 14, 15 y 16 del referido tratado original.

Quinto: El presente convenio y el tratado adicional que sea consecuencia del mismo, entrará en vigencia cuando hubiere sido ratificado por ley de cada provincia signataria, a cuyos efectos el gobernador de cada una cursará aviso de la ratificación al gobernador de la otra, continuándose la vigencia desde la fecha de publicación de la ley aprobatoria promulgada en último lugar.

Sexto: En prueba de conformidad, los gobernadores de las provincias de Salta y Santiago del Estero, firman el presente en 4 ejemplares, cada uno de los cuales será y constituirá un original, 2 de ellos se entregarán a ambas provincias signatarias y en tercero a Agua y Energía Eléctrica. El cuarto ejemplar una vez suscripto el tratado y entrado en vigencia, será remitido en forma conjunta por ambos gobiernos al Poder Ejecutivo de la Nación.

Celebrado en Cabra Corral —departamento de La Viña—, provincia de Salta, a los 13 días del mes de mayo de 1971, formando parte integrante del presente las actas N° 12 del 12 de diciembre de 1969; N° 13 del 13 de marzo de 1970; N° 18 del 23 de octubre de 1970 y N° 19 del 8 de enero de 1971, suscriptas por los señores representantes de ambas provincias en la Comisión Interprovincial del río Juramento,

Pasaje o Salado. — Ricardo J. Spangenberg —
Carlos Alberto Jensen Viano, — Víctor Mucchi
— Antonio Gómez Omill.

Art. 2º — Conuníquese, etc.

CONVENIO

En la ciudad de Salta, capital de la provincia del mismo nombre, a los diez y seis días del mes de MARZO del año mil novecientos setenta y ocho, entre la PROVINCIA DE SALTA, representada en este acto por su Gobernador, Capitán de Navío (R.E.) Dr. ROBERTO AUGUSTO ULLOA, por una parte, y por la otra la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, representada por su Gobernador, General de Brigada (R) Dr. CESAR FERMÍN OCHOA, celebran el presente CONVENIO, para la construcción de la obra "TOMA SOBRE EL RIO SALADO PARA ALIMENTACION DEL CANAL DE DIOS", el que se regirá por las siguientes cláusulas: - - - - -

PRIMERA: La PROVINCIA DE SALTA autoriza a la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, a utilizar los terrenos necesarios dentro de su territorio provincial, para ejecutar los trabajos correspondientes a la obra "TOMA SOBRE EL RIO SALADO PARA ALIMENTACION DEL CANAL DE DIOS" y parte de la traza del Canal que se ubique en el mismo o en la zona en litigio de límites entre ambas provincias, sin que ello implique afectar ni prejuzgar de ningún modo, respecto a los derechos que cada provincia alega sobre esa área. - -

SEGUNDA: Los trabajos se realizarán de conformidad a la planimetría que forma parte del presente convenio inserta en la nota n° 1. 11 de fecha 31 de octubre de 1977, identificada como planos E. O.; C.2; C.3 y C.7 de la Dirección General de Recursos Hídricos de Santiago del Estero y la planimetría ejecutada por la Comisión Provincial de Límites de la Provincia de Salta, que corre

///...

- 2 -

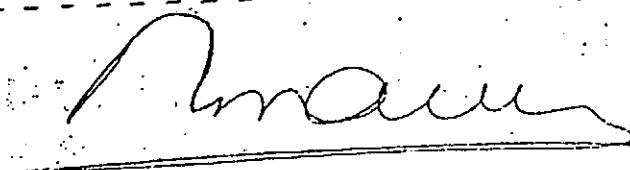
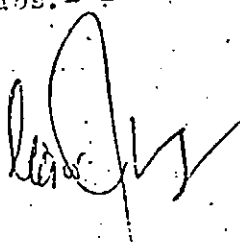
///... a fs. 20 del expediente O. 01-23.047/77. Por la nota mencionada se formalizó el pedido de autorización para iniciar la obra de toma, en la jurisdicción de la Provincia de Salta. - - -

TERCERA: Los gastos que demande la ejecución de los referidos trabajos, correrán por la exclusiva cuenta y cargo de la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO. - - -

CUARTA: La PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO se compromete a pagar como única compensación a la autorización conferida en la cláusula primera del presente convenio, los importes que resulten de las expropiaciones que, a pedido de aquella, disponga la PROVINCIA DE SALTA, de los terrenos a ser afectados para la ejecución de los mencionados trabajos. - - -

QUINTA: Las obras, servicios y expropiaciones que se efectuaren como consecuencia de este convenio, no innovan ni implican sentar derechos o precedentes con respecto a las cuestiones de límites que existen a la fecha entre las provincias que lo suscriben. - -

- - -: En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba mencionados. - - -



19-11-81

-----En la localidad de Río Muerto - Provincia del Chaco a los diecinueve días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, reunidos los señores Gobernadores de las Provincias de Santiago del Estero, Gral Br (R) D CESAR FERMIN OCHOA y del Chaco, Cnl (R) D JOSE DAVID ALBERTO RUIZ PALACIOS con el fin de concertar las bases para el aprovechamiento de los excedentes de agua del Canal de Dios por parte de la Provincia del Chaco, y teniendo en cuenta:

-----Que en el acuerdo firmado el 02-10-61 se actualiza y pone de manifiesto la intención de las Provincias signatarias de llevar adelante proyectos regionales que respondan a las características de los problemas cuya solución es imprescindible proveer.

-----Que los afloramientos realizados sobre el Canal de Dios en su punto de descarga a la represa de Pampa de los Guanacos dan cuenta de un excedente, que convenientemente captado y conducido cubriría la demanda primaria de agua de poblaciones chaqueñas que no cuentan actualmente con fuentes propias de calidad apta para consumo humano y uso doméstico.

-----Que es posible prolongar la traza del canal por línea paralela a la Ruta 16 hasta alcanzar por gravedad los puntos de demanda y que ello es factible técnicamente mediante la ejecución de obras de toma, sistema de control, conducción y derivación conforme a la naturaleza de los terrenos y objetivos propuestos.

LOS GOBERNADORES DE LAS PROVINCIAS
DE SANTIAGO DEL ESTERO Y DEL CHACO

ACUERDAN

ARTICULO 1º: La Provincia de Santiago del Estero concede a la Provincia del Chaco el uso de los excedentes de agua del Canal de Dios a tomar en el punto terminal del mismo.

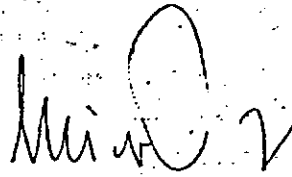
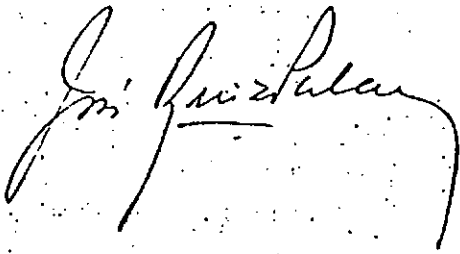
ARTICULO 2º: La Provincia del Chaco se compromete a utilizar los excedentes de agua con la exclusiva finalidad de satisfacer las demandas de consumo humano y uso doméstico de poblaciones próximas a la zona que no cuentan actualmente con fuentes alternativas de calidad necesaria.

ARTICULO 3º: La Provincia de Santiago del Estero garantiza la libre disposición de un cupo no inferior a 0,2m³/seg. salvo razones de fuerza mayor que interrumpan el normal funcionamiento del sistema.-----

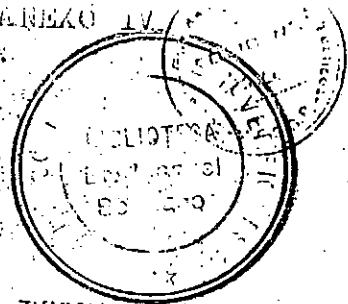
ARTICULO 4º: La Provincia del Chaco asume la total responsabilidad por las obras, sus costos de ejecución, operación y mantenimiento, así como por la calidad necesaria conforme a su uso potable previo a su distribución.

ARTICULO 5º: El presente Acuerdo se formaliza sin término prefijado reservándose la Provincia de Santiago del Estero el derecho a fijar el mismo, previa comunicación de las razones que la obliguen por prioridad de propias necesidades, con una anticipación no menor a un año.-----

----- En prueba de conformidad sus excelencias, los señores Gobernadores de las Provincias de Santiago del Estero y del Chaco, proceden a firmar dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.-----



CESAR YERMIN OCHOA
GENERAL DE BRIGADA (R)
GOBERNADOR SANTIAGO DEL ESTERO



Entre la Provincia de Santiago del Estero, representada por el Sr. Gobernador, Dr. CARLOS ARTURO JUAREZ, y la Provincia del Chaco representada por el Sr. Gobernador Dr. FLORENCIO TELLY, con quien en celebrar la ampliación y modificación del Acuerdo firmado el 19-11-81 para el uso por parte de la Provincia del Chaco de los excedentes de agua del Canal de Dios, en lo siguiente:

Art. 1º- Acuerdan modificar el Artículo Quinto del Acuerdo original del 19-11-81, el cual quedará redactado de la siguiente forma: "El presente Acuerdo se formaliza sin término, Perpetuo".

Art. 2º- Acuerdan constituir un Comité Técnico Interprovincial para coordinar las tareas de construcción, mantenimiento y uso del Canal de Dios, integrado por un representante titular y otro alterno, por cada Provincia, los que serán designados dentro de los treinta (30) días de la firma del presente Acuerdo por las autoridades provinciales respectivas, autorizándose a establecer su reglamento de funcionamiento.

Art. 3º- la Provincia del Chaco tendrá a su cargo la conservación y mantenimiento del Canal de Dios desde la Toma del Canal del Desierto hasta el límite interprovincial, limitándose a las tareas de movimiento de suelos, desmaleamiento y monte, el cual será supervisado por el Comité Técnico.

Art. 4º- las Provincias podrán colocar arcos permanentes con personas o equipos en los tramos a su cargo para dar solución a problemáticas emergentes.

6-8

Tip

1111-

gubernación

Santiago, 21 de Mayo



////....

Art. 5º- Ambas Provincias se comprometen a gestionar fondos ante el Gobierno Nacional, para realizar obras que mejoren la eficiencia de captación y conducción.

Art. 6º- La administración del agua del Canal de Dios estará a cargo exclusivamente de la Provincia de Santiago del Estero.

En la ciudad de Santiago del Estero, a los ... días del mes de junio de mil novecientos ochenta y seis y en prueba de conformidad sus Excelencias, los señores Gobernadores de Santiago del Estero y del Chaco, proceden a firmar dos (2) ejemplares de un mismo tenor y en un solo efecto.

[Signature]
GOBERNADOR DE SANTIAGO DEL ESTERO

[Signature]
GOBERNADOR DEL CHACO

PROVINCIA DEL CHACO
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras
Servicios Públicos

ACTA DE ACUERDO

En la ciudad de _____ a los _____ días del mes de _____ del año mil novecientos ochenta y siete, entre la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la Provincia del Chaco, en adelante "La Subsecretaría", representada en este acto por su titular el Ing^o ROBERTO JAA. DE RODRIGUEZ y la Administración de Recursos Hídricos de la Provincia de Santiago del Estero, en adelante "Recursos Hídricos", representada en este acto por su titular el Ing^o GUILLERMO PAZ, se acuerda celebrar el presente Acuerdo en el marco del Convenio celebrado oportunamente entre la Provincia del Chaco y la Provincia de Santiago del Estero.

OBJETO: Ejecutar las obras en la Toma de aguas del Canal de Dios, consistente en la realización de un canal revestido sobre la solera de la actual aducción para permitir el ingreso del agua en forma directa, todo según Documentación Técnica que como Anexo I forma parte de este Acuerdo.

ORGANISMOS INTERVINIENTES: Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la Provincia del Chaco, en adelante "La Subsecretaría" y la Administración de Recursos Hídricos de la Provincia de Santiago del Estero en adelante "Recursos Hídricos".

COMPROMISO: "La Subsecretaría" se compromete a ejecutar la Obra "Profundización del Canal Aductor - Toma Canal de Dios" por un monto total de A 154.439,81.- (Austerales Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con Ochenta y Un Centavos) conforme a planos y presupuesto que forma parte como Anexo I al presente Acuerdo.

MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA: La responsabilidad de la ejecución de la Obra será de "La Subsecretaría", la que efectuará las contrataciones, adquisiciones y anticipos necesarios y realizará la Dirección Técnica, emitiendo informes sobre las partes ejecutadas.

La Administración de Recursos Hídricos se compromete a autorizar la ejecución de las obras y a posibilitar los medios que estén a su alcance para lograr el objetivo, haciendo el seguimiento de los trabajos para el fiel cumplimiento del mismo.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: Ambos organismos coordinarán con los trabajos de Movimiento de Suelo que sean necesarios para mantener en servicio el Canal y la Toma propiamente dicha.

TRABAJOS IMPREVISTOS: Si durante la ejecución de la Obra hubiere modificación de la Obra, por ampliación o reducción, o se produjeran fenómenos meteorológicos anormales, "La Subsecretaría" modificará los planos de ejecución de las Obras, pudiéndose convenir un acuerdo complementario en el cual se fijarán las nuevas condiciones y reajustes pertinentes.

REFERENCIA: Atento que este acuerdo es celebrado en el marco del convenio entre las dos Provincias. La Provincia de Santiago del Estero, a través de la Adminis-

- 2 -

tración de Recursos Hídricos se compromete a entregar 0.200 m³/seg. en la localidad de Río Muerto - Provincia del Chaco durante el tiempo establecido oportunamente en el convenio precedente.-----

VIGENCIA DEL ACUERDO: Tendré una vigencia de sesenta (60) días corridos contados a partir del Acta de Iniciación de los trabajos que en principio se establece para el día 15 de abril de 1967.-----

-----En prueba de conformidad se firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-----

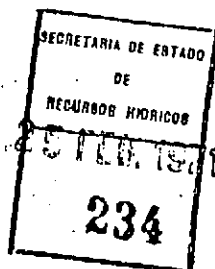
ROBERTO C. PORRIAGUEZ
SUBSECRETARIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

NOTA: El Administrador de Recursos Hídricos de la Provincia de ///
Santiago del Estero, firma este Convenio, con la siguiente /
enmienda; que el caudal indicado en la Referencia, de este acuerdo
será asegurado, salvo razones de fuerza mayor que interrumpen el /
normal funcionamiento del sistema.-----

RAMON DEL VALLE PAZ
PRESIDENTE INTERVENTOR
Adm. Gen. de Recursos Hídricos



Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Estado de Recursos Hídricos.



Buenos Aires, 25 FEB. 1971

VISTO el convenio celebrado en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, el día 18 del mes de febrero del año 1971, entre el señor Secretario de Estado de Recursos Hídricos de la Nación y los señores Gobernadores de las Provincias de Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero, integrantes de la Región de Desarrollo del Noroeste Argentino (NOA); y,

CONSIDERANDO:

La necesidad de concretar la aplicación de las normas estipuladas en dicho convenio y proceder a la creación de los Comités de Cuencas Hídricas,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE RECURSOS HIDRICOS

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Créase el Comité de Cuenca Hídrica del Río Pasaje-Juramento- Salado, con sede en la Ciudad de Santiago del Estero.

ARTICULO 2º.- Designase representante de la Secretaría de Estado de Recursos Hídricos al Director Nacional de Fomento Hídrico del Interior y Ríos Interprovinciales, Dr. Antonino Carlos VIVANCO.

ARTICULO 3º.- Invítase a los señores Gobernadores de las Provincias de Salta, Santiago del Estero y Santa Fé a designar su representante ante el Comité de Cuenca Hídrica del Río Pasaje - Juramento - Salado.

ARTICULO 4º.- Invítase a designar un representante ante el Comité Asesor de la Cuenca Hídrica, a la Subsecretaría de Asuntos Provinciales del Ministerio del Interior, a la Empresa Agua y Energía Eléctrica, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y a la Oficina Regional de Desarrollo de la Secretaría del CONADE.

ARTICULO 5º.- El Comité de la Cuenca Hídrica deberá elevar a consideración y aprobación de la Secretaría de Estado de Recursos Hídricos, el Plan de Trabajo a desarrollar en la Cuenca del Río Pasaje - Juramento- Salado, dentro de un plazo máximo de sesenta días a contar de la fecha de su constitución.

ARTICULO 6º.- El Comité de la Cuenca Hídrica, deberá elevar un informe mensual por intermedio de su Presidente



Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Secretaría de Estado de Recursos Hídricos

-2-

taría de Estado de Recursos Hídricos.

ARTICULO 7º.- Asignase como contribución de la Secretaría de Estado de Recursos Hídricos para el año 1971, el monto de \$a. 280.000 (doscientos ochenta mil pesos Ley 18.188) que se afectará al cumplimiento del Plan de Trabajo una vez aprobado por la Secretaría.

ARTICULO 8º.- La Dirección General de Administración deberá adoptar las previsiones presupuestarias hasta un monto máximo de \$a. 280.000 (doscientos ochenta mil pesos Ley 18.188) para el ejercicio 1972, en la medida que el cumplimiento del Plan de Trabajo así lo requiera.

ARTICULO 9º.- Comuníquese a los señores Gobernadores de las Provincias de Salta, Santiago del Estero y Santa Fé; a la Subsecretaría de Asuntos Provinciales del Ministerio del Interior; a los Subsecretarios de Asuntos Institucionales y de Asuntos Técnicos; a la Dirección Nacional de Fomento Hídrico del Interior y Ríos Interprovinciales; a la Dirección General de Administración; a la Empresa Agua y Energía Eléctrica; al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y a la Oficina Regional de Desarrollo de la Secretaría del CONADE.

ARTICULO 10º.- Regístrese, dése a publicidad y archívese.

RESOLUCION N° 22 /71.



Guadagni
ALDO GUADAGNI
SECRETARIO DE ESTADO DE RECURSOS HÍDRICOS

SECRETARÍA DE ESTADO DE RECURSOS HÍDRICOS	
E J E	0
DI	
ANO	



ADMINISTRACION PCIAL. DE RECURSOS HIDRICOS

Ley 4745

AVENIDA BELGRANO (N) 924
4200 - SANTIAGO DEL ESTEROCONVENIO"COMISION DE APOYO A LA OBRA DE TOMA DEL CANAL DE DIOS"

En la ciudad de Santiago del Estero, a los 7 días del mes de Abril de 1987, se firma el presente Convenio entre la Administración Provincial de Recursos Hídricos, representada por su Presidente Interventor Ing. Agrimensor RAMON DEL VALLE PAZ; la Intendencia de la ciudad de Monte Quemado, por el Sr. JORGE ALBERTO NAZAR y los Sres. usuarios del Canal de Dios, representados por los Sres. JUAN BERRA ONDO, HUGO TIBERTI y PEDRO JULIAN, dentro de los siguientes términos:

- 1°.- El OBJETIVO del presente Convenio, es constituir una "COMISION DE APOYO" para mantener en perfecto y permanente estado de operabilidad a la obra de Toma del Canal de Dios.
- 2°.- La Administración Provincial de Recursos Hídricos, a los fines del presente Convenio, estará representada por el Area de Conservación y Mantenimiento.
- 3°.- Los Sres. Intendentes y Comisionados Municipales del Area de Influencia del mencionado Canal, podrán adherirse oportunamente a este Convenio.
- 4°.- Los miembros de la Comisión, que representan a los usuarios / particulares, podrán ser reemplazados de conformidad con sus pares, debiendo en tales circunstancias, comunicar por escrito a la Administración Provincial de Recursos Hídricos.
- 5°.- La vigencia del presente Convenio queda establecida en el término de dos (2) años, con opción a ser prorrogada por un período más, de igual duración, con conformidad de partes.
- 6°.- Este Convenio puede ser rescindido por cualquiera de las partes, debiendo tal circunstancia ser comunicada por escrito // con una antelación mínima de treinta (30) días.
- 7°.- Los integrantes de la Comisión, podrán brindar su apoyo tendiente a lograr los objetivos fijados en el Art.1º, mediante el aporte de : materiales, repuestos, combustibles, lubricantes, mano de obra (común y/o especializada) y el uso de maquinarias y herramientas.
- 8°.- Las atribuciones de la Comisión serán las de fiscalizar todos los trabajos de conservación y mantenimiento que se hagan en la obra de toma y comunicar las necesidades que surjan con la premura del caso, en forma directa o por intermedio de un miembro informante que esté en permanente contacto con la Administración Provincial de Recursos Hídricos.

Ing. Agr. RAMON DEL VALLE PAZ
PRESIDENTE INTERVENTOR
Area. Prov. de Recursos Hídricos

JORGE ALBERTO NAZAR



ADMINISTRACION PCIAL. DE RECURSOS HIDRICOS

Ley 4745

AVENIDA BELGRANO, (N) 924
4200 - SANTIAGO DEL ESTERO

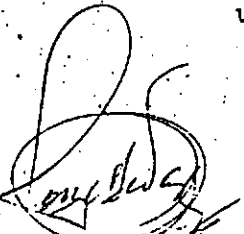
- 2 -

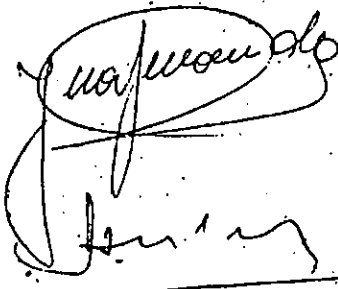

////

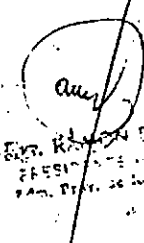
9°.- La Administración Provincial de Recursos Hídricos, llevará un registro detallado de todos los aportes que reciba extra Organismo.

10°.- Queda entendido que los términos del presente Convenio se encuadran dentro de lo que establece el Código de Aguas, / Ley N° 4.869.

11°.- De conformidad, firman las partes tres (3) ejemplares de / un mismo tenor y a un solo efecto.


JORGE ALBERTO NAZAR
INTENDENTE MUNICIPAL
MONTE QUEMADO
SANTIAGO DEL ESTERO


CERRO RAYON DEL VALLE S.A.
PRESIDENTE INTERVENTOR
SAM. PROV. DE RECURSOS HIDRICOS



*Secretaría de Recursos Hídricos
Servicio Nacional de Agua Potable
y Saneamiento*

BUENOS AIRES, — 5 FEB 1987

Señor
Dirección de Contralor de Prestaciones
Subsecretaría de Servicios Públicos
Ing. Jorge MARTINA
CHACO

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con relación a la utilización del Canal de Dios como fuente de abastecimiento de agua a las Localidades de Río Muerto, Pampa del Infierno, Los Frentones y Concepción del Bermejo, de esa Provincia, y en respuesta a su nota del 3-12-86.

Respecto al Acuerdo Complementario del Contrato suscripto entre las Provincias del Chaco y Santiago del Estero, el art. 1º establece que dicho acuerdo "se formaliza sin término prefijado" lo que implica que cualquiera de las partes puede rescindirlo en cualquier momento; entendemos que de esta forma no queda asegurada la continuidad de la fuente de agua, para las poblaciones mencionadas, por lo que sería necesario otro acuerdo complementario o la modificación del primero, por el cual el término de duración del contrato sería a perpetuidad o por lo menos a 20 años que es el período de diseño de las obras.

Con relación a la restante documentación enviada se requiere:

-Nuevas fotocopias de los análisis de agua ya que en las remitidas es ilegible la parte izquierda donde figuran los parámetros analizados. Se requiere asimismo la determinación de la turbiedad del agua del canal.

-Informar sobre las previsiones adoptadas para reservas de agua que cubran los períodos de monda del canal, de acuerdo con la duración de los mismos.

No obstante, teniendo en cuenta que sólo se logrará el caudal necesario si se completan todas las tareas de mantenimiento y mejoramiento del canal, sólo podrá otorgarse la aprobación definitiva de esta fuente para los cuatro pro-



*Secretaría de Recursos Hídricos
Servicio Nacional de Agua Potable
y Saneamiento*

111.2

yectos una vez que se cuente con la certeza de que lleguen a esas Localidades los caudales previstos.

Sin otro particular, saludamos a Ud., muy atenta--
mente.

DR. LUIS GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO GENERAL
1970-1971

NOTA N° 182

PCR

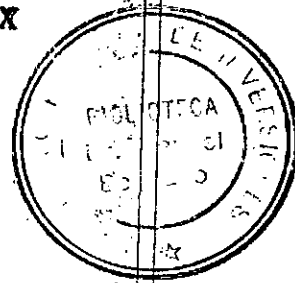
**CODIGO DE AGUAS
De Santiago del Estero**

ADLA XL-B

LEY 4869

ANEXO IX

2315



7. — Sustitúyese en el art. 288, la expresión "cien mil pesos moneda nacional" por "un millón de pesos".

8. Sustitúyese el art. 289, por el siguiente:

Art. 289. — Al interponerse el recurso se acompañará un recibo del Banco de la Provincia de Santiago del Estero en el que conste haberse depositado la suma de cincuenta mil pesos:

No tienen obligación de efectuar este depósito, los que gocen del beneficio de litigar sin gastos, ni el Fisco provincial o municipal, ni cualquiera de sus Organismos.

9. — Sustitúyese en el art. 313 en el inc. 2°, la expresión: "quinientos mil pesos moneda nacional" por "cuatro millones de pesos".

10. — Sustitúyese en el art. 322, la expresión "menor de mil ni mayor de cien mil pesos moneda nacional" por "menor de diez mil ni mayor de un millón de pesos".

11. — Sustitúyese en el art. 366, la expresión "un mil a veinte mil pesos moneda nacional" por "diez mil a doscientos mil pesos".

12. — Sustitúyese en el art. 391, la expresión "trescientos pesos" por "tres mil seiscientos pesos".

13. — Sustitúyese en el art. 423, la expresión "mil a cinco mil pesos moneda nacional", por "diez mil a trescientos mil pesos".

14. — Sustitúyese en el art. 428, la expresión "mil a diez mil pesos moneda nacional" por "diez mil a quinientos mil pesos".

15. — Sustitúyese en el art. 438, la expresión "cinco mil pesos moneda nacional", por "cincuenta mil pesos".

16. — Sustitúyese en el art. 632, en el inc. 1°) la expresión: "un mil y cincuenta mil pesos moneda nacional", por "diez mil y quinientos mil pesos".

17. — Sustitúyese en el art. 708, la expresión "mil a diez mil pesos moneda nacional" por "diez mil a cien mil pesos".

18. — Sustitúyese en el art. 717, en el inc. 2°, la expresión "tres millones de pesos moneda nacional" por "cinco millones de pesos".

19. — Sustitúyese el 2° párrafo del art. 813 por el siguiente:

"Asimismo se acreditará el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 289, si se trata del supuesto del apartado 3° del art. 812.

20. — Sustitúyese en el art. 814, en el inc. 4, por el siguiente.

Inc. 4. — Si se ha satisfecho la exigencia del art. 289, sólo en el supuesto de fundarse el recurso en la causal del inc. 3, del art. 812.

Art. 2. — El Superior Tribunal de Justicia actualizará semestralmente los montos establecidos en el artículo anterior, con arreglo a los índices oficiales de precios mayoristas no agropecuarios.

Art. 3. — Las disposiciones de la presente ley, serán de aplicación a los procesos de trámite.

Art. 4° — Comuníquese, etc.

LEY 4869

Código de Aguas — Derogación de las leyes 2186, 2518, 4513, 4612 y 4756.

Sanción y promulgación: 21 abril 1980.
Publicación: B. O. 22/V/80.

Citas legales: ley 2186: XI-B, 2023; ley 2518: XV-B, 1800; ley nac. 6546: 1889-1919, 773; ley 3407: XXVII-B, 1450; ley nac. 17.435: XXVII-B, 1732; ley nac. 17.711: XXVIII-B, 1810.

LIBRO 1 — Disposiciones generales

TITULO I — Ambito de vigencia, objeto de regulación y autoridad de aplicación

Art. 1° — Objeto de regulación

Este Código y los reglamentos que en su consecuencia se dicten establecen el régimen jurídico y regirán las restricciones al dominio privado y todas las actividades relacionadas con el aprovechamiento, conservación y la defensa contra los efectos nocivos de las aguas, álveos y obras hidráulicas en la provincia de Santiago del Estero.

Art. 2° — Inalienabilidad del dominio público

El uso por cualquier título de aguas públicas, álveos, u obras construidas para utilidad o comodidad común no les hace perder el carácter de bienes públicos del Estado, inalienables e imprescriptibles.

Art. 3° — Ejercicio del control

El control y vigilancia del uso de las aguas álveos, obras hidráulicas y de las actividades que pueden afectarlos, está a cargo de la autoridad de aplicación de este Código a la que se facilitará el uso de la fuerza pública y las ordenes de allanamiento necesarios.

Art. 4° — Autoridad de aplicación

Salvo los casos especialmente previstos, será autoridad de aplicación de este Código la Administración provincial de Recursos hídricos.

TITULO II — Principios de la política hídrica**Art. 5° — Uso múltiple**

El Estado provincial procurará el uso múltiple de las aguas coordinándolo y armonizándolo con el de los demás recursos naturales. A tal efecto inventariará y evaluará los recursos hídricos planificará y regulará su utilización en procura de su conservación e incrementación y del máximo bienestar público teniendo en cuenta la proyección de demanda futura.

Art. 6° — Costo del Agua

El Estado provincial, por intermedio de la autoridad de aplicación determinará anualmente el costo del agua en cada uno de los sistemas o sectores establecidos conforme a los arts. 28 y 174.

Art. 7° — Política de aprovechamiento

En los planes en que las aguas sean necesarias como factor de desarrollo la autoridad de aplicación en coordinación con los demás organismos públicos señalará los sectores prioritarios y las obras necesarias. Los proyectos de uso múltiple técnica económica y socialmente justificados tienen prioridad sobre los de uso singular.

Art. 8° — Reservas, vedas, limitaciones

El Poder Ejecutivo de oficio o a solicitud de la autoridad de aplicación podrá declarar reserva de determinados recursos hídricos.

La autoridad de aplicación podrá vedar o limitar un uso determinado o estimular usos en detrimento de otros.

La resolución que establezca la reserva, veda limitación o estímulo no afectará aprovechamientos anteriores legítimamente realizados y deberá ser fundada estableciéndose su plazo de duración, el que podrá ser renovado también por resolución fundada.

Art. 9° — Efectos de la veda y reserva

Durante el período de reserva o de veda no se acordarán concesiones del recurso reservado ni del uso vedado, pero podrán otorgarse permisos precarios sujetos a las condiciones de la reserva; durante

la época de receso se recibirán solicitudes de concesión registrándolas para tramitarlas con la prioridad que corresponda cuando se levante la reserva; decretada la veda no se otorgarán permisos ni se recibirán solicitudes de concesión del uso vedado.

Art. 10. — Política de regulación

Mediante el sistema de reservas, vedas, declaración de agotamiento, limitaciones, estímulos, concesiones, permisos prioridades y turnos, el Poder Ejecutivo y la autoridad de aplicación regularán el uso de las aguas, condicionándolo a las disponibilidades y necesidades reales.

Art. 11. — Caso de emergencia

En caso de emergencia o calamidad pública, cualquier autoridad podrá disponer sin trámite alguno y sin indemnización, por el tiempo que dure la emergencia de las obras álveos y las aguas necesarias.

TITULO III — Régimen de las aguas privadas**Art. 12. — Regulación del uso de aguas privadas**

Las aguas, que según el Código Civil, pertenecen al dominio privado quedan sujetas al control y a las restricciones que en interés público se establezcan.

Art. 13. — Uso de las aguas privadas

Nadie podrá usar de álveos o aguas privadas en perjuicio de terceros ni en mayor medida de su derecho.

Art. 14. — Obligaciones de los titulares de derechos sobre aguas privadas

Toda persona que afirme ser titular de derechos sobre aguas privadas, está obligada a suministrar a la autoridad de aplicación los datos que ésta requiera.

También está obligada a inscribir su título en el Registro de aguas Privadas que llevará la autoridad de aplicación. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones hará incurrir al infractor; debidamente emplazado en una multa que será graduada por la autoridad de aplicación conforme a lo preceptuado en el art. 274 también, y como pena paralela pueden aplicarse las sanciones conminatorias establecidas por el art. 275.

Sin perjuicio de ello, a costa del infractor, la autoridad de aplicación; podrá obtener los datos o realizar la inscripción a que alude este artículo.

La reglamentación determinará en cada caso el procedimiento.

Art. 15. — Efectos de la inscripción

La inscripción aludida en el artículo anterior no importa el pronunciamiento sobre la naturaleza jurídica de las aguas ni crea presunción de legitimidad del título registrado. La autoridad de aplicación puede, por resolución fundada, denegar la inscripción cuando estime evidente que las aguas no pertenecen al solicitante o son del dominio público, dando constancia en el Registro de la resolución denegatoria.

Art. 16. — Naturaleza de las aguas

En los procesos de conocimiento, acciones declarativas, interdictos, acciones posesorias o cualquier juicio en que se controvierta la naturaleza jurídica de las aguas, los jueces deberán dar obligada intervención al fiscal de Estado y la autoridad de aplicación.

TÍTULO IV. — Registro y Catastro de Aguas**CAPÍTULO I. — Registro****Art. 17. — Registros obligatorios**

La autoridad de aplicación deberá llevar por lo menos los siguientes registros.

1. De las aguas pertenecientes al dominio privado que se anoten de conformidad a lo establecido por el art. 14.
2. De las aguas públicas otorgadas en uso mediante concesión o permiso.
3. De las empresas perforadoras para extracción de aguas subterráneas y profesionales universitarias responsables.

Los registros aludidos precedentemente serán llevados en libros separados cerrados formados y rubricados con las características y modalidades que determine la reglamentación.

Art. 18. — Carácter del registro, efecto de la inscripción

Los registros aludidos en el artículo anterior son públicos y cualquier persona habilitada conforme al reglamento puede solicitar copia autorizada de sus asientos.

El derecho al uso privativo del agua pública sólo producirá efecto con respecto a terceros desde el momento de la inscripción de la resolución que acuerde el uso en el registro aludido en el inc. 2) del artículo anterior. La inscripción en este caso será realizada de oficio por la autoridad de aplicación

dentro de los cinco días perentorios de otorgada la concesión, pudiendo el titular del uso acordado inscribir en cualquier momento la inscripción de su derecho.

Art. 19. — Rectificación de errores de inscripción

La inscripción en el registro que no se ajuste fielmente al contenido de la resolución por virtud de la cual se confirió derecho privativo del uso del agua pública se rectificará conforme el procedimiento establecido en el artículo siguiente.

Art. 20. — Procedimiento de rectificación

La rectificación de errores en la inscripción que no se ajuste fielmente al título de concesión; será hecha de oficio o a petición de parte por la autoridad de aplicación con audiencia de interesados, salvo que hubiere generado derechos subjetivos en cuyo caso se recurrirán a los tribunales conforme el art. 272 de este Código. La iniciación del trámite se anotará como asiento marginal en el registro aludido en el art. 17.

Art. 21. — Subdivisión

En caso de subdivisión de un inmueble que tenga derecho a uso de aguas públicas para una superficie inferior a su extensión total, la anotación se hará conforme a la proporción que la autoridad de aplicación haya determinado para cada una de las subdivisiones. En el caso de aguas privadas, la subdivisión la harán los interesados, la autoridad de aplicación podrá no aprobarla sólo cuando se viole lo establecido en el art. 2326 del Cód. Civil y las leyes provinciales dictadas en su consecuencia.

Art. 22. — Responsabilidades

La autoridad de aplicación responde por los perjuicios que se causen por anotaciones erróneas o nulas y por el funcionamiento irregular del registro sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los autores del hecho generador del daño.

Art. 23. — Inscripción en el registro de la propiedad inmueble

El derecho al uso de aguas públicas inherentes a un inmueble, será inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble como registración complementaria de la descripción del inmueble e integrativa del asiento del dominio. A tal efecto la autoridad de aplicación comunicará a dicho Registro las concesiones de uso de aguas públicas inherentes a inmuebles que tenga registradas, enviando copia autorizada de la resolución que otorga la concesión e indicando, sin perjuicio de otros que pueda establecer la reglamentación, los siguientes datos: Nombre del titular, superficie y límite del inmueble y superfi-

cie con derecho a uso de agua. Sin perjuicio de ello el titular de la concesión puede solicitar su inscripción en el Registro aludido.

Art. 24. — Obligaciones de los escribanos

Previo a la firma de escrituras de transferencia o constitución de derechos reales sobre inmuebles, los escribanos deberán obtener un certificado en el que conste si es inherente al inmueble el derecho a usar aguas públicas o privadas y que no se adeude suma alguna en razón del uso. El incumplimiento de este requisito, que deberá ser expresado en las escrituras, hará observable el instrumento.

Además deberán dar cuenta mensualmente a las transferencias operadas por su intermedio y debidamente registradas, remitiendo a la autoridad de aplicación un informe de las escrituras efectuadas. La omisión de esta formalidad dará lugar a que la autoridad de aplicación imponga al escribano responsable previa audiencia, una multa que será graduada conforme a lo preceptuado por el art. 274; también y como pena paralela, pueden aplicarse las sanciones conminatorias establecidas por el art. 275.

Art. 25. — Anotación de modificaciones del dominio y derechos reales

Recibido el informe aludido en el artículo precedente, la autoridad de aplicación anotará en el Registro aludido en el art. 17 las modificaciones o cambios que se operen en el dominio o en derechos reales sobre inmuebles con derecho a uso de aguas públicas mediante concesión. En caso que tales modificaciones sean efecto de decisiones judiciales o actos administrativos, para quedar perfeccionadas, deberán ser inscriptas en el Registro establecido en el art. 17.

CAPITULO II — Catastro

Art. 26. — Catastro, elementos

La autoridad de aplicación llevará, en concordancia con el Registro aludido en el Capítulo precedente un Catastro de aguas superficiales y subterráneas que indicará la ubicación de cursos de agua, lagos, fuentes, lagunas, esteros, aguas termominerales, fluidos o vapores endógenos, o geotérmicos pozos; acuíferos; caudal alorado; volúmenes en uso; usos otorgados; naturaleza jurídica del derecho al uso, obras de regulación y de derivación efectuadas y aptitud que tengan o puedan adquirir las aguas para servir usos de interés general.

Art. 27. — Información para el catastro

Para elaborar y actualizar este catastro, la autoridad de aplicación realizará los estudios pertinentes, pudiendo también exigir, por resolución fundada, a los titulares o usuarios de aguas, el suministro de los informes que estime imprescindibles. La falta de

suministro de información o la información falsa, hará incurrir al responsable en multa que será graduada por la autoridad de aplicación conforme a lo preceptuado por el art. 274, pudiendo aplicarse como pena paralela las sanciones conminatorias establecidas en el art. 275 y la suspensión de entrega de dotaciones conforme al art. 78.

TITULO V. — Los sistemas para uso y aprovechamiento de las aguas públicas

Art. 28. — concepto de sistema

A los efectos de este Código se denomina sistema, al área territorial dentro de la cual es conveniente o beneficioso, el uso de aguas de un origen determinado. Al fijarse los límites del sistema, podrá establecerse el otorgamiento de oficio de concesiones y su irrenunciabilidad.

Art. 29. — Límites del sistema

La autoridad de aplicación determinará los límites de los sistemas, las obras necesarias para el uso beneficioso de las aguas y las modalidades de su construcción, reembolso y manejo.

Art. 30. — Modificación del ámbito territorial del sistema

En razón de obras efectuadas o concesiones acordadas, la autoridad de aplicación podrá modificar los límites del sistema o dividir o refundir sistemas anteriormente demarcados. No podrá otorgarse concesiones ni permisos fuera de los límites del sistema.

Art. 31. — Cálculo de cargas

El cálculo del cánón y demás cargas financieras que deban abonar los usuarios de cada sistema, se efectuará teniendo en cuenta las obras realizadas el costo de operación su incidencia en cada usuario y la rentabilidad de los productos en que se use en agua como insumo y los demás factores que en cada caso estime necesario ponderar la autoridad de aplicación por resolución fundada.

Art. 32. — Facultades de la autoridad de aplicación

En los sistemas demarcados conforme a los arts 28 y 29, la autoridad de aplicación podrá:

1. Crear uno o más distritos.

2. Homologar por resolución, los acuerdos, laudos, usos y costumbres existentes relativos a forma de distribución de las aguas; entrega de dotación; contribuciones o trabajos necesarios para construcción y mantenimiento de obras; y constitución de consorcios, en los que pueden ser obligados a participar todos los usuarios cuando la mayoría de ellos así lo decida.

3. Dictar reglamento sobre entrega de dotaciones; forma de distribución de las aguas; contribuciones y trabajos necesarios para construcción o mantenimiento de obras; constitución de consorcios y elección de sus autoridades por los usuarios.

4. Tomar la intervención necesaria para hacer cumplir los reglamentos aludidos en los artículos precedentes.

LIBRO 2 — Uso del agua con relación a las personas

TÍTULO I — Usos comunes

Art. 33. — Derecho al uso común

Toda persona tiene derecho al uso común de las aguas, siempre que tenga libre acceso a ellas y no excluya a otro de ejercer el mismo derecho.

Art. 34. — Enumeración de usos comunes

Los usos comunes que este Código autoriza son:

1. Bebida; Higiene humana; uso doméstico y riesgo de plantas; siempre que la extracción se haga precisamente a mano; sin género alguno de máquinas o aparatos; sin contaminar las aguas; deteriorar álveos; márgenes u obras hidráulicas; ni detener; demorar o acelerar el curso o la surgencia de las aguas.

2. Abreviar o bañar el ganado en tránsito; navegación no lucrativa; uso recreativo y pesca doméstica y deportiva.

3. El aludido en el art. 159.

Art. 35. — Formas del uso

Los usos comunes enumerados en el artículo anterior; estarán sujetos a las reglamentaciones que en ejercicio de sus facultades dicte la autoridad de aplicación y los demás organismos competentes.

Art. 36. — Prioridad y gratuidad

Los usos comunes tienen prioridad sobre cualquier uso privativo y son gratuitos; sólo podrán imponerse tasas cuando para su ejercicio sea necesaria la prestación de un servicio divisible.

TÍTULO II — Usos especiales

CAPÍTULO I — Disposiciones generales

Art. 37. — Uso privativo del agua pública

Fuera de los casos enumerados en el art. 34, nadie puede usar del agua pública sin tener para ello permiso o concesión; que determinará la extensión y modalidades del derecho de uso. Toda persona

pública, privada o mixta, para usar privativamente de las aguas deberá obtener previamente permiso o concesión.

Art. 38. — Cambio de circunstancias

La autoridad de aplicación podrá, por resolución fundada, modificar las modalidades del derecho de uso cuando un cambio de circunstancias lo determine y no se modifique sustancialmente el ejercicio funcional del derecho acordado.

Art. 39. — Condiciones del uso

Los usos especiales de las aguas son aleatorios y se encuentran condicionados a la disponibilidad del recurso y a las necesidades reales del titular. El Estado no responde por disminución, falta de agua o agotamiento de la fuente.

Art. 40. — Poder discrecional del estado

No es obligatorio el otorgamiento del derecho de uso especial, aun cuando el agua no se encuentre sujeta a reserva, veda o limitación. La autoridad competente puede denegar la petición por razones de oportunidad o conveniencia que deberán ser alegadas y debidamente fundamentadas.

Art. 41. — Limitaciones al otorgamiento de usos

No serán autorizados usos especiales que alteren la integridad física o química de las aguas o varíen su régimen en perjuicio de la ecología regional.

Art. 42. — Agotamiento de la fuente

Cuando la disponibilidad de agua de una determinada fuente se encuentre totalmente comprometida con concesiones o permisos acordados, la autoridad de aplicación podrá declararla agotada; en cuyo caso no se recibirán más solicitudes de concesiones ni de permisos.

Art. 43. — Derecho implícito

El que tiene derecho a un uso especial; lo tiene igualmente a los medios necesarios para ejercitarlo; puede, con sujeción a las normas de este Código y a la vigilancia de la autoridad de aplicación, usar de las obras públicas y hacer a su costa, previa autorización, las obras necesarias para el uso de su derecho.

Art. 44. — Solicitud de usos especiales

La solicitud para efectuar usos especiales, deberá ser presentada a la autoridad de aplicación, se dictará un reglamento que establecerá condiciones y contenido de la solicitud trámite a cumplir y plazos para efectuar peticiones, cumplir requisitos y para expedirse otorgando o denegando las concesiones o permisos solicitados, asegurando adecuada publicidad y protección de los intereses de terceros.

Art. 45. — Obligación de suprimir usos ilegítimos

La autoridad de aplicación y todos los entes públicos, deberán adoptar las medidas pertinentes para impedir usos privativos de agua sin título que lo autorice. La violación de esta obligación hará responsable al Estado. El funcionario o empleado que lo tolere o autorice, sin perjuicio de otras sanciones por este hecho que se considerará falta grave; será pasible de la aplicación, como pena paralela; de una multa que será graduada conforme al art. 274.

CAPITULO II — El permiso**Art. 46. — Casos de otorgamiento de permisos**

Se otorgarán permisos:

1. Para la realización de estudios y ejecución de obras.
2. Para labores transitórias y especiales.
3. Para uso de aguas en los casos de los arts. 9º, 276, 277, 278 y 282, mientras se tramita la legitimación del aprovechamiento.
4. Para uso eventual y temporario de aguas sobrantes y desagües; supeditado a posible disponibilidad.
5. Para pequeñas utilidades del agua o álveos; o para utilidades de carácter transitorio.
6. Para los usos de aguas públicas que sólo pueden otorgarse por concesión; a quienes no puedan acreditar su calidad de dueños del terreno cuando esta acreditación sea necesaria para otorgar concesión.
7. Para pesca conforme lo establecido en el art. 131.

Art. 47. — Caracteres del permiso

El permiso será otorgado a persona determinada no es cesible; sólo creará a favor de su titular un interés legítimo y salvo que exprese su duración; puede ser revocado por la autoridad de aplicación con expresión de causa en cualquier momento sin indemnización.

Art. 48. — Perjuicios a concesiones o permisos

No se otorgarán permisos que perjudiquen concesiones o utilidades anteriores.

Art. 49. — Delegación de facultades

La autoridad de aplicación podrá delegar en otras entidades estatales la facultad de otorgar determinados permisos, con la expresa condición que remitan copia de la resolución pertinente dentro de

los veinte días de otorgado, a los efectos de ratificarlo dentro de igual término. De no ratificarse en el término establecido se considerará que el permiso nunca se ha otorgado, sin necesidad de declaración alguna y con los efectos establecidos por el Libro 2 Sección I; Título V; Capítulo II del Código Civil.

Art. 50. — Requisitos de las resoluciones que otorgan permisos

La resolución que otorga un permiso sin perjuicio de los requisitos complementarios que establezca el reglamento, consignará por lo menos:

1. Nombre del permisionario.
2. Naturaleza del permiso acordado.
3. Duración, si el permiso fuere por tiempo determinado.
4. Cargas financieras, si hubiera obligación de pagarlas.
5. Fecha de otorgamiento.

Art. 51. — Obligaciones del permisionario

Otorgado un permiso, su titular está obligado al pago de las cargas financieras que establezca la resolución de otorgamiento y las disposiciones generales o especiales que se dicten. También está obligado a realizar los estudios y construir las obras necesarias para el goce del permiso. Estas obligaciones no podrán ser rehusadas ni demoradas por ninguna causa.

Art. 52. — Aplicación de disposiciones de la concesión

En lo pertinente son aplicables a los permisos otorgados por tiempo determinado las disposiciones del Cap. III de este Título.

Art. 53. — Reembolso de obras

Aunque para el ejercicio de la facultad otorgada por el permiso, su titular hubiera realizado obras o mejoras de utilidad general, la autoridad de aplicación; al extinguirse el permiso, no deberá reintegro ni indemnización alguna aunque hayan sido autorizadas, salvo que el título establezca lo contrario. El permisionario en ningún caso tendrá derecho de retención.

CAPITULO III — La concesión**Sección I — Disposiciones generales****Art. 54. — Otorgamiento de concesiones**

El derecho subjetivo al uso especial de agua obras; material en suspensión o álveos públicos; se

será por concesiones que la autoridad de aplicación otorgará de oficio a petición de parte previo los límites establecidos en este Código y su reglamentación.

Art. 55. — Prioridades

Para el otorgamiento y ejercicio de concesiones en caso que concurren solicitudes que tengan por objeto distintos aprovechamientos, de interferencia en el uso; o falta de disminución del recurso; se establecen las siguientes prioridades:

1. Abastecimiento de poblaciones.
2. Uso pecuario.
3. Uso agrícola.
4. Uso industrial.
5. Uso medicinal.
6. Uso energético.
7. Uso recreativo.
8. Uso piscícola.
9. Uso minero.

Para zonas determinadas con carácter general; en función del interés social o para lograr mayor eficacia y rentabilidad en el uso del agua, el Poder Ejecutivo; por resolución fundada podrá alterar el orden de prioridad establecido en el presente artículo. El cambio o lateración de prioridades tendrá vigencia a partir de la obligación de la resolución que así lo establezca y no afectará a las concesiones ya acordadas que no obstante podrán ser declaradas caducas cumplidas las condiciones y los efectos establecidos en el art. 88.

Art. 56. — Concurrencia de solicitudes

En caso de concurrencia de solicitudes de concesión de un mismo uso, serán preferidas las que a juicio exclusivo de la autoridad concedente, tengan mayor importancia y utilidad económica social; en igualdad de condiciones será preferida la solicitud que primero haya sido presentada.

Art. 57. — Cláusula sin perjuicio de terceros

Dentro del rango de prioridad establecido por el art. 55, toda concesión se entenderá otorgada sin perjuicio de terceros.

Art. 58. — Requisitos de las resoluciones que otorguen concesión

La resolución que otorgue concesión sin perjuicio de lo que establezca la reglamentación, consignará por lo menos lo siguiente:

1. Titular de la concesión.

2. Clase de uso otorgado.

3. Tipo de concesión según la clasificación de la Sección II de este Capítulo.

4. Fuente de aprovisionamiento haciéndose constar la salvedad expresada en el artículo siguiente.

5. Dotación que corresponde o forma y modo del aprovechamiento según la clase de uso otorgado.

6. Fecha de otorgamiento y tiempo de duración.

Art. 59. — Extensión del derecho acordado

La concesión confiere solamente el derecho al uso acordado en el título, en las condiciones y con las limitaciones en este Código. Las concesiones de uso de agua, no acuerdan derecho alguno sobre la fuente de la que proviene no al volumen concedido. La autoridad de aplicación conforme al procedimiento que el reglamento establezca por razones de oportunidad o conveniencia, podrá sustituir o modificar el punto de toma o descarga, fuente curso de depósito natural o artificial o sistema hidrográfico con que se sirve la concesión en tal caso los costos de la sustitución será por cuenta del concedente y el costo de operación será soportado por el concesionario salvo que sea notoriamente más oneroso por efecto directo de la sustitución en tal caso la autoridad de aplicación soportará proporcionalmente los gastos en la forma que la resolución de sustitución o modificación establezca.

Art. 60. — Control de extracción

Toda utilización de agua deberá ser controlada por medio de dispositivos que permitan aforar el caudal extraído conforme lo que disponga la autoridad de aplicación. La falta de estos dispositivos o su funcionamiento inadecuado aparejará la inmediata suspensión de la entrega del agua salvo lo dispuesto por el artículo 95.

Art. 61. — Entrega de dotación.

En las concesiones de uso consuntivo de agua la dotación se entregará por un volumen determinado volumen durante un tiempo establecido o para una superficie determinada conforme a necesidades del concesionario y disponibilidad de agua.

Art. 62. — Transferencia

Para la transferencia de concesiones es indispensable la previa autorización de la autoridad de aplicación. Esta autorización se considera implícita en los casos de transferencia de inmuebles o industrias a los que sean inherentes concesiones de uso de aguas públicas.

Art. 63. — Concesión de uso de bienes públicos

En la concesión de bienes públicos se establecerá precisamente la extensión del uso afectado por la concesión delimitándose su ámbito físico.

Art. 64. — Concesiones de servicios

Las concesiones de servicios a ser prestados con aguas o para las que sea necesario utilizar agua se regirán por leyes respectivas pero el concesionario en todos los casos deberá previamente obtener concesión de uso de agua conforme a este Código y su reglamentación.

SECCION II — Clasificación y vigencia de las concesiones**Art. 65. — Concesiones permanentes y eventuales**

Según la prioridad con que se abastezca una concesión con respecto a otra del mismo rango en la enumeración del art. 55, puede ser permanente o eventual.

Art. 66. — Concesiones permanentes y eventuales.

Son concesiones permanentes las que durante la vigencia de anteriores leyes o convenios hayan tenido esa categoría y se inscriban en los registros respectivos en los plazos establecidos en este Código y su reglamentación y las aludidas en los art. 279 y 280.

Son concesiones eventuales las que durante la vigencia de anteriores leyes o convenios hayan tenido esa categoría y se inscriban en los registros respectivos en los plazos establecidos en este Código y su reglamentación y las que se otorguen para ser servidas con el excedente de agua que resulte después de dotadas las concesiones permanentes.

En lo sucesivo no podrán otorgarse concesiones permanentes mientras no sea aforada su fuente de provisión.

Art. 67. — Dotación de concesiones permanentes y eventuales

Los titulares de concesiones permanentes tendrán derecho conforme a las disposiciones de este Código a recibir prioritariamente la dotación que la autoridad de aplicación determine. Los titulares de concesiones eventuales recibirán su dotación después de satisfechas las concesiones permanentes y según el orden de su otorgamiento.

Art. 68. — Caso de escasez de agua

Sin perjuicio de lo establecido en el art. 82 las concesiones permanentes en caso de escasez pueden sujetarse a turno o reducción proporcional en cuyo caso la dotación la fijará la autoridad de apli-

cación por alicuota de caudal para todos sus titulares. Todas las concesiones permanentes tienen igual rango. En los casos de escasez previstos en el artículo la autoridad de aplicación dará aviso del régimen establecido.

Art. 69. — Las concesiones continuas y discontinuas

Las concesiones continuas permanentes o eventuales tienen derecho a recibir la dotación durante todo el año en la forma que determine la autoridad de aplicación. Las concesiones discontinuas permanentes o eventuales tendrán derecho a recibir la dotación por una actividad específica solamente en una determinada época del año en la forma que establezca la autoridad de aplicación conforme a necesidades del concesionario y disponibilidad de agua. Para dotar a ambos tipos de concesiones se aplicarán los principios establecidos en los arts. 59, 61, 67, 68 y 82.

Art. 70. — Entrega de dotación a las concesiones discontinuas

La autoridad de aplicación fijará conforme a lo establecido en el artículo precedente, la época y modalidades de entrega de la dotación de las concesiones discontinuas.

Art. 71. — Concesiones perpetuas temporarias e indefinidas

Las concesiones perpetuas confieren el derecho al uso sin límite de tiempo las temporarias confieren el derecho de uso por el plazo establecido en este Código o en el título de otorgamiento las indefinidas están sujetas al cumplimiento de una condición resolutoria expresada en la ley o en el título de otorgamiento.

Art. 72. — Tiempo de duración de concesiones temporarias

Salvo las concesiones empresarias aludidas en el título X del Libro 3 en las que el título de otorgamiento establecerá libremente su duración el plazo de las concesiones temporarias no podrá exceder de 20 años, pudiendo renovarse.

Art. 73. — Concesiones reales o personales

Las concesiones pueden ser otorgadas a una actividad determinada una industria o a un inmueble en cuyo caso son inherentes a él o a una persona determinada en virtud de reunir los requisitos establecidos por este Código y su reglamentación.

SECCION III — Derechos y obligaciones del concesionario

Art. 74. — Derechos del concesionario

El concesionario goza de los siguientes derechos que serán ejercidos conforme a las disposiciones de este Código los reglamentos que en su consecuencia se dicten las resoluciones de la autoridad de aplicación y los términos de la concesión:

1. Usar de las aguas o del objeto concedido.
2. Solicitar la expropiación de los terrenos necesarios para el ejercicio de la concesión.
3. Obtener la imposición de las servidumbres y restricciones administrativas necesarias para el ejercicio del derecho concedido.
4. Solicitar la construcción o autorización para construir las obras necesarias para el ejercicio de la concesión.
5. Ser protegido inmediatamente en el ejercicio de los derechos derivados de la concesión cuando estos sean amenazados o afectados.

Art. 75. — Consorcio de usuarios

Los concesionarios pueden asociarse formando consorcios para mantener conservar, administrar o colaborar en la administración del agua canales lagos u obras hidráulicas conforme normas especiales que les acordarán el derecho de elegir sus autoridades y administrar sus rentas bajo control y supervisión de la autoridad de aplicación.

Art. 76. — Obligaciones del concesionario

El concesionario tiene las siguientes obligaciones:

1. Cumplir las disposiciones de este Código, los reglamentos que en su consecuencia se dicten y las resoluciones de la autoridad de aplicación, usando efectiva y eficientemente el agua o álveo conforme los términos de la concesión.
2. Construir las obras a que está obligado en los términos y plazos fijados por este Código el título de concesión, los reglamentos y las resoluciones de la autoridad de aplicación.
3. Conservar las obras e instalaciones en condiciones adecuadas
4. Permitir las inspecciones: autorizar las ocupaciones temporarias necesarias y suministrar los datos, planos e informaciones que disponga la autoridad de aplicación.
5. No inficcionar las aguas

6. Pagar el canon; las tasas; impuestos y contribuciones de mejoras que se fijen en razón de la concesión otorgada.

Estas obligaciones no podrán ser rehusadas ni demoradas alegando deficiente prestación del servicio, falta o disminución de agua; ni falta o mal funcionamiento de las obras hidráulicas.

Art. 77. — Suspensión del servicio

Sin perjuicio de la imposición de otras sanciones, la autoridad de aplicación puede, con la excepción establecida en el art. 95; suspender total o parcialmente la entrega de dotación al concesionario que no dé cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo anterior. La suspensión se mantendrá mientras dure la infracción.

Art. 78. — Determinación de las cargas financieras

El monto y la forma de pago de todas las contribuciones y prestaciones aludidas en el art. 76; inc. 6° serán fijadas y determinadas anualmente por resolución de la autoridad de aplicación.

Art. 79. — Carga real

Toda inmueble o industria con concesión de uso de agua responde por el pago del canon; contribución de mejoras; tasas; reembolso de obras; multas y demás penalidades; cualquiera sea su titular o época de su adquisición.

Art. 80. — Pago del Canon

Los concesionarios están obligados a pagar el canon en la forma en que se determine bajo las penalidades establecidas en la norma que lo fije.

Art. 81. — Perjuicios a terceros

Nadie puede usar de las aguas ni de los acueductos en perjuicio de terceros; concesionarios o no; por represamiento; cambio de color; olor; sabor; temperatura o velocidad del agua; inundación o de cualquier otra manera.

SECCION IV — Restricción, suspensión temporal y extinción de las concesiones

Art. 82. — Suspensión temporal y restricción

Las concesiones permanentes, pueden ser restringidas en su uso o suspendidas temporariamente en caso de escasez o falta de caudales o para abastecer a concesiones que las precedan en el orden establecido en el art. 55. En caso que la escasez o falta de caudales se deba a actos de autoridad pública; el Estado indemnizará solamente el daño emergente que se cause al concesionario.

Art. 83. — Extinción; causas

Son causas extintivas de la concesión:

1. La renuncia.
2. El vencimiento del plazo.
3. La caducidad.
4. La revocación.
5. Falta de objeto concesible.

Art. 84. — Renuncia

Salvo lo dispuesto en los arts. 28 y 95; el concesionario podrá renunciar en cualquier tiempo a la concesión. La renuncia deberá presentarse ante la autoridad de aplicación quien, previo pago de los tributos adeudados y conformidad de acreedores hipotecarios; si fuere inherente a inmuebles; la aceptará. La renuncia producirá efecto desde su aceptación. La resolución sobre el pedido de renuncia deberá dictarse dentro de los cinco días de quedar el expediente en estado de resolver, de no dictarse resolución; la renuncia se considerará aceptada.

Se considerará renuncia implícita la adquisición de un bien titular de concesión; si en el instrumento de adquisición no consta esa circunstancia. En tal caso la renuncia producirá efecto desde la fecha de adquisición.

Art. 85. — Vencimiento del plazo

El vencimiento del plazo por el cual fue otorgada la concesión; no habiéndose solicitado oportuna renovación; produce su extinción automática y obliga a la autoridad de aplicación a tomar las medidas para el cese del uso del derecho concedido y cancelar la inscripción de la concesión. Las instalaciones y mejoras hechas por el concesionario en bienes públicos o afectados al servicio público pasarán sin cargo alguno al dominio del Estado.

Art. 86. — Caducidad

La concesión podrá ser declarada caduca:

1. Cuando transcurridos seis meses a partir de su otorgamiento no hayan sido ejecutadas las obras los trabajos o los estudios a que obliguen las disposiciones de este Código el título de concesión fije un plazo mayor.
2. Por uso del agua durante dos años.
3. Por infracción reiterada a las disposiciones de los arts. 76 y 81.
4. Por deficiente prestación del servicio en el caso de concesión empresarial.

5. Por falta de pago de tres años de canon previo emplazamiento por noventa días bajo apercibimiento de caducidad.

6. Por el cese de la actividad que motivó el otorgamiento.

7. Por emplear el agua en uso distinto al concedido.

La caducidad produce efecto desde la fecha de su declaración. Será declarada por las causas taxativamente enumeradas en este artículo por la autoridad de aplicación; de oficio o a petición de parte, previa audiencia del interesado.

En ningún caso la declaración de caducidad trae aparejada la indemnización ni exime al concesionario del pago de las deudas que mantenga con la autoridad de aplicación en razón de la concesión.

La iniciación del trámite de declaración de caducidad será registrada como anotación marginal en los libros aludidos en el art. 17.

Art. 87. — Falta de objeto concesible

La concesión se extinguirá; sin que ello genere indemnización a favor del concesionario salvo culpa del Estado:

1. Por agotamiento de la fuente de provisión.
2. Por perder las aguas aptitud para servir al uso para el que fueron concedidas.

La declaración producirá efectos desde que se produjo el hecho generador de la declaración de extinción.

Será hecha por la autoridad de aplicación a oficio o a petición de parte con audiencia del interesado y no exime al concesionario de las deudas que tuviere pendientes en razón de la concesión.

La iniciación del trámite se registrará como anotación marginal en el libro aludido en el art. 17.

Art. 88. — Revocación.

Cuando medien razón de oportunidad o conveniencia, o las aguas sean necesarias para abastecer nuevas concesiones de usos prioritarios según el orden establecido en el art. 55; la autoridad de aplicación podrá revocar cualquier concesión indemnizando el daño emergente.

Art. 89. — Monto de la indemnización

La falta de acuerdo sobre el monto de la indemnización autorizará al concesionario a recurrir a la vía judicial. El desacuerdo sobre el monto de la indemnización o su falta de pago; en ningún caso suspenderán los efectos de la revocación; ni de la declaración de extinción por falta de objeto concesible en los casos que según el art. 87 procede indemnizar.

Art. 101. — Aplicación supletoria

Son aplicables en lo pertinente y en forma supletoria al uso reglado en este título las disposiciones del título III de este Libro.

Art. 102. — Abrevaderos públicos

Sin perjuicio de lo expresado en el art. 101 la autoridad de aplicación podrá establecer abrevaderos públicos pudiendo cobrar una tasa retributiva por el servicio prestado.

TÍTULO III. — Uso agrícola**Art. 103. — Uso agrícola.**

Las concesiones para riego se otorgarán a propietarios de predios, adjudicatarios con título provisorio de tierras fiscales, al Estado, comunidades de usuarios y a las empresas concesionarias aludidas en el Título X de este libro. Estas concesiones serán perpetuas y reales.

Art. 104. — Condiciones de otorgamiento

Para el otorgamiento de concesiones para riego, será necesario que el predio pueda desaguar convenientemente, que la tierra sea apta y que para la agricultura sea necesaria la irrigación. La concesión se otorgará por superficie o volumen según determine en cada caso la autoridad de aplicación.

Art. 105. — Usos domésticos y bebida

Los titulares de concesiones para riego tendrán derecho a almacenar agua para usos domésticos y bebida de animales de labor sujetándose a los reglamentos que dicte la autoridad de aplicación.

Art. 106. — Rotación

En las concesiones para riego la dotación de agua se entregará en base a una tasa de uso beneficioso que teniendo en cuenta la categoría de las concesiones, las condiciones de la tierra, del clima y de las posibilidades de la fuente fijará la autoridad de aplicación para cada sistema.

Art. 107. — Aguas recuperadas

Cuando el concesionario con los caudales otorgados pueda por obras de mejoramiento o aplicación de técnicas especiales regar mayor superficie que la concedida solicitará ampliación de la concesión la que se acordará inscribiéndose en el Registro aludido en el art. 17. En este caso las obras de servicios necesarias para el control especial de la dotación de agua serán a cargo del concesionario. Este derecho sólo podrán ejercerlo los titulares de concesiones permanentes.

Art. 108. — Obras y servicios necesarios

La autoridad de aplicación fijará discrecionalmente los puntos de ubicación de toma y sus características tratando que el mayor número posible de usuarios se sirva de la misma obra de derivación; también podrá a su costa cambiar la ubicación de las tomas cuando necesidades del servicio lo requieran. Los gastos de mantenimiento de tomas y canales serán a cargo de los usuarios o prorrata los que requieran la modificación o acondicionamiento de canales para servir a nuevos usuarios serán pagados por éstos.

Art. 109. — Subdivisión

En caso de subdivisión de un inmueble con derecho a uso de agua para riego la autoridad de aplicación determinará la extensión del uso de agua que corresponderá a cada fracción pudiendo no adjudicar derecho a una de las fracciones o declarar la caducidad de la concesión si el uso del agua en ella pudiera resultar antieconómico. Para la anotación de las subdivisiones se procederá conforme a lo establecido en el art. 21.

Art. 110. — Autorización especial

La autoridad de aplicación cuando la concesión supere las quinientas hectáreas para otorgarla necesitará previa autorización del Poder Ejecutivo. Cuando la concesión supere las mil hectáreas la autoridad de aplicación requerirá al Poder Legislativo autorización por ley para otorgarla.

TÍTULO IV. — Uso industrial**Art. 111. — Uso industrial**

La concesión para uso industrial se otorgará con la finalidad de emplear el agua para producir calor como refrigerante, como materia prima disolvente reactivo, como medio de lavado, purificación, separación o eliminación de materiales o como componente o coadyuvante en cualquier proceso de elaboración, transformación o producción. Esta concesión es real e indefinida y puede otorgarse con o sin consumo de agua.

Art. 112. — Entrega de dotación

En las concesiones para uso industrial deberá expresarse el caudal:

1. En litros por segundo cuando se consume totalmente el agua.
2. En litros por segundo acordados en uso sin consumo.
3. En litros por segundo y porcentual a consumir.
4. En litros por segundo a descargar.

Art. 101. — Aplicación supletoria

Son aplicables en lo pertinente y en forma supletoria al uso reglado en este título las disposiciones del título III de este Libro.

Art. 102. — Abrevaderos públicos

Sin perjuicio de lo expresado en el art. 101 la autoridad de aplicación podrá establecer abrevaderos públicos pudiendo cobrar una tasa retributiva por el servicio prestado.

TÍTULO III — Uso agrícola**Art. 103. — Uso agrícola**

Las concesiones para riego se otorgarán a propietarios de predios, adjudicatarios con título provisorio de tierras fiscales, al Estado, comunidades de usuarios y a las empresas concesionarias aludidas en el Título X de este libro. Estas concesiones serán perpetuas y reales.

Art. 104. — Condiciones de otorgamiento

Para el otorgamiento de concesiones para riego, será necesario que el predio pueda desaguar convenientemente, que la tierra sea apta y que para la agricultura sea necesaria la irrigación. La concesión se otorgará por superficie o volumen según determine en cada caso la autoridad de aplicación.

Art. 105. — Usos domésticos y bebida

Los titulares de concesiones para riego tendrán derecho a almacenar agua para usos domésticos y bebida de animales de labor sujetándose a los reglamentos que dicte la autoridad de aplicación.

Art. 106. — Rotación

En las concesiones para riego la dotación de agua se entregará en base a una tasa de uso beneficioso que teniendo en cuenta la categoría de las concesiones, las condiciones de la tierra, del clima y de las posibilidades de la fuente fijará la autoridad de aplicación para cada sistema.

Art. 107. — Aguas recuperadas

Cuando el concesionario con los caudales otorgados pueda por obras de mejoramiento o aplicación de técnicas especiales regar mayor superficie que la concedida solicitará ampliación de la concesión la que se acordará inscribiéndose en el Registro aludido en el art. 17. En este caso las obras de servicios necesarias para el control especial de la dotación de agua serán a cargo del concesionario. Este derecho sólo podrán ejercerlo los titulares de concesiones permanentes.

Art. 108. — Obras y servicios necesarios

La autoridad de aplicación fijará discrecionalmente los puntos de ubicación de toma y sus características tratando que el mayor número posible de usuarios se sirva de la misma obra de derivación; también podrá a su costa cambiar la ubicación de las tomas cuando necesidades del servicio lo requieran. Los gastos de mantenimiento de tomas y canales serán a cargo de los usuarios o prorrata los que requieran la modificación o acondicionamiento de canales para servir a nuevos usuarios serán pagados por éstos.

Art. 109. — Subdivisión

En caso de subdivisión de un inmueble con derecho a uso de agua para riego la autoridad de aplicación determinará la extensión de cada fracción de uso que corresponderá a cada fracción pudiendo no adjudicar derecho a una de las fracciones o declarar la caducidad de la concesión si el uso del agua en ella pudiera resultar antieconómico. Para la anotación de las subdivisiones se procederá conforme a lo establecido en el art. 21.

Art. 110. — Autorización especial

La autoridad de aplicación cuando la concesión supere las quinientas hectáreas para otorgarla necesitará previa autorización del Poder Ejecutivo. Cuando la concesión supere las mil hectáreas la autoridad de aplicación requerirá al Poder Legislativo autorización por ley para otorgarla.

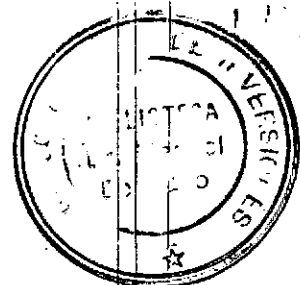
TÍTULO IV — Uso industrial**Art. 111. — Uso industrial**

La concesión para uso industrial se otorgará con la finalidad de emplear el agua para producir calor como refrigerante, como materia prima disolvente reactivo; como medio de lavado, purificación, separación o eliminación de materiales o como componente o coadyuvante en cualquier proceso de elaboración, transformación o producción. Esta concesión es real e indefinida y puede otorgarse con o sin consumo de agua.

Art. 112. — Entrega de dotación

En las concesiones para uso industrial deberá expresarse el caudal:

1. En litros por segundo cuando se consume totalmente el agua.
2. En litros por segundo acordados en uso sin consumo.
3. En litros por segundo y porcentual a consumir.
4. En litros por segundo a descargar.

**Art. 113. — Requisitos para obtener concesión y habilitación**

Para obtener concesión para usos industriales es requisito indispensable la presentación de los planes que la autoridad exija. Hasta que la autoridad de aplicación compruebe que el funcionamiento de las instalaciones no causará perjuicio a terceros no se autorizará la habilitación de la concesión.

Art. 114. — Perjuicios a terceros

Cuando el uso de agua para industria pueda producir alteraciones en las condiciones físicas o químicas de agua o álveos, o en el flujo natural del caudal el instrumento de concesión deberá aprobar los programas de manejo de la obra hidráulica.

Art. 115. — Utilización del objeto concedido

Aunque en la concesión para uso industrial se ha otorgado para satisfacer la capacidad proyectada la dotación para uso o descarga sólo se autorizará conforme a las necesidades presentes.

Art. 116. — Cambio de ubicación del establecimiento

En caso de cambio de lugar de ubicación del establecimiento la autoridad de aplicación autorizará el cambio de ubicación del punto de toma o descarga siempre que no cause perjuicio a terceros y sea técnicamente factible. Todas las obras necesarias para el nuevo emplazamiento son a cargo del concesionario.

Art. 117. — Suspensión y caducidad de la concesión

Si con motivo de la concesión reglada en este artículo se causare perjuicio a terceros se suspenderá su ejercicio hasta que el concesionario adopte oportuno remedio. La reiteración de las infracciones a este artículo determinará la caducidad de la concesión.

TITULO V — Uso medicinal**Art. 118. — Uso medicinal**

El uso o explotación de aguas dotadas de propiedades terapéuticas o curativas por el Estado o por particulares requerirá concesión de la autoridad de aplicación que deberá ser tramitada con necesaria intervención de la autoridad sanitaria. Estas concesiones son personales y temporarias. En caso de concurrencia de solicitudes de particulares y el propietario de la fuente en donde broten será preferido este último. Las solicitudes formuladas por el Estado tendrán siempre prioridad.

Art. 119. — Protección de fuentes

La autoridad de aplicación con la necesaria intervención de la autoridad sanitaria, podrá establecer zonas de protección para evitar que se afecten fuentes de aguas medicinales.

Art. 120. — Utilidad pública

A los efectos de la aplicación del inc. 3º del Código Civil se considera que las aguas medicinales tienen aptitud para satisfacer usos de interés general.

Art. 121. — Embotellamiento de agua mineral

El embotellamiento de aguas minerales será reglamentado y controlado por la autoridad sanitaria.

TITULO VI — Uso energético**Art. 122. — Uso energético**

Se otorgarán concesiones para uso energético cuando se emplee la fuerza del agua líquida o gasificada; para uso cinético (rueda; turbina; molinos) para generación de electricidad. Estas concesiones son reales e indefinidas y pueden otorgarse al Estado; particulares para uso propio o prestación de servicios; o a las empresas concesionarias aludidas en el Título X de este Libro.

Art. 123. — Contralor

Las concesiones aludidas en este título serán otorgadas por la autoridad de aplicación; pero el control de la actividad comercial, técnica y económica del concesionario estará a cargo de la entidad estatal encargada de la supervisión y coordinación de la generación de energía.

Art. 124. — Entrega de dotación

En las concesiones para uso energético la dotación deberá expresarse en caballos de fuerza nominales.

Art. 125. — Autorización especial

La autoridad de aplicación, cuando la potencia a generar exceda a quinientos caballos de fuerza; para otorgar la concesión necesitará la previa autorización del Poder Ejecutivo. Cuando la potencia a generar excede la potencia de mil caballos de fuerza, la autoridad de aplicación, previo a otorgar la concesión requerirá al Poder Legislativo, autorización por ley para otorgarla.

Art. 126. — Aplicación supletoria

Son aplicables a estas concesiones las disposiciones de los arts. 93, 113, 114, 115, 116 y 117 y en las actuaciones que dieren lugar de aplicación de estas

disposiciones intervendrá necesariamente la entidad estatal encargada del control y coordinación de la generación de energía.

TITULO VII — Uso recreativo

Art. 127. — Uso recreativo.

La autoridad de aplicación otorgará concesiones de uso; de tramos de curso de agua; áreas de lagos; embalses; playas e instalaciones; para recreación, turismo o esparcimiento público. También otorgará concesión de uso de aguas para piletas o cación del art. 2340. Bañeros. Esta concesión será personal y temporaria.

Art. 128. — Modalidades de uso.

Las modalidades de uso de bienes públicos o entrega de agua para el uso aludido en este título será establecida en el título de concesión.

Art. 129. — Intervención de organismos competentes.

Para la concesión de estos usos debe oírse previamente a la autoridad cuyo cargo esté la actividad recreativa o turística en la Provincia; esta autoridad regulará, en coordinación con la autoridad de aplicación todo lo referido al uso establecido en este título; la imposición, de servidumbres y restricciones al dominio privado y el ejercicio de la actividad turística o recreativa, conforme a una adecuada planificación.

TITULO VIII — Uso piscícola y acuicultura.

Art. 130. — Uso piscícola.

Para el establecimiento de viveros o el uso de curso de agua o lagos, naturales o artificiales, para siembra, cría; recolección o pesca de animales o plantas acuáticas; se requiere concesión que será otorgada por la autoridad de aplicación.

Estas concesiones serán personales y temporarias.

Art. 131. — Pesca.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior podrán también otorgarse permisos de pesca. La reglamentación general indicará la autoridad otorgante, y la forma y condiciones de otorgamiento de estos permisos.

Art. 132. — Conservación de la fauna y flora acuática.

La autoridad de aplicación podrá obligar a todos los usuarios de aguas como condición de goce de sus derechos, a construir y conservar a su costa

escaleras para peces y otras instalaciones tendientes a fomentar o hacer posible el desarrollo de la fauna y flora acuática.

TITULO IX — Uso minero

Art. 133. — Uso minero.

El uso y consumo de aguas con motivo de explotaciones mineras o petroleras, necesita concesión de acuerdo al presente Código, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Código de Minería, leyes complementarias y legislación petrolera. También necesita concesión el uso de aguas o álveos públicos en labores mineras.

Estas concesiones son reales e indefinidas y se otorgarán en consulta con la autoridad minera o a pedido de ésta.

Art. 134. — Álveos, playas; obras hidráulicas.

La autoridad minera no podrá otorgar permisos o concesiones para explorar o explotar mineales en bajo álveos y obras hidráulicas sin la previa conformidad de la autoridad de aplicación.

Art. 135. — Servidumbre de aguas naturales.

A los efectos del art. 48 del Cód. de Minería, se considerarán aguas naturales a las aguas privadas de fuente o de vertiente y a las aguas pluviales caídas en predios privados.

Art. 136. — Hallazgo de aguas subterráneas

Quienes realizando trabajos de exploración de minas, hidrocarburos o gas natural, encuentren aguas subterráneas, están obligados a poner el hecho en conocimiento de la autoridad de aplicación dentro de los treinta días de ocurrido; a impedir la contaminación de los acuíferos y a suministrar a la autoridad de aplicación información sobre el número de éstos y profundidad a que se hallan; naturaleza; calidad de las aguas de cada uno y demás datos técnicos que establezca la reglamentación. El incumplimiento de esta disposición hará pasible al infractor previa audiencia; de una multa que será graduada por la autoridad de aplicación conforme a lo preceptuado por el art. 274; también como pena paralela, pueden aplicarse las sanciones conminatorias establecidas en el art. 275.

Si el que hizo el hallazgo solicitare concesión, tendrá prioridad sobre otros solicitantes de usos de la misma categoría según el orden establecido en el art. 55.

Art. 137. — Desagüe de minas.

El desagüe de minas se registrará por el art. 51 del Código de Minería si se ha de imponer sobre otras minas, y por este Código si se impone sobre pedidos ajenos a la explotación minera.

Art. 138. — Perjuicio a terceros

Las aguas utilizadas en una explotación minera serán devueltas a los cauces en condiciones tales que no produzcan perjuicios a terceros. Los relaves y residuos de explotaciones mineras en cuya producción se utilice el agua, deberán ser depositadas a costa del minero en lugares donde no contaminen las aguas o degraden el ambiente. La infracción a esta disposición causará la suspensión de entrega de agua hasta que se adopte oportuno remedio sin perjuicio de la aplicación; previa audiencia, de una multa que será graduada por la autoridad de aplicación conforme a lo preceptuado por el art. 274; como pena paralela, pueden aplicarse las sanciones conminatorias establecidas por el art. 275.

Art. 139. — Entrega de dotación

Al otorgar las concesiones aludidas en este título, la autoridad de aplicación determinará los modos y formas de entrega del agua o uso del bien público concedido.

TITULO X — Concesión empresarial

Art. 140. — Concesión empresarial

La autoridad de aplicación podrá otorgar a entidades estatales o a particulares el derecho de estudiar, proyectar, construir y explotar obras hidráulicas, suministro de aguas o prestar un servicio de interés general.

Art. 141. — Adjudicación de concesiones empresariales

Por iniciativa propia o ante la presentación de una solicitud, la autoridad de aplicación podrá adjudicar directamente o llamar a licitación o concurso para el otorgamiento de las concesiones aludidas en el artículo anterior estableciendo en cada caso las condiciones de presentación, estudios, obras y trabajos a realizar; garantía exigida al concesionario; financiación de estudios; trabajos u obras y condiciones de otorgamiento de la concesión y usos de bienes públicos. En caso de presentación de particulares y entidades estatales serán siempre preferidas las segundas.

Art. 142. — Concesión para prestación de servicios

Si la concesión fuera de suministro de agua o prestación de un servicio, el título de la concesión establecerá el régimen de tarifa, su control y las relaciones entre el concesionario y los usuarios. Para el cobro de la tarifa podrán acordarse al concesionario los mismos privilegios y el derecho a usar de los mismos procedimientos que la autoridad de aplicación.

Art. 143. — Contralor de las concesiones

La autoridad de aplicación tendrá los más amplios derechos de inspección y contralor sobre el concesionario pudiendo en caso de interés público tomar a su cargo, a costa del concesionario, la prestación del servicio o el suministro de agua.

LIBRO 4 — Normas relativas a categorías especiales de agua

TITULO I — Cursos de agua y aguas lacustres

CAPITULO I — Cursos de agua

Art. 144. — Determinación de la línea de ribera

La autoridad de aplicación procederá a determinar la línea de ribera de los cursos naturales conforme al sistema establecido por el art. 2577 del Cód. Civil; de acuerdo al procedimiento técnico que establezca la reglamentación dando intervención en la operación a los interesados. Las costas determinantes de la línea de ribera se anotarán en el catastro establecido por el art. 26. La autoridad de aplicación podrá rectificar la línea de ribera cuando por cambio de circunstancias se haga necesario.

Art. 145. — Conducción de aguas por canales públicos.

No es permitido conducir aguas privadas por cauces públicos, toda agua que caiga en un cauce público se considerará pública.

CAPITULO II — Aguas lacustres

Art. 146. — Lagos no navegables.

Los lagos no navegables pertenecen al dominio público de la provincia de Santiago del Estero.

Los ribereños tienen derecho a su aprovechamiento para usos domésticos, para otros usos debe solicitarse permiso o concesión; teniendo preferencia sobre los no ribereños en caso de concurrencia de solicitudes para un mismo uso.

Art. 147. — Línea de ribera

La autoridad de aplicación procederá a determinar la línea de ribera en los lagos conforme al procedimiento técnico que establezca la reglamentación; dando intervención en las operaciones a los interesados. Las costas determinantes de la línea de ribera se anotarán en el catastro establecido por el art. 26. La autoridad de aplicación podrá rectificar la línea de ribera cuando por cambio de circunstancias se haga necesario.

Art. 148. — Margen de los lagos navegables

La autoridad de aplicación delimitará también la zona de margen o ribera externa de los lagos navegables.

TITULO II — Aguas de vertiente**Art. 149. — División del terreno donde corren aguas de vertientes**

Cuando una heredad en la que corren aguas de una vertiente se divida por cualquier título; quedando el lugar en donde las aguas hacen en manos de un propietario diferente del lugar en donde mueren; la vertiente y sus aguas pasarán al dominio público y su aprovechamiento se rige por las disposiciones de este Código. Los titulares del predio dividido; para continuar usando el agua deberán solicitar concesión de uso que les será otorgada presentando plano del inmueble y el título de dominio.

Art. 150. — Otorgamiento de concesiones

Las concesiones serán otorgadas conforme a la división de las aguas que tengan establecida los interesados; siempre que no contrarién lo dispuesto por el art. 2326 del Cód. Civil; a falta de estipulación expresa la autoridad de aplicación decidirá teniendo en cuenta los usos hechos con anterioridad a la división y lo establecido por el art. 2326 del Cód. Civil.

TITULO III — Aguas de fuentes**Art. 155. — Fuentes privadas**

Salvo acuerdo en contrario; si una fuente brota en el límite de dos o más heredades su uso corresponde a los colindantes por partes iguales.

TITULO IV — Aguas que tengan o adquieran aptitud para satisfacer usos de interés general**Art. 152. — Aguas que adquieren aptitud para usos de interés general**

Cuando las aguas privadas tengan o adquieran aptitud para satisfacer usos de interés general; previa indemnización; pasarán al dominio público; debiendo la autoridad de aplicación eliminarlas del registro aludido en el art. 14.

Art. 153. — Prioridad de concesión

Depositada la indemnización; las aguas pasarán al dominio público. El antiguo propietario podrá solicitar concesión de uso de estas aguas; para obtenerlas tendrán prioridad sobre otros solicitantes que pretendan usos del mismo rango; conforme al orden establecido en el art. 55; siempre que renuncie en forma expresa al derecho a la indemnización

como condición para obtener la concesión. Si el antiguo dueño después de percibir indemnización solicita el uso de las aguas que antes le pertenecían deberá reintegrar el valor percibido como condición de la concesión.

TITULO V — Aguas pluviales**Art. 154. — Uso de aguas pluviales**

El uso de aguas pluviales que conservando su individualidad corren por lugares públicos; podrá ser reglamentado por la autoridad de aplicación o las municipalidades. En este último caso los reglamentos serán puestos en conocimiento de la autoridad de aplicación para su aprobación; requisito éste esencial para su vigencia.

TITULO VI — Aguas atmosféricas**Art. 155. — Cambio artificial de clima**

Los estudios y trabajos tendientes a la modificación del clima; evitar el granizo y provocar y evitar lluvias; deberán ser autorizadas por permiso o concesión de las entidades que regulan la actividad aeronáutica y los servicios de meteorología y controlados por éstas en todas sus etapas; aun las experimentales. En caso de concurrencia de solicitudes de entes estatales y personas privadas tendrán siempre preferencia los primeros.

Art. 156. — Objeto de las concesiones o permisos

Los permisos o concesiones pueden tener por objeto estudios o experimentación o que los concesionarios usen las aguas concedidas o cobren por servicio que prestan a terceros por usos de las aguas o defensa contra sus efectos nocivos.

Art. 157. — Carácter de las concesiones o permisos

Los permisos o concesiones aludidos en esta capítulo serán personales o temporarios; pudiendo exigirse a su titular, previo a su otorgamiento; fianza que a juicio de la autoridad de aplicación sea suficiente para cubrir los perjuicios que pueda demostrarse; son efecto directo e inmediato de los experimentos o usos permitidos o concedidos.

TITULO VII — Aguas subterráneas**Art. 158. — Uso de aguas subterráneas**

La recarga artificial; explotación y alumbramiento por obra humana de las aguas que se encuentren debajo de la superficie del suelo; su uso; control; protección y conservación se rige por el presente título.

Art. 159. — Uso común

El alumbramiento, uso y consumo de aguas subterráneas es considerado uso común y por ende no requiere concesión ni permiso cuando concurren los siguientes requisitos:

1. Que la perforación sea efectuada o mandada efectuar por el propietario del terreno sin el auxilio de medios mecánicos.

2. Que el agua se extraiga por baldes o recipientes movidos por fuerza humana o animal o moinos movidos por agua o viento; pero no por artefactos accionados por motores.

3. Que el agua se destine a necesidades domésticas del propietario superficiario o del tenedor del predio.

En tales casos deberá darse aviso a la autoridad de aplicación la que está autorizada para solicitar la información que establezca el reglamento a realizar las investigaciones y estudios que estime pertinentes.

Art. 160. — Uso primitivo

Fuera de los casos enumerados en el artículo anterior, es necesaria la obtención de permiso o concesión de la autoridad de aplicación para la explotación de aguas subterráneas.

La concesión se otorgará al superficiario dueño del inmueble cuando se trate de predios particulares. Cuando se trate de predios del dominio público o privado del Estado, podrá otorgarse a cualquier persona.

En caso que el solicitante del permiso o concesión, sea persona pública o privada, no sea dueño del terreno y éste pertenezca a un particular, la autoridad de aplicación, en caso de ser de evidente conveniencia el otorgamiento de la concesión e ineludible la ocupación de terrenos privados, declarará la utilidad pública de las superficies necesarias para ubicar el pozo, bomba, acueductos y sus accesorios; emplazamiento de piletas o depósitos, caminos de acceso y toda otra superficie que resulte indispensable para el desarrollo de la actividad objeto del permiso o concesión y procederá a la expropiación previo depósito por el solicitante de los valores que a juicio de la autoridad de aplicación sean necesarios para el pago de la indemnización y gastos del juicio.

Art. 161. — Carácter de las concesiones

Las concesiones de uso de aguas subterráneas serán eventuales y sujetas a las posibilidades del acuífero.

Art. 162. — Explotación

Salvo prohibición expresa y fundada de la autoridad de aplicación, cualquiera puede explorar, por sí

o autorizar la exploración en suelo propio, con el objeto de alumbrar aguas subterráneas. Si la exploración se encarga a una empresa ésta deberá dar aviso a la autoridad de aplicación informando el plan de trabajo y método de exploración.

En suelo ajeno o en predios del dominio público o privado del Estado, sólo podrá explorar el Estado por sí o contratista.

Art. 163. — Exploración y perforación

Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, los trabajos de exploración y alumbramiento de aguas subterráneas sólo podrán ser hechos por el Estado o por empresas debidamente inscriptas en el registro aludido en el art. 17. Para el uso común rige el art. 159.

Art. 164. — Solicitud de concesión

Para obtener concesión de uso de aguas subterráneas deberá presentarse por el solicitante, el técnico universitario responsable y el titular de la empresa perforadora, una petición de permiso para perforar que deberá contener, sin perjuicio de las especificaciones que indique el reglamento, por lo menos lo siguiente:

1. Nombre y domicilio del solicitante, del titular del predio, de la empresa perforadora y del técnico universitario responsable y número de inscripción de los dos últimos en el registro aludido en el artículo 17.

2. Características de la instalación prevista, plan de trabajo y técnicas a emplear.

3. Uso que se dará al agua a extraer.

4. Plano del inmueble con ubicación de la perforación y descripción del establecimiento, industria o actividad beneficiaria.

Art. 165. — Comienzo de los trabajos

Presentada la solicitud de concesión su resumen se publicará por 3 veces durante 15 días en el Boletín Oficial y un diario de la localidad o de la capital, si no lo hubiera en la localidad, para que los interesados en el plazo de 15 días hagan conocer las observaciones al pedido, vencido ese plazo, la autoridad de aplicación podrá:

1. Rechazarla por resolución fundada, en cuyo caso se archivará.

2. Admitirla, formalmente; en cuyo caso dará orden de empezar los trabajos que serán controlados y supervisados por la autoridad de aplicación que podrá dar instrucciones sobre la forma de efectuar los, cambiar los planes de trabajo y exigir se tomen las precauciones que estime pertinentes.

Art. 166. — Datos a suministrar

Dentro de los 15 días hábiles posteriores a la conclusión de la perforación, el propietario, el técnico universitario responsable y la empresa perforadora deberán suministrar a la autoridad de aplicación los datos e informes que exija el reglamento tendientes a establecer las características de la perforación, análisis cualitativo y cuantitativo del agua, suelos, mecanismos de afloros, etc. Será imprescindible suministrar lo siguiente:

1. Profundidad y diámetro del pozo, espesor, número de acuíferos atravesados, niveles piezométricos, caudal y calidad del agua de cada uno.
2. Perfil geológico o estratigráfico de la perforación.
3. Muestras de agua.
4. Datos de los afloros u otras medidas efectuadas y sistema utilizado.
5. Memoria sobre el proceso de perforación e interpretación de los datos y desarrollo de la perforación.
6. Toda la documentación técnica debe ser conformada por el técnico universitario responsable.

Art. 167. — Otorgamiento de concesiones

Cumplidos los requisitos del artículo anterior la autoridad de aplicación resolverá si otorga o no la concesión cuya solicitud fue admitida formalmente.

La resolución deberá recaer dentro de los sesenta días hábiles perentorios a contar del suministro de los datos aludidos en el artículo anterior. El silencio se interpretará como aceptación de la solicitud deberá ser fundado: no dará al solicitante derecho alguno y autorizará a la autoridad de aplicación a tomar las medidas necesarias para evitar el uso de las aguas subterráneas. Si el Estado decide usar de las aguas alumbradas o conceder su uso a terceros, deberá reintegrar al solicitante el valor de los gastos realizados y sus intereses.

Art. 168. — Requisito de la resolución otorgando concesión de uso de aguas subterráneas

La resolución que acuerde concesión deberá consignar por lo menos lo siguiente:

1. Titular de la concesión.
2. Clase de uso otorgado.
3. Ubicación y características del pozo y del acuífero.

4. Máximo de extracción autorizada por mes o por año.

5. Datos que está obligado a suministrar el concesionario.

6. Fecha del otorgamiento de la concesión.

En caso que la concesión se otorgue por silencio de la administración, el solicitante deberá exigir a la autoridad de aplicación la inscripción de la concesión en el registro aludido en el art. 17, con los datos exigidos en este artículo y en la reglamentación.

Art. 169. — Condiciones de uso de las aguas subterráneas

La autoridad de aplicación, en ejercicio de las funciones que le otorgan las disposiciones de este título, las estipulaciones del reglamento y las condiciones de otorgamiento de concesiones o permisos, podrá en cualquier tiempo:

1. Designar él o los acuíferos en donde se permite extraer agua.
2. Ordenar modificaciones de método; sistema o instalaciones.
3. Ordenar pruebas de bombeo; muestra de agua; aislación de acuíferos o empleo de determinado tipo de filtros.
4. Fijar regímenes extraordinarios de extracción en caso de baja de nivel del acuífero conforme a lo establecido en los arts. 55, 57 y 59.
5. Adoptar cualquier otra medida que imponiendo sólo una restricción al dominio; sea conveniente para satisfacer el interés público; preservar la calidad y conservación del agua y tienda a lograr su empleo más beneficioso para la colectividad.

Art. 170. — Limitaciones al dominio con motivo del uso del agua subterránea

Para las labores de exploración; estudio, control; conservación; uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas; funcionarios y empleados públicos encargados de tales tareas; tendrán libre acceso a los predios privados conforme lo dispone el art. 227. Para realizar perforaciones o sondeos de prueba, muestras de suelo o tareas que demanden ocupación temporaria o perpetua del suelo deberán establecerse restricciones administrativas; servidumbres; ocupación temporaria o expropiar; según establece el Libro 7 de este Código.

Art. 171. — Control de extracción.

Todos los pozos deberán estar previstos de dispositivos aprobados por la autoridad de aplicación que permitan controlar el caudal de la extracción con-

es. como establece el art. 60 y mecanismos adecuados para interrumpir la salida de agua cuando no se use o no deba ser usada.

Art. 172. — Protección de pozos

La autoridad de aplicación podrá establecer alrededor de cada pozo: zonas de protección dentro de las cuales podrá limitarse; condicionarse o prohibirse actividades que puedan embarazar; menoscabar o interferir su correcto uso.

Art. 173. — Conservación de las aguas

Además de las disposiciones generales para todas las concesiones o permisos: los usos de aguas subterráneas se ajustarán a las siguientes condiciones:

1. Que el alumbramiento no ocasione sensibles cambios físicos o químicos que dañen las condiciones naturales del acuífero o del suelo.
2. Que la explotación no produzca interferencia con otros pozos o cuerpos de aguas ni perjudique a terceros.

Art. 174. — Sectores de explotación

A medida que se vayan determinando los límites y características de los acuíferos se dará conocimiento público por las autoridades de aplicación pudiendo constituirse sectores de explotación de aguas subterráneas que podrán integrar o no los sistemas aludidos en el Título V del Libro I de este Código.

Art. 175. — Operación de pozos

Se hayan o no constituido los sectores de explotación: aludidos en el artículo anterior: cuando razones técnicas lo aconsejen: la autoridad de aplicación de oficio o a pedido de interesados podrá disponer la clausura de uno o varios pozos o su operación conjunta indemnizando los perjuicios que causen a los usuarios.

Art. 176. — Mantenimiento y operación conjunta, de uno o varios pozos

Cuando un pozo sirva a varios concesionarios o varios pozos: los gastos de mantenimiento serán soportados por ellos en proporción al uso máximo acordado en concesión. La reglamentación establecerá las modalidades del uso y el monto máximo del depósito que cada concesionario deberá efectuar en la cuenta especial que abrirá la autoridad de aplicación y que será destinada exclusivamente a conservación y mantenimiento del pozo.

Art. 177. — Recarga artificial de acuíferos

Donde sea física y económicamente posible: la autoridad de aplicación podrá realizar trabajos para recarga de acuíferos e imponer a los concesionarios de uso de aguas subterráneas: la obligación de hacer las obras o trabajos para ello o para retornar al subsuelo los excedentes no usados. Estos gastos se prorratearán entre los beneficiarios en proporción al uso máximo acordado en concesión o se considerarán como obras de fomento, según reserva fundamentalmente la autoridad de aplicación.

Art. 178. — Contravenciones

La contravención de las disposiciones contenidas en los artículos anteriores o las resoluciones de la autoridad de aplicación dictadas en virtud de las atribuciones conferidas por los arts. 159: 160: 162: 166: 168: inc. 5: 169: 170: 171: 172: 173: 174: 175 y 177 traerá aparejada las siguientes sanciones que siempre serán aplicadas previa audiencia.

1. Cuando el contraventor no sea concesionario de aguas subterráneas, una multa que será graduada por la autoridad de aplicación conforme a lo preceptuado por el art. 274. También y como pena paralela pueden aplicarse las sanciones conminativas establecidas por el art. 275.

2. Cuando el contraventor sea una empresa o técnico universitario responsable, una multa que será graduada por la autoridad de aplicación conforme a lo preceptuado por el art. 274. También y como pena paralela, pueden aplicarse las sanciones conminatorias establecidas por el art. 275. Todo ello sin perjuicio de la suspensión o cancelación de la matrícula en el registro aludido en el art. 17.

3. Cuando el contraventor sea concesionario o solicitante de concesión de agua subterránea, la sanción será multa que será graduada por la autoridad de aplicación conforme a lo preceptuado por el art. 274. También y como pena paralela, pueden aplicarse las sanciones conminatorias establecidas por el art. 275. Todo ello sin perjuicio de disponer la suspensión del uso del agua o la caducidad de la concesión. Cuando las infracciones sean imputables a la empresa perforadora; técnico universitario responsable y al permisionario, o solicitante de concesión, se sancionará a todos.

Art. 179. — Vapores endógenos

Son aplicables en lo pertinente, las disposiciones sobre aguas subterráneas a los vapores endógenos.

**LIBRO 5 — Protección, conservación y defensa
contra efectos dañosos en las aguas**

TITULO I — Disposiciones generales

Art. 180. — Conservación de aguas

La autoridad de aplicación dispondrá las medidas necesarias para prevenir, proteger y conservar la calidad de las aguas, atenuar o suprimir sus efectos nocivos, entendiéndose por tales los daños que puedan causar a personas, cosas o al medio ambiente.

TITULO II — Contaminación

Art. 181. — Contaminación

A los efectos de este Código, se entiende por aguas contaminadas las que por cualquier causa son peligrosas para la salud, inaptas para el uso que se les dé; perniciosas para el medio ambiente y la vida que se desarrolla en el agua o álveo; o que por su olor, sabor, temperatura o color, cauce molestias o daños.

Art. 182. — Grados de contaminación

La alteración del estado natural de las aguas podrá efectuarse en los modos y grados que la autoridad de aplicación determine en los reglamentos que dictará previa consulta con la autoridad sanitaria. Estos reglamentos estarán orientados a mantener y mejorar el nivel de calidad de vida existente y a posibilitar el mejor uso de las aguas.

Art. 183. — Inventario

Dentro del plazo de cinco años, a contar desde la promulgación de este Código, la autoridad de aplicación, en colaboración con la autoridad sanitaria, hará un inventario de las aguas estableciendo su grado de contaminación, que se registrará en el catastro de aguas aludido en el art. 26. Este inventario será actualizado anualmente. También deberán formularse planes quinquenales para evitar o disminuir la contaminación.

Art. 184. — Convenios sobre contaminación

Podrá convenirse entre concesionarios que descarguen en un mismo cauce o depósito de aguas que el grado de contaminación se calcule en conjunto. Será condición de validez de estos convenios, su aprobación por la autoridad de aplicación.

Art. 185. — Sanciones

En caso de contaminación por concesionario o permisionarios, la autoridad de aplicación podrá establecer contribuciones especiales, suspender la entrega de dotación o declarar la caducidad de la concesión conforme a la preceptuado en los artícu-

los pertinentes de este Código, además podrá aplicarse al infractor una multa que será graduada por la autoridad de aplicación, conforme a lo preceptuado por el art. 274, también y como pena paralela pueden aplicarse las sanciones conminatorias establecidas por el art. 275. Si la contaminación fuera causada por titulares de uso de aguas privadas o por terceros, se sancionará a los responsables con multas y sanciones conminatorias, pudiéndose también establecer las contribuciones especiales aludidas en la primera parte del artículo.

TITULO III. — Inundación y erosión de márgenes

Art. 186. — Cargo del costo de obras

Las obras necesarias para evitar inundaciones, cambio o alteración de cauces, corrección de torrentes, encauzamiento o alimentación de obstáculos en los cauces realizados por el Estado, lo serán bajo el régimen de fomento o no. Al disponerse la realización de las obras se determinará la forma en que se amortizará su costo teniendo en cuenta la entidad económica de los bienes protegidos, la capacidad contributiva de los beneficiados y el beneficio que las obras generen.

Art. 187. — Reconducción

Si un curso natural cambiase de cauce, la reconducción de las aguas al antiguo lecho requiere concesión o permiso de la autoridad de aplicación. En caso de urgencia manifiesta puede el perjudicado realizar las tareas provisionales pertinentes.

Art. 188. — Obras de defensa de particulares

Los particulares sean o no permisionarios o concesionarios de aguas públicas pueden, dando aviso a la administración, plantear o construir defensas dentro del límite de sus propiedades; cuando estas defensas se construyan en álveos públicos se requerirá permiso o concesión, pudiéndose obligar a los particulares a sujetarse a un plan general de defensas.

Art. 189. — Caso de emergencia

En caso de peligro inminente de inundación, cualquier autoridad podrá hacer u obligar a hacer las defensas necesarias mientras dure el peligro, comunicando de inmediato a la autoridad de aplicación.

Art. 190. — Protección de cuencas

La autoridad de aplicación podrá fijar áreas de protección de cuencas, fuentes, cursos o depósitos de agua, donde no será permitido el pasaje de animales, la tala de árboles, la alteración de la vegetación, ni las actividades que la autoridad de aplica-

En prohíba. También podrá la autoridad de aplicación disponer la plantación de árboles, bosques protectores o las medidas de protección o conservación pertinentes.

En ambos casos el propietario será indemnizado por el daño emergente. En caso que la obligación de plantar árboles se imponga a ribereños concesionarios, no se debe indemnización alguna.

En todos los casos, para la tala de árboles situados en las márgenes de cursos o depósitos de aguas naturales o artificiales se requerirá permiso de la autoridad de aplicación.

Los propietarios están obligados a permitir el acceso a sus propiedades al personal encargado de construcción de defensa y remoción de obstáculos.

Art. 191. — Información previa

Previo el otorgamiento de permisos o concesiones de uso de álveos, márgenes y extracción de áridos, la autoridad de aplicación se informará si el permiso afectará desfavorablemente las riveras o el flujo de las aguas; si así fuera no se otorgará o se exigirá la construcción de las obras necesarias para prevenir daños.

Art. 192. — Zonas Inundables

La autoridad de aplicación, dentro de los cinco años de la promulgación de este Código, levantará planos en los que se determinan las zonas que pueden ser afectadas por inundaciones. En dichas zonas se permitirá la erección de obstáculos que puedan afectar el curso de las aguas, sin la autorización previa de la autoridad de aplicación.

Las nuevas construcciones o plantaciones que se efectúen en estas zonas deberán ser autorizada por la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta el riesgo de inundación.

Art. 193. — Penalizaciones

Las infracciones a las disposiciones del artículo precedente, serán sancionadas previa audiencia con multa que será graduada por la autoridad de aplicación conforme a lo preceptuado por el art. 274. También y como pena paralela pueden aplicarse las sanciones conminatorias establecidas por el art. 275 de este Código. Sin perjuicio de ello la autoridad de aplicación podrá ordenar la demolición de las obras o destrucción de los obstáculos o demolerlos, o destruirlos por cuenta del infractor.

Art. 194. — Atribución de costos

Cuando se construyan diques u obras que tengan por objeto prevenir o controlar inundaciones, al aprobar el proyecto la autoridad de aplicación designará la zona en la cual las propiedades quedan

beneficadas con la protección. Los dueños de esos predios pueden ser obligados al pago de costos en proporción razonable al beneficio que reciban.

TITULO IV — Desecación de pantanos

Art. 195. — Desecación

Los dueños de terrenos pantanosos que quieran desecarlos o sanearlos podrán extraer de terrenos del dominio público o privado del Estado previo permiso la tierra, arena o piedras necesarias para las labores.

Art. 196. — Desecación por el Estado o los Interesados

Cuando se declare insalubre un terreno pantanoso, la autoridad de aplicación dispondrá su desecación teniendo en cuenta el balance hídrico y condiciones ecológicas de la zona.

Si el terreno pertenece a un solo propietario, éste puede optar por proceder a su desecación, en el plazo que se le fije; si no la realizara, la hará el Estado previa expropiación.

TITULO V — Desagües y avenamiento

CAPITULO I — Avenamiento y desagües particulares

Art. 197. — Revenimiento y salinización

Nadie puede provocar el revenimiento o salinización de sus terrenos o de los ajenos.

La violación de lo dispuesto por este artículo causará, si el infractor fuera titular de permiso o concesión, la suspensión de uso del agua o del ejercicio de los derechos, emanados de la concesión o permiso hasta que se adopte oportuno remedio o la caducidad de la concesión o permiso, según la gravedad de la infracción. Además, previa audiencia podrá aplicarse al contraventor una multa que será graduada por la autoridad de aplicación conforme a lo preceptuado por el art. 274. También y como pena paralela pueden aplicarse las sanciones conminatorias establecidas por el art. 275.

CAPITULO II — Avenamiento y desagües generales

Art. 198. — Desagües de mejoramiento Integral

Corresponde a la autoridad de aplicación formular un plan de construcción y mantenimiento de desagües de mejoramiento integral.

Art. 199. — Sistematización

En los proyectos aludidos en el artículo anterior se tratará siempre de sistematizar las corrientes y posibilitar la autorización benéfica de las aguas de los desagües.

Art. 200. — Consorcios

La construcción y mantenimiento de estas obras podrá ser encargada o autorizada por la autoridad de aplicación o consorcios de usuarios en la forma y condiciones que en cada caso se establezca.

TITULO VI — Filtraciones**Art. 201. — Filtraciones**

Todo acueducto o depósito artificial deberá constituirse de manera que no produzca filtraciones que causen perjuicio.

Art. 202. — Ejecución y emplazamiento de obras

En caso de acueductos o depósitos privados, las obras de acondicionamiento para evitar filtraciones serán ejecutadas por el titular de la concesión o permiso en la forma en que establezca la autoridad de aplicación que podrá ejecutarlas por cuenta del emplazado en caso de que no se realicen las obras en el plazo fijado sin perjuicio de la aplicación de la sanción establecida en el art. 78.

En los cursos y depósitos naturales de aguas y en los cursos y depósitos artificiales del dominio público y privado del Estado, las obras serán ejecutadas por éste.

En todos los casos los acueductos o depósitos artificiales deberán guardar las distancias que establezca la autoridad de aplicación para evitar daños a terceros.

TITULO VII — Defensa contra efectos nocivos de las aguas atmosféricas**Art. 203. — Aguas atmosféricas**

La defensa contra efectos nocivos de las aguas atmosféricas se regirá por lo establecido en los arts. 155, 156 y 157.

LIBRO 6 — Obras hidráulicas**TITULO I — Disposiciones generales****Art. 204. — Concepto de obra hidráulica**

A los efectos de este Código se denomina obra hidráulica a toda construcción, excavación o plantación que implique alterar las condiciones naturales de la superficie, subsuelo, flujo o estado natural de las aguas o que tenga por objeto la captación, derivación, alumbramiento, conservación, protección, descontaminación o utilización del agua o defensa contra sus efectos nocivos.

Art. 205. — Requisitos para la construcción de obras

Para la construcción de toda obra hidráulica, salvo las que efectúen concesionarios o permisionarios en su propiedad en los casos en que este Código ni su título de concesión exijan intervención de la autoridad de aplicación, es necesaria la previa aprobación y registro en el catastro de aguas de por lo menos lo siguiente: sin perjuicio de otros requisitos que exija el reglamento.

1. Planos generales y de detalles, en la escala y con las especificaciones establecidas en el reglamento.

2. Pliego de especificaciones técnicas.

3. Memoria descriptiva de la obra civil y máquinas e instalaciones accesorias y sistema de operación.

En todos los casos, los planos y documentación técnica serán elaborados y conformados, por profesional universitario habilitado, conforme a la ley que rija el ejercicio profesional en la Provincia.

Art. 206. — Presentación de los planos

Las obras se construirán con sujeción a los planos y especificaciones aprobadas por la autoridad de aplicación; cualquier modificación deberá ser autorizada por la misma autoridad que las aprobó.

De las obras existentes deberán presentarse planos para su registro en los plazos y condiciones que determine el reglamento.

Art. 207. — Modificación o supresión de obras

La autoridad de aplicación podrá disponer el retiro, modificación, demolición o cambio de ubicación de las obras en los casos siguientes:

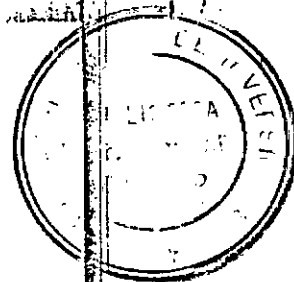
1. Si ello es necesario o conveniente para mejor uso, conservación o distribución de las aguas o defensa contra sus efectos nocivos.

2. Si no hubiera cumplido la exigencia del art. 205, o no se ajustarán a los planos y proyectos aprobados.

3. Si por haber cambiado las circunstancias que determinaron su construcción, resultan inútiles o perjudiciales.

Art. 208. — Costos de la modificación

En los casos de los incs. 1 y 3 del artículo anterior cuando la modificación o supresión de obras, o cambios de circunstancias, se deba a razones de interés público o hechos del Estado o sus agentes, los gastos serán soportados por el Estado.

**Art. 209. — Obras complementarias**

Como requisito para la construcción de nuevas obras, cuyo manejo puede causar perjuicio a los intereses generales o a un interés o derecho concreto, deberán preverse y construirse obras complementarias para evitar esos perjuicios.

TITULO II — Obras hidráulicas públicas**Art. 210. — Obras públicas**

A los efectos de este Código se consideran obras hidráulicas públicas, las construidas para utilidad o comodidad común y las que se efectúan en cosas del dominio público del Estado quienquiera que las haya construido o pagado.

Art. 211. — Alveos desecados por trabajos públicos

Los álveos desecados por efecto de obras o trabajos públicos pertenecen al Estado.

Art. 212. — Ley aplicable

Las obras hidráulicas públicas serán estudiadas, proyectadas y construidas de acuerdo al régimen especial de las obras públicas de la Provincia o a lo que establezca en convenios con la Nación u otras Provincias para la construcción de determinadas obras.

Art. 213. — Apropiación de proyectos

En casos que obras públicas proyectadas por particulares cuyos planos o proyectos hayan sido presentados al Estado, no hayan sido construidas por cualquier causa, el Estado podrá, sin costo alguno, utilizar los planos, estudios y proyectos efectuados.

Art. 214. — Expropiación, Individualización

Los terrenos que el art. 265 declara de utilidad pública para construcción de obras serán individualizados por la autoridad pública al aprobarse la realización de las obras.

Art. 215. — Obras de fomento

Las obras públicas serán de fomento en los casos que así lo ordene expresamente este Código o la solución que disponga su realización.

Art. 216. — Conservación de obras

La conservación y limpieza de las obras será a cargo de los que tengan derecho a su uso o reciban su beneficio sin distinguir su situación topográfica en la proporción; forma; método o sistema que establezca la autoridad de aplicación. En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo, la autoridad de aplicación, previo em-

plazamiento, podrá realizar las obras y trabajos correspondientes al concesionario o permisionario por cuenta de éste, sin perjuicio de la aplicación de la sanción establecida en el art. 78.

Art. 217. — Uso de obras construidas

El concesionario o permisionario que necesite hacer uso de un canal, depósito u obra ya construida debe pagar a la autoridad de aplicación la suma que ésta fije en concepto de derecho a su uso. Es a su cargo el costo de las nuevas obras necesarias para el ejercicio de sus derechos.

Art. 218. — Requisito de las obras

Además de los que en cada caso establezca la autoridad de aplicación, las obras y canales de aducción y desagüe deben llenar los siguientes requisitos:

1. Se construirán siempre que el permiso o concesión no pueda servirse adecuadamente por obras ya construidas.
2. Tendrán aparatos y obras que permitan usar y controlar adecuadamente el caudal que conducen.
3. Deberán recorrer el trayecto más corto compatible con el uso a que están destinados, los accidentes del terreno y las construcciones u obras existentes.
4. No ocasionarán sensibles perjuicios a terceros.
5. De correr dos o más canales paralelamente, de ser factible, deben unificarse.
6. Deberá contemplarse la salida de agua excedente de modo que no cause perjuicios.

Art. 219. — Nuevo acueducto

Cuando un nuevo acueducto atraviere una vía pública existente, se construirán puentes de las características que indique la autoridad encargada de la administración, uso y conservación de la vía pública. En esos casos se establecerá también quién cargará con los gastos de construcción y mantenimiento del puente y obras accesorias.

Art. 220. — Vía pública que cruce cursos de agua

Cuando una nueva vía pública, atraviere un curso o depósito de agua existente, deberá construirse un puente con las características que indique la autoridad de aplicación y la encargada del proyecto y construcción de la vía pública. Los gastos de construcción y mantenimiento del puente y obras accesorias, serán a cargo de la autoridad encargada de la administración, uso y conservación de la vía pública.

Art. 221. — Predios linderos con cursos de aguas

Los titulares de propiedades privadas lindantes con cursos de aguas podrán construir por su cuenta los puentes que sean necesarios, siempre que no impidan o entorpezcan el libre paso de las aguas ni reduzcan la capacidad del acueducto. La autoridad de aplicación determinará en cada caso las características de la obra que será construida por los interesados bajo supervisión de la autoridad de aplicación.

Los gastos de construcción y conservación del puente serán a cargo del particular cuando se trate de un acueducto existente y a cargo de los usuarios o la administración, según determine la autoridad de aplicación en caso de tratarse de un nuevo acueducto.

Art. 222. — Cruce de acueductos

Cuando un curso o depósito de agua cruce a otro, la autoridad de aplicación determinará las características de las obras y quién cargará con los gastos de construcción y mantenimiento.

TITULO III — Obras hidráulicas privadas**Art. 223. — Obras privadas**

Los particulares podrán construir libremente obras hidráulicas para uso de sus derechos en los casos en que su título, ni las disposiciones de este Código ni la reglamentación, exijan permiso previo o presentación de planos, no perjudique a terceros y sean compatibles con la buena distribución de las aguas.

Art. 224. — Obras privadas que necesitan autorización

En los casos que las obras a construir por particulares exijan permiso previo o presentación de planos, la autoridad de aplicación determinará los modos y formas de su construcción y los requisitos de habilitación.

Art. 225. — Costo y conservación de obras privadas

En todos los casos el costo de las obras aludidas en este título y el de su conservación y mantenimiento, serán soportados por el titular del permiso o de la concesión.

LIBRO 7 — Retribuciones al dominio; ocupación temporal; servidumbres administrativas y expropiación. Impuestos en razón de uso de las aguas, conservación y defensa contra sus efectos nocivos**TITULO I — Restricciones al dominio****Art. 226. — Imposición**

Además de las establecidas por este Código para la mejor administración, explotación, exploración, mantenimiento, conservación, contralor y defensa contra efectos nocivos de las aguas, la autoridad de aplicación puede establecer restricciones al dominio privado, imponiendo a sus titulares o usuarios obligaciones de hacer, de no hacer, o de no dejar de hacer.

Art. 227. — Ingreso privados

Los funcionarios o empleados encargados de la administración, explotación, exploración, mantenimiento, conservación y contralor de las aguas; su uso o defensa contra sus efectos nocivos; tendrán acceso a propiedades privadas sin otro requisito que su identificación e indicación de la función que están cumpliendo, de lo que puede exigirseles constancia escrita; en caso de serles negada la entrada se podrá solicitar orden de allanamiento conforme a lo perceptuado en el art. 3.

Art. 228. — Operatividad

Las restricciones al dominio impuestas por este Código son inmediatamente operativas. Las que se impongan por la autoridad de aplicación deberá serlo por resolución fundada.

Art. 229. — Indemnización

La imposición de restricciones al dominio privado no da derecho a quien la soporte a reclamar indemnización alguna salvo que como consecuencia directa e inmediata de su ejecución, se ocasionara un daño patrimonial concreto.

TITULO II — Ocupación temporal**Art. 230. — Ocupación temporal**

La autoridad de aplicación puede disponer por resolución fundada y previa indemnización, la ocupación temporal de obras o propiedad privada por entes estatales o particulares, con función de Estado. Para establecer una ocupación temporal serán de aplicación las normas y procedimientos establecidos para las servidumbres.

Art. 231. — Facultades del ocupante

La resolución que disponga la ocupación temporal, deberá enumerar taxativamente las facultades

conferidas al ocupante y el tiempo previsto para su ejercicio. Vencido el plazo de ocupación temporal, las mejoras si las hubiere, quedarán a beneficio del predio o de la obra afectada.

Art. 232. — Urgencia

En caso de urgencia y necesidad pública es aplicable a la ocupación temporal lo prescripto por el art. 2512 del Cód. Civil.

TITULO III — Servidumbres administrativas

CAPITULO I — Disposiciones generales

Art. 233. — Imposición

Corresponde a la autoridad de aplicación la imposición de servidumbres administrativas, conforme al procedimiento que establezca la reglamentación, previa indemnización. El procedimiento que se establezca requerirá el derecho de defensa. En los planos de lugares gravados con servidumbres se hará constar su existencia.

Art. 234. — División del predio

Cuando un terreno con concesión de uso de agua se divida por cualquier causa, los dueños de la parte superior, inferior o de la fuente que sirve de abrevadero, según el caso, quedarán obligados a dar paso al agua para riego o desagüe o permitir el abrevadero como servidumbre, sin poder exigir por ello indemnización alguna y sin que sea necesaria una declaración especial. No obstante el dominante puede exigir que la autoridad de aplicación declare la existencia de la servidumbre.

Art. 235. — Prescripción

Las servidumbres administrativas aludidas en este Código no pueden adquirirse por prescripción.

Art. 236. — Requisitos para imponer servidumbres

Se impondrá servidumbre administrativa cuando ello sea necesario para el ejercicio de los derechos emanados de una concesión, realización de estudios; obras; ordenamiento de cuentas; protección o conservación de aguas, tierras; edificios; poblaciones u obras; control de inundaciones; avenamiento y desecación de pantanos o tierras anegadizas y no sea posible o conveniente el uso de bienes públicos.

Art. 237. — Fundamentos de la oposición

El dueño del fundo sobre el que se quiera imponer servidumbre, podrá oponerse probando que el peticionante no es titular de concesiones, que ella pueda imponerse sobre otro predio con menores in-

convenientes o que pueda servirse el derecho de quien quiera imponer servidumbre usando de terrenos del dominio público. La autoridad de aplicación resolverá en definitiva.

Art. 238. — Indemnización

La indemnización a que alude el art. 233 comprenderá el valor del uso del terreno ocupado por la servidumbre, los espacios laterales que fije la autoridad de aplicación para posibilitar su ejercicio y los daños que cauce la imposición de la servidumbre teniendo en cuenta el desmérito que sufre el sirviente por la subdivisión. Será fijada, previa audiencia de partes, por la autoridad de aplicación; si hay conformidad en el monto el trámite quedará terminado en sede administrativa.

La disconformidad con el monto no obstará a la imposición de la servidumbre. Cuando el dueño de la heredad a gravar no esté conforme con la tasación efectuada por la autoridad de aplicación, ésta iniciará juicio por expropiación, previo depósito por aquél a cuyo beneficio se va a imponer la servidumbre del monto fijado por la autoridad de aplicación, más un 40 % para responder a costas, intereses y eventuales aumentos de la indemnización.

Art. 239. — Inversión de prueba

El acueducto o camino de abrevadero existente, se considerará servidumbre construida e indemnizada salvo prueba instrumental en contrario. El dominante puede exigir de la autoridad de aplicación declaración expresa en un caso concreto.

Art. 240. — Medios para ejercer la servidumbre

El derecho a una servidumbre comprenderá los medios necesarios para ejercerla. Las obras se realizarán bajo la supervisión a expensas del dominante y no deberá causar perjuicio sensible al sirviente.

Art. 241. — Daños. Inversión de prueba

El sirviente tiene derecho a indemnización por todo daño que sufra con motivo del ejercicio de la servidumbre, salvo que el dominante acredite que los perjuicios provienen de culpa o dolo de terceros, del perjudicado; sus encargados o dependientes.

Art. 242. — Ejercicio funcional del derecho

El sirviente no puede alterar, disminuir ni hacer más incómodo el derecho del dominante, ni éste puede aumentar el gravamen constituido. La autoridad de aplicación, en caso de infracción a la disposición de este artículo, restituirá las cosas al estado anterior y aplicará al responsable previa audiencia; una multa que graduará conforme a lo preceptuado en el art. 274; también y como pena paralela pueden aplicarse las sanciones conminatorias establecidas en el art. 275.

Art. 243. — Conciliación de intereses, deuda

Siempre se deberán conciliar en lo posible, los intereses de las partes y en caso de duda se decidirá a favor de la heredad sirviente, salvo lo dispuesto por los arts. 239 y 256.

Art. 244. — Servidumbres urbanas

Las servidumbres urbanas para abastecimiento de poblaciones, y uso industrial se regirán por ordenanzas o reglamentaciones especiales.

Art. 245. — Servidumbres mineras

Las servidumbres mineras de abrevadero, y utilización o desagüe de aguas públicas se constituirán y ejercerán con arreglo a las disposiciones de este Código.

Art. 246. — Servidumbres privadas

Las servidumbres para uso, desagüe y saca de aguas privadas se rigen por el Código Civil.

Art. 247. — Cambio de objeto

Las servidumbres establecidas con un objeto determinado, no podrán usarse para otro sin previa autorización de la autoridad de aplicación.

Art. 248. — Urgencia

En caso de urgencia y necesidad pública, es aplicable a las servidumbres lo prescripto por el art. 2512 del Cód. Civil.

CAPITULO II — Disposiciones especiales con respecto a la servidumbre de acueducto**Art. 249. — Condiciones y mantenimiento de acueductos**

La conducción de aguas por acueductos se hará de manera tal que no ocasione perjuicios a la heredad sirviente ni a las vecinas. La autoridad de aplicación, verificado que el acueducto no reúne las condiciones adecuadas, exigirá su construcción o reparación bajo apercibimiento de efectuar las obras por administración a costa del dominante. Sin perjuicio de ello se aplicará al responsable, previa audiencia: una multa; que graduará conforme a lo preceptuado por el art. 274, también y como pena paralela; pueden aplicarse las sanciones conminatorias establecidas por el art. 275.

Art. 250. — Características del acueducto y accesorios

La autoridad de aplicación determinará las características del acueducto, su anchura y la de los espacios laterales.

Art. 251. — Trazado

El trazado de los acueductos será el que, permitiendo la circulación de las aguas por gravedad sea el más corto; si se elige otro recorrido se requerirá justificación técnica y económica de la decisión.

Art. 252. — Acueducto existente

El que tenga en su heredad un acueducto propio o afectado a servidumbre, podrá impedir la apertura de uno nuevo ofreciendo dar paso a las aguas por el existente. Si fuera menester ensanchar el acueducto para contener la mayor cantidad de agua, deberá el dominante indemnizar al sirviente el terreno ocupado por el ensanche y accesorios. Las nuevas obras que sea necesario construir y las reparaciones o modificaciones que requieran las existentes serán solventadas por los que reciban beneficios de ellas. El mantenimiento del acueducto correrá por cuenta de los que lo usen en proporción al volumen introducido, pero el sirviente o la autoridad de aplicación podrá exigir a cualquiera de los dominantes el mantenimiento del acueducto o el pago de los gastos que cause sin perjuicio de los derechos que corresponden a quien se vio obligado a mantener el acueducto o a efectuar pagos contra los restantes co-obligados.

Art. 253. — Obras a cargo del dominante

El dominante deberá construir a su costa los puentes y sifones necesarios para comodidad del sirviente en los puntos y con las características que fije la autoridad de aplicación. El sirviente podrá construir a su costa los puentes, pasarelas y sifones que desee; dando aviso a la autoridad de aplicación.

Art. 254. — Accesorios de la servidumbre

Es inherente a la servidumbre de acueducto el derecho de paso por el espacio lateral del personal encargado de su inspección, mantenimiento y conservación. Para el ingreso de este personal se dará previo aviso al sirviente. También es inherente a la servidumbre de acueducto el depósito temporario en el espacio lateral, del material proveniente de la limpieza del acueducto y del necesario para su conservación.

Art. 255. — Obras necesarias

El dominante efectuará las obras de refuerzo de márgenes que sean necesarias y podrá oponerse a toda obra nueva en los espacios laterales que afecte el ejercicio de la servidumbre.

Art. 256. — Responsabilidad objetiva

Los dueños y tenedores del fundo sirviente son solidariamente responsables de toda sustracción o disminución de agua que se verifique en su predio y de los daños que se causen al acueducto, salvo que demuestre su falta de culpabilidad.

CAPITULO III — Disposiciones especiales con respecto a la servidumbre de desagüe y avenamiento.

Art. 257. — Servidumbre de desagüe

Se establecerá servidumbre de desagüe para que un concesionario de uso de aguas públicas vierta el remanente de las aguas a cuyo uso tiene derecho en un predio inferior o en un cruce público.

Art. 258. — Servidumbre de avenamiento

Se establecerá servidumbre de avenamiento con la finalidad de lavar o desecar un terreno o verter en un terreno inferior o cauce público las aguas que perjudiquen.

Art. 259. — Aplicación de normas

Las reglas establecidas para la servidumbre de acueducto son aplicables a las servidumbres de desagüe y avenamiento.

CAPITULO IV — Disposiciones especiales con respecto a la servidumbre de abrevadero

Art. 260. — Servidumbre de abrevadero

A los efectos de la bebida o baño de animales se podrá imponer servidumbre de abrevadero que consiste en el derecho de conducir el ganado por las sendas o caminos que se fijan a través del predio sirviente en días, horas y puntos determinados. Los gastos de imposición de la servidumbre son a cargo del dominante.

Art. 261. — Derechos del sirviente

Los dueños de los predios sirvientes podrán variar con autorización de la autoridad de aplicación, previa audiencia del dominante la Dirección del camino o senda; pero no su anchura ni el punto de entrada. Los gastos que esta variación ocasione son a su cargo.

CAPITULO V — Extinción de las servidumbres

Art. 262. — Causales

Las servidumbres aludidas en este Código se extinguen por:

1. No uso durante un año por causas imputables al dominante.
2. Falta de pago de la indemnización en el plazo fijado.
3. Consolidación.
4. Renuncia.
5. Extinción de concesión del predio dominante.

6. Cambio de destino sin autorización de la autoridad de aplicación.

7. Causar grave perjuicio al sirviente o por violaciones graves o reiteradas de las disposiciones de este Código sobre uso de la servidumbre.

8. Desaparición de la causa que determinó su constitución o cambio de circunstancias.

9. Revocatoria.

Art. 263. — Declaración

La extinción de la servidumbre será declarada por la autoridad de aplicación con audiencia de interesados.

Art. 264. — Consecuencia

Extinguida la servidumbre, el propietario del fundo sirviente vuelve a ejercer plenamente su derecho de dominio, sin que por ello deba devolverse la indemnización recibida.

TITULO IV — Expropiación

Art. 265. — Declaración genérica

Se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación las obras, trabajos muebles, inmuebles y vías de comunicación necesarias para el mejor uso de las aguas, conservación, protección y defensa contra sus efectos nocivos, construcción de obras y zonas accesorias debiendo la autoridad expropiante en cada caso individualizar, específicamente los bienes a expropiar.

Art. 266. — Procedimiento

Los procedimientos de la expropiación se regirán por la ley vigente en la materia.

LIBRO 8 — Jurisdicción, competencia y régimen contravencional

TITULO I — Jurisdicción y competencia

Art. 267. — Regla general

Todas las cuestiones vinculadas a los derechos y obligaciones emergentes de concesionarios o permisos otorgados, administración, distribución, conservación, protección y defensa contra efectos nocivos, las aguas imposición de limitaciones al dominio y expropiaciones que no sean deferidas a la competencia de los tribunales ordinarios u otras entidades serán resueltas por la autoridad de aplicación.

Art. 268. — Audiencia de parte

Los asuntos que afecten los intereses de cualquier persona serán ventilados con su audiencia.

Art. 269. — Procedimiento

La tramitación de las cuestiones que se susciten ante la autoridad de aplicación se regirán por la ley de trámite administrativo de la Provincia.

Art. 270. — Medidas precautorias

Contra las resoluciones dictadas por la autoridad de aplicación en uso de sus atribuciones no se admitirán interdictos ni medidas de no innovar.

Art. 271. — Competencia judicial

Son cuestiones de competencia de los tribunales ordinarios, las siguientes:

1. Las referidas al dominio de agua, álveos y márgenes.
2. Las referidas a servidumbres y restricciones al dominio de índole civil.
3. Las referidas a montos indemnizatorios si no hay acuerdo en sede administrativa.
4. Las referidas a daños y perjuicios.

Art. 272. — Derechos subjetivos

La impugnación de las resoluciones administrativas que hayan creado derechos subjetivos se ejercerá por la administración o por los interesados ante los tribunales en lo contencioso administrativo por acción ordinaria o de levisidad según corresponda de acuerdo a la competencia establecida en las leyes respectivas.

Art. 273. — Ejecución fiscal

Corresponderá la ejecución fiscal para el cobro de cánones, tasas, contribuciones de mejoras, reembolso de obras o trabajos efectuados por cuenta o en beneficio de personas titulares o no de uso de agua, álveos u obras públicas, multas, sanciones, conminatorias o cualquier obligación pecuniaria establecida por este Código, leyes conexas o reglamentos de aplicación.

TITULO II — Régimen contravencional**Art. 274. — Multas**

En los casos en que conforme a este Código corresponda la aplicación de multas por el procedimiento que establezca la reglamentación la autoridad de aplicación teniendo en cuenta las circunstancias del caso y las personales del infractor la entidad del hecho y los perjuicios causados graduará la multa cuyo mínimo será el importe del canon anual de una hectárea permanente; el máximo será cinco veces el importe del mínimo. En caso extraordinarios la autoridad de aplicación podrá reducir un tercio el mínimo y elevar tres veces el máximo.

Art. 275. — Sanciones conminatorias

En los casos que conforme a este Código corresponda la aplicación de sanciones comunitarias la autoridad de aplicación teniendo en cuenta las circunstancias del caso, las graduará y obligará al pago de una suma cuyo máximo será el importe del canon anual establecido para una hectárea permanente y cuyo mínimo la décima parte del máximo. Las sanciones se aplicarán por día, por semana o por mes mientras la infracción subsista.

LIBRO 9 — Protección de situaciones consolidadas, disposiciones transitorias y finales**TITULO I — Disposiciones transitorias y protección de situaciones consolidadas****Art. 276. — Aprovechamientos anteriores según leyes provinciales**

Los aprovechamientos de aguas, álveos u obras hidráulicas legítimamente efectuados con anterioridad a la vigencia de este Código conforme a las disposiciones de las leyes 2186, 2518, 4513, 4612 y 4756 darán derecho a su titular a obtener una concesión o permiso del mismo uso y categoría que la anterior, manteniendo su situación sin otro recaudo que presentarse ante la autoridad de aplicación dentro de los seis meses a contar desde la vigencia de este Código indicando el aprovechamiento que venía efectuando y solicitando concesión o permiso.

Vencido este plazo sin que haya solicitado concesión o permiso la autoridad de aplicación podrá intimar personalmente al usuario a solicitarla bajo el apercibimiento de declarar extinguidos los derechos anteriores y hacer cesar el uso.

Art. 277. — Transferencia de servicios públicos por la Nación.

Igual derecho que el consagrado en el artículo anterior tendrán los titulares de concesionarios o permisos otorgados por entes nacionales en virtud de lo preceptuado por la ley nacional 6546 y el convenio ratificado por ley provincial 3407 y ley nacional 17.435 si los servicios se transfieren a la provincia. En tal caso el plazo de seis meses se contará a partir de la fecha de transferencia. La autoridad de aplicación podrá en este caso ejercer las facultades acordadas en el segundo párrafo del artículo anterior.

Art. 278. — Discrepancia sobre la naturaleza de las aguas

Los que pretendan tener derecho al uso de aguas que podrían considerarse privadas antes de la ley nacional 17.711 y que ahora por aplicación de ese cuerpo legal son públicas deberán denunciar su

aprovechamiento a la autoridad de aplicación dentro de los seis meses de la fecha en que este Código entre en vigencia indicando volumen o por ciento del caudal que utilizan, uso efectuado y superficie cultivada si es para riego en el mismo plazo. Podrán solicitar concesión para el uso que vienen efectuando la que le será acordada sin otro recaudo que verificar la exactitud de la declaración.

Vencido el plazo indicado en la primera parte del artículo la autoridad de aplicación podrá ejercer la facultad que le otorga el segundo párrafo del art. 276.

Art. 279. — Situación consolidada.

Cuando exista sentencia basada en autoridad de cosa juzgada que declare privadas a aguas que conforme a la ley 17.711 son públicas su titular podrá en cualquier momento renunciar a su derecho y obtener sin otro recaudo concesión permanente del uso de las aguas que aprovecha por título de derecho civil.

Art. 280. — Aguas privadas

Igual derecho que el del artículo anterior podrá ejercer el titular de aguas que son privadas según el régimen vigente.

Art. 281. — Cuestión previa

Quienes se crean con algún derecho de índole privada sobre aguas, álveos u obras que no sean las aludidas en el art. 279 para reclamar indemnización por expropiación deberán previamente obtener una sentencia que declare que durante la vigencia del anterior régimen legal esos bienes les pertenecían.

Art. 282. — Aprovechamiento de hecho

Los titulares de aprovechamiento de hecho deberán solicitar concesión conforme a las normas del Libro 2, Título II, Capítulo III de este Código. Si esta

solicitud es presentada dentro de los seis meses de la fecha de vigencia de este Código la concesión les será acordada siempre que exista caudal suficiente una vez abastecidas las concesiones aludidas en los arts. 276 y 277 y el uso aludido en los arts. 278, 279 y 280.

Art. 283. — Prórroga de plazos

El Poder Ejecutivo por decreto y a solicitud de la autoridad de aplicación podrá prorrogar los plazos establecidos en los arts. 276, 277, 278, 282, 284 y 286.

TÍTULO II — Disposiciones finales

Art. 284. — Reglamentación

El Poder Ejecutivo reglamentará el presente Código dentro de los ciento veinte días de su vigencia.

Los reglamentos sobre la materia existentes dictados con relación a la legislación anterior continuarán vigentes en cuanto no contraríen normas de este Código hasta que se expidan otros.

Art. 285. — Derogación

Quedan derogadas las disposiciones de las leyes 2186, 2518, 4513, 4612, 4756 y toda ley y reglamento que se oponga a las disposiciones establecidas por este Código.

Art. 286. — Vigencia

Este Código entrará en vigencia a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial. La falta de reglamentación de este Código no será óbice ni podrá ser invocada para postergar su aplicación a partir de su vigencia.

Art. 287. — Comuníquese, etc.

En la Ciudad de..... a los..... días del mes de..... de 199..
los Señores Gobernadores de las Provincias del Chaco y de Santia-
go del Estero ;

CONSIDERANDO :

Que el Acuerdo de Río Muerto celebrado entre ambas provincias
concedió a la del Chaco el uso del agua del Canal de Dios para
abastecer a poblaciones próximas a la zona servida por el mismo;
Que en un plano de estrecha colaboración y solidaridad ambas
provincias aunaron sus esfuerzos para reacondicionar las obras de
captación y conducción deterioradas y que causas hidrológicas ha-
bían dejado fuera de servicio ;

Que actualmente se requieren nuevas obras para que el agua llegue
a las poblaciones que aquel acuerdo disponía servir ;

Que para su ejecución , operación y mantenimiento ambas provincias
deberán continuar mancomunando sus esfuerzos y tareas;

Para ello resuelven reajustar el marco jurídico de sus relaciones
a cuyo efecto

ACUERDAN

PRIMERO : La concesión de agua que la Provincia de Santiago del
Estero conceda a la del Chaco en virtud del artículo 1º del Acuer-
do de Río Muerto del 19 de noviembre de 1981 con una dotación mí-
nima de m³ 0,20 por segundo será real, permanente, perpetua y conti-
nua ; tendrá por objeto el abastecimiento de las poblaciones de
la Provincia del Chaco próximas al Canal de Dios y se registrá , en
cuanto no se oponga al presente acuerdo y al de Río Muerto citado ,
por los artículos 37 , 54 , 55 , 66 , 73 , 76 , 78 , 80 , 92 y con-
cordantes del código de aguas de la Provincia de Santiago del Es-
tero.

SEGUNDO : La Provincia de Santiago del Estero otorga a la del Chaco una servidumbre de acueducto sobre las tierras de dominio privado y el derecho a usar y aprovechar el tramo del Canal de Dios que va desde el Canal del Desierto al límite interprovincial.

TERCERO : La Administración Provincial de Recursos Hídricos de la Provincia de Santiago del Estero inscribirá en el registro creado por el artículo 17 de código de aguas vigente en ella lo acordado en los artículos prededentes.

CUARTO : La Provincia del Chaco(En esta cláusula se indicarán las obras que la Provincia indicada tomará a su cargo para la reparación y reacondicionamiento de las obras del Canal de Dios y las que se construyan en lo sucesivo en las provincias de Salta y de Santiago del Estero).

QUINTO : Las inversiones que al efecto realice la Provincia del Chaco y las ya realizadas en las obras de la toma y de conducción del Canal de Dios se computarán como pago a cuenta de las cargas que imponen los concesionarios los artículos 31 , 217 , 78 y siguientes del código de aguas de Santiago del Estero.

SEXTO : Constituir el Comité Técnico Interprovincial para coordinar las tareas de conservación , mantenimiento y operación del Canal de Dios creado por el artículo 2º del Acuerdo Complementario celebrado entre las provincias del Chaco y Santiago del Estero de junio de 1986 que se regirá por las siguientes normas :

a) El Comité se reunirá cuatrimestralmente para evaluar la marcha de las obras y de los trabajos de construcción y manteni -

miento del Canal y cada vez que uno de sus integrantes pida una reunión de emergencia . De cada reunión se elevarán sendos informes a los respectivos gobiernos .

b) Las decisiones se adoptarán por unanimidad. En caso de desacuerdo , cada representante pedirá instrucciones a sus respectivos gobiernos para que busquen la coincidencia de sus voluntades.

c) La Administración Provincial de Recursos Hídricos de Santiago del Estero no constituirá nuevos derechos sobre el agua conducida por el Canal de Dios sin el dictamen previo del Comité .

SEPTIMO : La Provincia de Santiago del Estero pondrá el presente acuerdo en conocimiento del resto de las provincias de la cuenca del río Pasaje-Juramento-Salado .

En prueba de conformidad firman el presente los señores Gobernadores de las Provincias del Chaco y de Santiago del Estero en dos ejemplares de idéntico tenor y a un solo efecto .

ANTEPROYECTO DE NOTA DE LA PROVINCIA DEL CHACO A LA COFAPYS

Resistencia,.....

Señor Presidente de la
Comisión Federal de Agua Potable y Saneamiento
S / D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con referencia a la nota 182 del 5 de febrero de 1987 del ex-Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento en la que expresaba : "Respecto al acuerdo complementario del contrato suscripto entre las Provincias del Chaco y Santiago del Estero , el Art. 1º establece que dicho acuerdo "se formaliza sin término prefijado" , lo que implica que cualquiera de las partes puede rescindirlo en cualquier momento ; entendemos que de esta forma no queda asegurada la continuidad de la fuente de agua para las poblaciones mencionadas , por lo que sería necesario otro acuerdo complementario o la modificación del primero , por el cual el término de duración del contrato sería a perpetuidad o por lo menos a 20 años que es el período de diseño de las obras "

Ante esa objeción , la Provincia del Chaco gestionó ante la de Santiago del Estero la celebración de un acuerdo adicional cuya copia adjunto.

En consecuencia el derecho que la Provincia de Santiago del Estero acordara a la del Chaco no solo emana y se rige por los acuerdos interprovinciales aludidos sino también por el código de aguas de la provincia concedente que privilegia ese derecho frente al de cualquier otro usuario por cuanto el agua se destina al abastecimiento de poblaciones (Art.55 inc.1) . Además el caracter de permanente que le da la libre disponibilidad del

agua concedida garantiza su derecho a recibir preferentemente la dotación de agua en el mismo rango que las demás poblaciones adjudicatarias de concesiones (Art.67) . Ello implica que recibirá agua aún en caso de escasez ya que el código aludido autoriza a la Administración Provincial de Recursos Hídricos de Santiago del Estero a someter la totalidad de las concesiones de un mismo rango a turno o bien a reducir su caudal proporcionalmente y en pie de igualdad (Art.68).

En cuanto a la duración de la concesión , el acuerdo adicional citado aclara que no tiene término prefijado , o sea que es de duración ilimitada . La concesión sin límite de tiempo es la que el artículo 71 del código de aguas de Santiago del Estero declara perpetua .

Por lo expuesto considero que se han subsanado debidamente los obstáculos de orden jurídicos que pudieran oponerse a la disposición de agua del Canal de Dios por la Provincia del Chaco. Para que no quede duda sobre la coincidencia de opiniones entre las autoridades de ambas provincias adjunto nota del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero avalando la presente comunicación.

Agradeceré a Ud.me haga saber si con la aclaración precedente queda subsanada la objeción planteada por la nota que motiva la presente y en su defecto me formule los comentarios del caso. Saluda atentamente.

Como cortesía convendría adjuntar a esta nota un ejemplar del código de aguas aludido cuya copia se glosa en anexo IX .

Presentación.....	1
Síntesis.....	3
PARTE PRIMERA :IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL MARCO JURIDICO EXISTENTE	
I.El río ,Pasaje-Juramento-Salado.....	6
II.Dominio y jurisdicción.....	6
III.El Tratado de Cbra Corral (Salta - S.del tero , 12/2/1965).....	7
IV.El Comité de Cuenca.....	9
V.Acuerdo entre las provincias de Salta y de Santiago del Estero para construir el Canal de Dios.....	11
VI.Acuerdo entre las provincias del Chaco y Santiago del Estero para prolongar el canal.....	11
VII.Obras realizadas por el Chaco en la Provincia de Salta.....	12
VIII.Un consorcio de usuarios para el Ca - nal de Dios.....	13
IX.Derecho del Chaco a recibir agua del Ca - nal de Dios.....	13
X. Derechos de las otras provincias de la cuenca.....	14
XI.El uso del agua fuera de la cuenca.....	15
XII.Causa jurídica del derecho del Chaco so - bre el agua del canal.....	18
XIII.Naturaleza jurídica del derecho del Chaco sobre el agua.....	19

XIV. Naturaleza jurídica de las obras	20
XV. Concepto de "excedente". Calidad y magnitud de la concesión.....	21
XVI. Conclusiones y recomendaciones.....	22

PARTE SEGUNDA: ACCION PROPUESTA

I. Insuficiencia del marco jurídico.....	26
II. Fortalecimiento de las relaciones jurídicas en la cuenca.....	29
III. Comunicación de las obras y proyectos a las de- mas provincias de la cuenca	35
IV. Fortalecimiento de las relaciones jurídicas enta- bladas entre el Chaco y Santiago del Estero.....	37
V. La negativa del COFAPYS.....	44
VI. ACCIONES PROPUESTAS.....	45
Notas.....	47

ANEXOS

Tratado de Cabra Corral (Salta-Santiago del Estero , 12/2/1965) y adicional del 13/5/1971.....	I
Convenio para construir el Canal de Dios (Salta-San- tiago del Estero, 16/3/1978).....	II
Acuerdo de Río Muerto por el que la Provincia de Santiago del Estero concede a la del Chaco agua del Canal de Dios.....	III
Acuerdo Complementario del Acuerdo de Río Muerto ce- lebrado en Santiago del Estero en junio de 1986.....	IV
Acuerdo entre la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos del Chaco y la Administración Provincial de Recursos Hídricos de Santiago del Estero.....	V

Resolución 82/71 creando el Comité de Cuenca Hídrica del río Pasaja-Juramento-Salado	VI
Convenio creando la Comisión de Apoyo a la Obra de toma del Canal de Dios (T/4/1987).....	VII
Nota N° 182/87 del ex-Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento	
Código de Aguas de Santiago del Estero.....	IX
Proyecto de Acuerdo entre el Chaco y Santiago del Estero.....	X
Proyecto de nota de la Provincia del Chaco a la COFAPYS.....	XI